



Fascículo X

Año 1952

37348

NOTA

En esta entrega queda recogido el final de la legislación y jurisprudencia correspondiente al año 1952. Omitimos los índices parciales de este fascículo por estar imprimiéndose los generales, alfabético y cronológico, de todo el año, que en breve remitiremos a nuestros lectores.

Atendiendo las sugerencias que se nos han hecho, a partir del inmediato año 1953 incluiremos en esta publicación la legislación y jurisprudencia referente a arrendamientos rústicos y urbanos, recopilando, en primer lugar, todas las disposiciones vigentes en esta fecha, así como las normas jurisprudenciales más destacadas.

convendrá con la Caja Nacional del Seguro el tanto por ciento que sobre la base de los referidos ingresos deberá abonar a la Caja, a cuyo efecto servirá de tope máximo el tipo más beneficioso de cuantos tengan concertados dicho Caja con las demás colaboradoras.

El Instituto Social de la Marina estará exento de constituir fianza.

Art. 68. El Instituto Social de la Marina dedicará el sobrante que en cada ejercicio pueda producirse a constituir un fondo de reserva, con el doble fin de mejorar las prestaciones a los asegurados y compensar los pasivos que en algún ejercicio puedan producirse, sin que, en ningún caso, tales excedentes reviertan a la Caja Nacional. El Ministerio de Trabajo condicionará la distribución y aplicación del citado fondo de reserva.

Art. 69. El Instituto Social de la Marina atenderá todas las prestaciones en que consiste el Seguro de Enfermedad. A tal objeto, podrá utilizar los servicios sanitarios ya existentes en favor de los pescadores y contratar con otras Entidades, Instituciones o Establecimientos la prestación de las asistencias médico-quirúrgicas.

Para establecer nuevas instalaciones sanitarias, el Instituto Social de la Marina podrá atenerse al Plan Nacional que tiene ya aprobado para dotar de asistencia médica a los pescadores, si bien recabará en cada caso la aprobación de la Caja Nacional del Seguro, que emitirá informe a fin de coordinar la instalación proyectada con su propio plan de instalaciones, resolviendo las discrepancias la Dirección General de Previsión.

El Instituto Social de la Marina satisfará a los Colegios Farmacéuticos, y al precio oficial que se establezca, el importe de los medicamentos que deban suministrarse a los asegurados y beneficiarios a su cargo.

El Instituto Social de la Marina mantendrá el régimen de libre elección de farmacia por los asegurados, y cuando no las tuviese propias, y si existieran farmacias de la Caja Nacional, tendrán igual libertad con respecto a éstas.

Art. 70. El personal médico sanitario y auxiliar que atienda a los servicios del Seguro de Enfermedad del Instituto Social de la Marina queda sometido a las normas acordadas por este Ministerio para su nombramiento, retribución y volumen de asistencias que estén a su cargo.

El personal facultativo que actualmente preste servicio en los establecimientos del Instituto Social de la Marina se estimará consolidado en las plazas que desempeña, si su nombramiento es de fecha anterior al 18 de julio de 1936, o si siendo posterior, lo fué en concurso intervenido por la Dirección General de Sanidad.

Art. 71. Las prestaciones económicas serán satisfechas por el Instituto Social de la Marina tomando en principio como base mínima lo prevenido en el artículo 6.º del Decreto de 29 de septiembre de 1943, o sea, el salario de siete pesetas por quince días mensuales trabajados, salvo la mayor retribución que en cada caso pueda determinarse, y sin perjuicio de que, a propuesta de dicho Instituto, el Ministerio de Trabajo establezca, a efectos de tales prestaciones, cuadros de salarios medios para cada profesión y zona o región pesquera.

Art. 72. La Caja Nacional del Seguro de

Enfermedad facilitará al Instituto Social de la Marina cuantos datos e instrucciones solicite para el mejor desenvolvimiento de su función colaboradora, y ambas Entidades, de mutuo acuerdo, establecerán los modelos que sean precisos para el desarrollo de dicha colaboración. Del acuerdo se dará cuenta a la Dirección General de Previsión.

Art. 73. El concierto entre ambos Organismos se llevará a efecto en el plazo que señale el Ministerio de Trabajo al fijar la nueva cuota única, donde se incluya también el porcentaje destinado a atender al Seguro de Enfermedad; tal concierto se ajustará a las presentes normas, y, en cuanto a ellas no esté previsto, a las establecidas por las disposiciones generales referentes a la actuación de Entidades colaboradoras, teniendo presente la especialidad del régimen, determinada por el Decreto de 29 de septiembre de 1943 y sus disposiciones complementarias.

Art. 74. Todas las discrepancias que pudiesen surgir al formalizar el concierto, y durante la aplicación del mismo, serán sometidas a resolución de la Dirección General de Previsión.

SECCIÓN III

De las Federaciones y Agrupaciones de Mutualidades, Montepíos e Igualatorios

Art. 75. A efectos del régimen de conciertos establecidos por Decreto de 2 de marzo de 1944, las Agrupaciones, Federaciones de Mutualidades y Montepíos y las de Igualatorios de asistencia médico-farmacéutica legalmente reconocidas se regirán en la forma especial que a continuación se detalla.

Art. 76. Las Entidades jurídicas a que se refiere el artículo anterior tendrán personalidad para llevar a efecto el concierto con la Caja Nacional del Seguro de Enfermedad para las prestaciones que en ella se deleguen, previa declaración de su carácter de Entidad colaboradora.

Las Mutualidades e Igualatorios que deseen adherirse al concierto colectivo suscrito por las Entidades, a que se refiere el artículo 75, deberán manifestar su conformidad y acreditar ante la Federación que reúnen los requisitos que señala el Decreto de 2 de marzo de 1944, sus normas complementarias y, de modo especial, que aceptan la obligación de constituir la fianza correspondiente. La Federación quedará obligada o comunicar a la Dirección General de Previsión las Entidades adheridas, el volumen de asegurados de cada una, acreditar la fianza que hayan constituido y los demás datos que sean interesados, pudiendo la citada Dirección exigir el cumplimiento de los requisitos que garanticen las obligaciones contraídas y oponer su veto a las adhesiones que no estime justificadas.

Art. 78. Las Mutualidades, Montepíos e Igualatorios a que se refiere el artículo anterior, previo el cumplimiento de sus preceptos estatutarios, podrán, con el preaviso de un año, desligarse de la Federación respectiva y recobrar su personalidad anterior, siempre que, además, se sometan a las normas generales establecidas.

Art. 79. En las Federaciones y Agrupaciones, al fijar el tanto por ciento necesario para atender a las prestaciones totales del Seguro.

servirá de base el tipo más beneficioso de entre los que se establezcan para las restantes Entidades colaboradoras, siempre que el concierto se celebre sobre la base de un tanto alzado.

Art. 80. Las Federaciones y Agrupaciones percibirán de las Empresas las primas correspondientes a la totalidad de los productores asociados en las Entidades que las integren.

Art. 81. Durante la primera etapa de implantación del Seguro, las Instituciones afectadas por este régimen ingresarán en la Caja Nacional el canon para gastos de inspección sanitaria previsto para las Entidades colaboradoras, y que afectará a la totalidad de las primas que recauden, aunque se efectúe por un tanto alzado inferior a las mismas.

Art. 82. El porcentaje concertado pasará a las Mutualidades en la parte que correspondá a cada una de ellas, y éstas deberán destinar exclusivamente el sobrante que pueda producirse como diferencia entre la cantidad recibida y el costo del Seguro, en la forma que se determine en sus propios Reglamentos, o a los siguientes fines:

a) Mejorar las prestaciones de sus afiliados en el Seguro Obligatorio;

b) Constituir un fondo especial de reserva para evitar en lo posible tener que acudir a derramas en ejercicios de supersiniestrabilidad. Las cantidades que se destinen a dicho fondo no podrán ser gravadas con los gastos de administración de la Entidad.

Art. 83. Los Igualatorios federados recibirán el importe de las prestaciones sanitarias de los beneficiarios que se les haya señalado en la cuantía convenida con la Caja Nacional o Entidad colaboradora que lleve a efecto las prestaciones económicas.

Art. 84. Los productores comprendidos en el Seguro de Enfermedad que estén asociados en Mutualidades agrupadas o federadas se entenderán automáticamente asistidos por el Seguro por medio de la Mutualidad a que pertenezcan, salvo que expresamente, y por escrito, manifestaren su deseo en contra. En este caso, podrán elegir la Entidad que haya de facilitarles las prestaciones del Seguro, dentro del término de quince días. Si no lo efectuasen, tal facultad de elección revertirá a la Empresa.

Art. 85. Las prestaciones sanitarias que deban practicar las Entidades agrupadas o federadas se realizarán por las mismas, bien directamente o por el servicio especial de la Federación o Agrupación. En este último caso habrá de establecerse un Reglamento que regule el régimen de asistencias, y que será aprobado por la Dirección General de Previsión. En dicho Reglamento deberá preverse la libre elección de Médico por parte del asegurado de entre los que figuren en la escala de la Federación.

Art. 86. Corresponderá a la Federación o Agrupación coadyuvar en las funciones de intervención y vigilancia sobre Entidades comprendidas en el concierto colectivo y adheridas al mismo, debiendo dar cuenta de las infracciones o anomalías que observe a la Inspección Técnica de Previsión Social.

TITULO II

Normas de aplicación del Reglamento

CAPITULO PRIMERO

SECCION UNICA

Excepciones y reciprocidad

Art. 87. La facultad concedida al Seguro para determinar los casos de excepción a que se refiere el párrafo segundo del artículo 19 del Reglamento corresponde a la Dirección General de Previsión, así como la de aplicar o no los beneficios del Seguro a los extranjeros mencionados en la segunda parte del artículo 18 del mismo.

CAPITULO II

SECCION UNICA

De las primas y sus recargos

Art. 88. La prima del Seguro Obligatorio de Enfermedad, durante la primera etapa de implantación en que se halla actualmente, se fija con carácter revisable en el 5,013 por 100 de las rentas de trabajo percibidas por los asegurados, cuyas liquidaciones periódicas se efectuarán según las modalidades en vigor.

Art. 89. El recargo establecido en el artículo 145 del Reglamento, sobre las primas del Seguro de Enfermedad no satisfechas durante los diez primeros días del mes, no será aplicable a los pagos de dichas primas correspondientes al de septiembre de 1944 que se hubieran incluido en las liquidaciones presentadas hasta el día 10 inclusive del mes de noviembre del citado año.

CAPITULO III

SECCION UNICA

De las prestaciones

Art. 90. Las prestaciones obligatorias a cargo del Seguro de Enfermedad en la primera etapa de implantación serán la asistencia de Medicina general, farmacia e indemnización económica por enfermedad.

Art. 91. Se autoriza al Consejo General de Colegios Farmacéuticos al objeto de que dicte las normas sobre el despacho de medicamentos a las Entidades concertadas, y sobre la forma de presentación de facturas a través de los Colegios provinciales y cobro de las mismas por su Tesorería. Tales normas, serán previamente aprobadas por la Dirección General de Previsión.

Art. 92. El Ministerio de Trabajo, a propuesta del Instituto Nacional de Previsión, determinará los gastos de administración del Seguro que correspondan a dicho Organismo, y lo relativo a la iniciación de la reserva reglamentaria expresada en un tanto por ciento no superior al diez de la totalidad de las primas del Seguro. La cantidad calculada por dicho concepto se consignará en los Presupuestos generales del Estado, y será satisfecha al citado Instituto, debiendo incrementarse en lo posible las expresadas reservas, a cuyo objeto el Instituto utilizará para el Seguro de Enfermedad instalaciones, personal y servicio de los restantes Seguros Sociales a su cargo.

TITULO III

Normas sobre afiliación

CAPITULO UNICO

SECCION UNICA

Afiliación general, especial y su tramitación

Art. 93. A los efectos jurídicos correspondientes, y de conformidad con lo establecido por las disposiciones transitorias, sexta de la Ley y segunda del Reglamento, y ratificando lo dispuesto sobre el particular por la legislación anterior a la presente refundición, "la afiliación inicial" al Seguro de Enfermedad quedó señalada para todos los trabajadores fijos desde el 1.º al 31 de mayo de 1944".

En el plazo de quince días, a partir de la expresada fecha de 31 de mayo de 1944, los empresarios quedaron obligados a presentar en las Oficinas del Instituto Nacional de Previsión las hojas de afiliación que previamente hubiera facilitado la Caja Nacional del Seguro, o a tramitar dicha afiliación a través de las Entidades que solicitaron ser colaboradoras de la expresada Caja.

Art. 94. Declarada obligatoria la afiliación de los obreros fijos y de los del ramo de la construcción, los de este ramo que no tengan carácter fijo, los eventuales, los portuarios y los trabajadores a domicilio, así como los padres de familia numerosa a quienes no alcance la obligatoriedad de afiliación, podrán afiliarse al Seguro, siempre que voluntariamente y de una forma expresa, y por escrito, lo soliciten, y asimismo podrán darse de baja en cualquier momento con el preaviso de treinta días. Las Empresas quedarán obligadas a satisfacer la parte de prima que les corresponda.

Independientemente de lo dispuesto en el párrafo anterior, los padres de familia numerosa pueden acogerse a los beneficios del Seguro, aunque no reúnan los requisitos legales exigidos, viniendo las Empresas obligadas a satisfacer la parte de prima correspondiente.

Ratificando lo dispuesto con anterioridad a esta Orden, la facultad de los asegurados para elección de la Entidad por la que hayan de recibir las asistencias del Seguro se declaró concluida para los trabajadores fijos al expirar el plazo señalado en el artículo 93 para su "afiliación inicial".

Posteriormente esta facultad se atribuye con carácter obligatorio a cada Empresa, que decidirá su ingreso en la Caja Nacional o en las Entidades colaboradoras de esta última.

Art. 95. La Caja Nacional distribuirá directamente a sus asegurados los documentos acreditativos que correspondan, y por conducto de la Organización Sindical y demás Entidades colaboradoras en los otros casos, quienes deberán cubrir en tales documentos los datos relativos a aquellas actividades que, por virtud del concierto, les sean conferidos. La recaudación de primas y la prestación de asistencia reglamentaria del Seguro de Enfermedad se declara iniciada el día 1.º de septiembre de 1944.

Art. 96. La afiliación al Seguro se efectuará en la Caja Nacional, bien directamente o a través de las Entidades colaboradoras, siendo aquella la que dará el número correspondiente a los asegurados, beneficiarios y

Empresas. Si la afiliación se efectuara por medio de la Entidad colaboradora, ésta enviará a la Caja, por duplicado, tanto la hoja individual de afiliación como el padrón de Empresas.

Art. 97. Las Entidades colaboradoras aceptarán la afiliación de cualquier asegurado que lo solicite, siempre que éste se halle dentro de la órbita profesional y territorial a que se extiende su radio de acción, con arreglo a sus Estatutos y a las normas que se hayan dictado o en lo sucesivo se dicten por el Ministerio de Trabajo.

TITULO IV

Principios sobre elección de Entidad colaboradora y de facultativos. Derechos de los asegurados

CAPITULO PRIMERO

SECCION UNICA

De la elección de Entidad

Art. 98. Los trabajadores que sean afiliados, transcurrido el plazo "inicial", bien por pertenecer a Empresas de nueva creación, por no haber cumplido su Empresa la obligatoriedad de afiliación en el indicado término, o por llevar posteriormente los requisitos de asegurado que señalan las disposiciones reglamentarias, podrá elegir la Entidad de la que deseen recibir las prestaciones del Seguro, haciéndolo así constar en el padrón de afiliación. Si no ejerciesen esta facultad en el plazo de quince días, la ejercerá su Empresa en los quince días siguientes.

Si la elección recayera sobre una Entidad colaboradora que, posteriormente, perdiese tal carácter, tanto los asegurados como las Empresas podrán elegir nueva Entidad en la forma y plazos que se dejan expuestos.

El procedimiento señalado en el primer párrafo de este artículo será aplicable a las Empresas de nueva creación y a la admisión de nuevo personal.

Art. 99. Lo dispuesto en el artículo anterior no impide que durante la tramitación de los conciertos autorizados por Decreto de 2 de marzo de 1944, los asegurados pertenecientes a Entidades que concierten sigan percibiendo de las mismas las prestaciones correspondientes, a no ser que manifiesten expresamente su voluntad en contrario.

Art. 100. El cambio de Entidad aseguradora podrá efectuarse por el asegurado, o, en su defecto, por la Empresa, durante un plazo de sesenta días, anteriores al 1.º de diciembre de 1946, de acuerdo con el Decreto de 14 de septiembre de 1945. En lo sucesivo podrá efectuarse con igual antelación al transcurso de un año de permanencia en la misma Entidad.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el cambio podrá efectuarse en cualquier época, si concurren las circunstancias siguientes:

- Cambio de Empresa del asegurado;
- Traslado de su residencia a otra localidad, si en la nueva no tuviera organización la misma Entidad de que viniera percibiendo prestaciones;
- Cuando, a petición suya, la Dirección General de Previsión así lo acuerde.

La solicitud interesando el cambio se dirigirá a la Caja Nacional del Seguro, quien, con su informe y el de la Entidad afectada, la cursará a la Dirección General de Previsión. El plazo para que se emita su informe a la Caja la Entidad colaboradora será de diez días, y si no lo efectuase, se entenderá como favorable a lo solicitado. La Caja cursará el expediente a la citada Dirección General en el término de veinte días.

CAPITULO II

SECCION UNICA

De la elección de facultativo

Art. 101. Desde el 1.º de junio de 1946, todos los asegurados podrán elegir libremente el facultativo que deseen les preste asistencia en Medicina general y especialidades, si las hubiera, de los que están adscritos a su zona y formen, además, parte del Cuadro de facultativos de la Entidad en que se encuentren asegurados.

Art. 102. Para el cambio de facultativos quedan obligados los asegurados a comunicar por escrito su deseo a la Inspección Sanitaria del Seguro, la cual debe resolver, en el plazo máximo de tres meses. Si no lo hiciese se aplicará el principio del silencio administrativo en beneficio del solicitante, quien podrá elegir el facultativo en la forma prevenida en el artículo anterior.

Si fuera denegada la pretensión del asegurado, podrá éste recurrirla, en el plazo de quince días, ante el Director general de Previsión, quien resolverá en definitiva.

CAPITULO III

SECCION UNICA

Derechos de los asegurados

Art. 103. Las prestaciones para casos de enfermedad, que se fijan en las Reglamentaciones de Trabajo, se entenderán con cargo al Seguro de Enfermedad hasta el límite normal de dicho régimen. Si en las Reglamentaciones se contuviesen prestaciones superiores a las concedidas por el Seguro, o las Empresas tuvieran establecidas otras más beneficiosas, deberán ser respetadas y mantenidas a cargo de dichas Empresas.

Art. 104. En los casos que un asegurado o sus beneficiarios tuvieran derecho a prestaciones sanitarias farmacéuticas, a tenor de lo dispuesto en los artículos 41 y 63 del Reglamento del Seguro, éstas serán facilitadas a cargo exclusivo de la Entidad que haya percibido la última prima.

Art. 105. Cuando se produzcan reclamaciones contra alguna Entidad colaboradora por incumplimiento de prestaciones, la Caja Nacional, previa comprobación del derecho que asiste al asegurado, procederá a facilitarlas cargando a aquélla su importe, según tarifa aprobada por el Ministerio de Trabajo, y dando cuenta a la Dirección General de Previsión para la comprobación y sanciones a que hubiere lugar.

TITULO V

Médicos y personal sanitario

CAPITULO PRIMERO

SECCION PRIMERA

De la clasificación general de los facultativos

Art. 106. Los facultativos de Medicina general del Seguro Obligatorio de Enfermedad se clasifican en los siguientes grupos:

a) Los Médicos de la Obra Sindical "18 de Julio" que hubieran ingresado mediante concurso-oposición con fecha anterior al 4 de agosto de 1943;

b) Los Médicos de Asistencia pública domiciliaria, mientras estén desempeñando plaza de asistencia con dicho carácter, en virtud de nombramiento legal;

c) Los Médicos que prestasen sus servicios en Entidades privadas que practicaban el Seguro de Enfermedad con nombramiento de facultativo, propietario o supernumerario anterior al 18 de julio de 1936, y que hubieran ingresado en dichas Entidades mediante concurso legal anterior a la expresada fecha;

d) Los Médicos libres que, autorizados para ejercer en España su profesión, hayan solicitado formar parte en las Escalas del Seguro en los plazos que oportunamente se concedieron para ello, o que posteriormente se les haya incluido en virtud de reclamación motivada.

Los facultativos de los apartados a) y c), cubrirán las plazas correspondientes a los asegurados en las Entidades a que se refieren dichos apartados, y cuando concursen otras plazas acreditarán suficientemente ante el Ministerio de Trabajo la legalidad de su nombramiento.

Los facultativos a que se refiere el apartado d) deberán, además, de figurar en las Escalas de facultativos del Seguro, aprobadas y publicadas por el Ministerio de Trabajo, y únicamente podrán ejercer sus derechos en la localidad que se les asigne, salvo en los casos que, previa solicitud de los interesados a la Dirección General de Previsión, y oída la Inspección de los Servicios Sanitarios del Seguro, hayan sido autorizados por aquélla para el cambio de localidad.

Art. 107. Las Escalas de especialistas del Seguro se integrarán por los especialistas que hubieran ingresado en las Entidades a que se refieren los apartados a) y c) del artículo anterior, en las condiciones y en las fechas que allí se dejan expuestas, por los facultativos de la Obra Maternal e Infantil del Instituto Nacional de Previsión con nombramiento anterior al 4 de agosto de 1943, y por los Médicos libres especialistas que reúnen las condiciones señaladas en el apartado d) del artículo precedente, y cumplan asimismo los requisitos de figurar en las Escalas de la especialidad de la población en que soliciten ejercer sus funciones. Para los traslados se estará a lo dispuesto en el mencionado artículo.

SECCION SEGUNDA

Escalas especiales de facultativos

Art. 108. Independientemente de las Escalas generales de facultativos del Seguro a que se refieren los dos artículos anteriores,

los qu
Marina
Catalu
solidad
por re
articul
Federa
momen
cial de
Previsi
pecto
pero e
gurado
más, f
tivos
ción.
En
produ
cultati
serán c
vistas

De l

Art.
sión, co
de 194
de la
menzar
tes par
les y
la asis
normas
Art.
cultati
gurado
por la
que pro
visión
ten, co
das en
su situ
respon
petará
tarlo n
Art.
hará p
cada u
cional
nierdo
núcleos
Art.
se cuí
cada u
superio
a quier
les res
tarlo. A
vicios S
ción y
realizar
el cupo
la cifra
la cifra
tituir u
Art.
en una
cido de
cultati
llos a c
Escalas
product

los que pertenezcan al Instituto Social de la Marina o a la Federación de Mutualidades de Cataluña y tengan en ambas Entidades consolidados sus puestos; los del citado Instituto, por reunir las condiciones previstas en el artículo 70 de esta disposición, y los de la Federación, por figurar en sus Escalas en el momento que se aprobó el Reglamento especial de la misma por la Dirección General de Previsión, podrán ejercer sus actividades respecto al Seguro Obligatorio de Enfermedad, pero exclusivamente con respecto a los asegurados en ambas Entidades, salvo que, además, figuren en la Escala general de facultativos del Seguro de que se deja hecha mención.

En todo caso, las vacantes que pudieran producirse en las referidas Entidades de facultativos adscritos a la asistencia del Seguro serán cubiertas con arreglo a las normas previstas en la presente disposición.

CAPITULO II

SECCION PRIMERA

De los concursos para cubrir las vacantes

Art. 109. La Dirección General de Previsión, conforme al Decreto de 14 de septiembre de 1945, y en un plazo de tres meses, a partir de la publicación de la presente Orden, comenzará a convocar los concursos pertinentes para cubrir las plazas de Médicos generales y especialistas que sean necesarios para la asistencia en el Seguro, con arreglo a las normas contenidas en el presente capítulo.

Art. 110. El cálculo de necesidad de facultativos, en relación con el número de asegurados para cada localidad, será efectuado por la Inspección de los Servicios Sanitarios, que propondrá a la Dirección General de Previsión el anuncio de las vacantes que resulten, con excepción de las plazas desempeñadas en dicha fecha por facultativos que, por su situación y número en las Escalas, les correspondan ocupar vacante, a los que se respetará en su cargo, sin necesidad de solicitarlo nuevamente.

Art. 111. La declaración de vacantes se hará por zonas de asistencia, especificando en cada una las que pertenezcan a la Caja Nacional y a las Entidades colaboradoras, teniendo en cuenta, al señalar las zonas, los núcleos de residencia de los productores.

Art. 112. Para la declaración de vacantes se cuidará de que el cupo de asegurados de cada una no sea, salvo casos excepcionales, superior al que tengan asignado los Médicos a quienes, de acuerdo con el artículo 110, se les respeta su plaza, sin necesidad de solicitarlo. A tal objeto, la Inspección de los Servicios Sanitarios, antes de realizar la distribución y proponer la declaración de vacantes, realizará un reajuste previo, incrementando el cupo de estos facultativos hasta alcanzar la cifra que se tome como base para constituir la cifra que se tome como base para constituir una vacante.

Art. 113. Las Entidades colaboradoras que en una localidad tengan un número reducido de asegurados no podrán designar facultativos propios, y habrán de aceptar aquellos a quienes, de acuerdo con el orden de las Escalas, vecindad de zona, residencia de los productores o distribución de cupos, deban

quedar adscritos tales asegurados. Dichos facultativos podrán ser, indistintamente, de Asistencia pública domiciliaria, de la Caja Nacional o de otras Entidades colaboradoras. En todo caso, la designación la propondrá a la Dirección General de Previsión la Inspección de Servicios Sanitarios del Seguro.

Art. 114. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos que anteceden, las Entidades colaboradoras y la Caja Nacional están obligadas, en el plazo improrrogable de un mes, a partir de la inserción de esta Orden en el "Boletín Oficial del Estado", a remitir a la Inspección Provincial correspondiente de los Servicios Sanitarios del Seguro en relación nominal de asegurados, en la que harán constar si son individuales o con beneficiarios, residencia, domicilio y facultativo que tienen asignados, y cuantos otros datos reclamare la citada Inspección.

El incumplimiento de lo que dispone el párrafo anterior llevará implícita la pérdida de derechos para elección de facultativos de la Entidad, en la forma prevista en el artículo 132, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa que la Dirección General de Previsión juzgue oportuno exigir.

Art. 115. Se exceptúan de las normas para la designación del personal facultativo y sus auxiliares: el Estado, la Provincia y el Municipio, cuando dispongan del personal titulado y especializado que desee utilizar para realizar prestaciones médicas al personal que directamente dependa de los mismos, pudiendo, además, utilizar a tal objeto sus propias farmacias para las prestaciones de esta última naturaleza.

Dichas excepciones se solicitarán de la Dirección General de Previsión, que resolverá en cada caso lo procedente.

Art. 116. La Dirección General de Previsión, al anunciar los concursos indicará al mismo tiempo las vacantes, los datos y aclaraciones que se consideren convenientes.

Art. 117. Finalizado el plazo de admisión de instancias, la Inspección, una vez cumplidos los trámites fijados, procederá a remitir a la Dirección General de Previsión las propuestas de nombramientos, tanto de las plazas concursadas como de las respetadas.

Art. 118. Tanto la Caja Nacional como la Obra "18 de Julio" y las Entidades que practiquen el Seguro de Enfermedad, en caso de producirse vacantes, y mientras no se anuncien los oportunos concursos para cubrirlos, elegirán provisionalmente sus facultativos por riguroso orden de colocación en las Escalas, y con las preferencias que se dejan establecidas.

Art. 119. Los facultativos de Medicina general, una vez resuelto el concurso de provisión de vacantes, tendrán un solo plazo de quince días para recurrir contra dicha resolución ante el Ministro de Trabajo.

Art. 120. Una vez cubiertas todas las vacantes de Medicina general del Seguro, con arreglo a las normas contenidas en los artículos precedentes, las que se produzcan en lo sucesivo se cubrirán en la siguiente forma:

a) El 50 por 100 con sujeción a las citadas normas:

b) El otro 50 por 100 por concurso-oposición libre entre Licenciados y Doctores en Medicina, con arreglo al procedimiento que

en la oportuna convocatoria se señalará. Si se agotasen totalmente las Escalas, el procedimiento de ingreso será únicamente el de concurso-oposición.

SECCIÓN SEGUNDA

Cupo de familias

Art. 121. El número máximo de familias asignadas a cada facultativo de Medicina general no podrá ser superior a 500. Cada dos asegurados individuales se considerará como una familia a todos los efectos.

CAPITULO III

SECCIÓN PRIMERA

De las especialidades

Art. 122. Las especialidades del Seguro se ordenan en tres grupos distintos, recogiendo en el primero aquellas que producen un mayor número de asistencias, siguiendo las otras en orden decreciente en cuanto al volumen de trabajo a desarrollar.

La distribución es la siguiente:

Primer grupo:

Cirugía general.
Otorrinolaringología.
Oftalmología.
Enfermedades de los aparatos respiratorio y circulatorio.
Aparato digestivo.
Dermatología.
Pediatria (sin Puericultor de zona).

Segundo grupo:

Radiología. (Cuando la Radiología vaya unida a la Electrología se incluye en el primer grupo.)
Laboratorio.
Odontología.

Tercer grupo:

Traumatología.
Neuro-Psiquiatria.
Urología.
Nutrición y Secreciones Internas.
Ginecología.
Pediatria (con Puericultor de zona).
El número máximo de familias que se adscriben a estos grupos es el que sigue:

Grupo 1.º	Grupo 2.º	Grupo 3.º
10.000	12.000	15.000

Los Tocólogos tendrán un tope máximo de 7.500 familias. Tanto la Obra Maternal e Infantil del Instituto Nacional de Previsión como las Entidades colaboradoras que presten tal especialidad seguirán, provisionalmente, con el sistema de retribución del personal facultativo y auxiliar que tuvieran establecido.

Art. 123. El personal auxiliar sanitario de practicantes tendrá un cupo máximo de asistencia de 1.500 familias, y el de comadronas, 3.000.

Los practicantes y enfermeras que presten servicio en Dispensarios o Clínicas serán retribuidos por el sistema de hora de trabajo.

Art. 124. No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, el número de familias

adscritas al personal facultativo y auxiliar podrá variarse por el Ministerio de Trabajo, a propuesta razonada de la Inspección de los Servicios Sanitarios del Seguro.

SECCIÓN SEGUNDA

De las incompatibilidades

Art. 125. Será incompatible el desempeño por un mismo facultativo de una plaza de Médico de zona con los servicios de cualquier especialidad, así como también existirá la incompatibilidad para prestar servicios en dos especialidades y para tener más de una residencia. Será también incompatible el cargo de Inspector de Servicios Sanitarios del Seguro con el ejercicio profesional privado y el de Inspector o Funcionario de cualquier categoría de la Caja Nacional con el de facultativo o auxiliar facultativo del Seguro, y con cargos o actividades de las Entidades colaboradoras que practique el Seguro.

CAPITULO IV

SECCIÓN ÚNICA

De los facultativos de la Obra "18 de Julio"

Art. 126. Los facultativos de la Obra "18 de Julio" cubrirán las plazas que correspondan a los asegurados a través de los Servicios Sindicales, y se confirman en sus destinos los que se encuentren actualmente desempeñando puestos en la Caja Nacional del Seguro o en las Entidades colaboradoras.

Si la Obra necesitara efectuar más nombramientos que los que actualmente han realizado, utilizarán los Médicos de sus propias Escalas, cualquiera que sea el lugar donde se encuentren adscritos, y agotadas, se atenderán a las normas comunes dictadas al resto de las Entidades colaboradoras para la designación de dicho personal.

Art. 127. Se concede a los facultativos de la Obra "18 de Julio" el plazo de un mes, a partir de la publicación de esta Orden en el "Boletín Oficial del Estado", para que puedan solicitar de la Dirección General de Previsión su alta en los demás grupos de la Escala del Seguro, dentro de las siguientes condiciones:

a) Los Médicos que prestasen sus servicios en Entidades privadas que practicasen el Seguro de Enfermedad, con nombramiento de facultativo propietario o supernumerario anterior al 18 de julio de 1936, y que hubieran ingresado en las mismas mediante concurso u oposición legal, anterior a la expresada fecha, siempre que dichas Entidades se hayan integrado en la Obra, podrán solicitar el pase al grupo de Sociedades o al general. En el de Sociedades se les colocará en el lugar correspondiente por su antigüedad, y en el general, con arreglo al lugar que resulte una vez se le aplique el baremo reglamentario de méritos y puntos que se ha tenido en cuenta para dicho grupo.

En todo caso, a la solicitud deberán acompañar certificado y documentos fehacientes de su condición de Médico de Sociedad, anterior al 18 de julio de 1936, expresando su antigüedad y procedimiento de ingreso. Si pidieran el grupo libre, acompañarán la justificación de los méritos puntuables, conforme al baremo expresado, y justificarán la espe-

cialidad, si solicitaran figurar como especialistas;

b) Los Médicos de la Obra que no estuvieran comprendidos en el primer párrafo del apartado a) podrán asimismo solicitar su alta en el grupo general de la Escala, observando los plazos y procedimientos expresados anteriormente.

Los facultativos de la Obra "18 de Julio" que utilicen el derecho que se establece en el presente artículo, sólo podrán figurar en la Escala que hayan solicitado su alta.

CAPITULO V

SECCIÓN ÚNICA

Del orden de preferencia del personal facultativo

Art. 128. Los facultativos de Asistencia pública domiciliaria tendrán preferencia para cubrir las plazas de asistencia dentro de su distrito, con la sola excepción de que, existiendo vacante de una Entidad colaboradora en el propio distrito, dicha plaza estuviera desempeñada por un facultativo que figure en las Escalas de Sociedad o del "18 de Julio" de la localidad, en cuyo caso les será adjudicada automáticamente, sin necesidad de anunciarla, como comprendida en las excepciones de que se deja hecho mérito en el artículo 110.

Art. 129. En el orden de preferencia señalado en el artículo anterior para ocupar vacantes de la Caja Nacional y Entidades colaboradoras, seguirán los facultativos que figuren en las Escalas de Medicina general de la Obra "18 de Julio", y los grupos de Sociedades, los cuales podrán solicitar cualquiera de las plazas anunciadas, y se tendrán en cuenta para la adjudicación de vacantes el orden de prelación en dichas Escalas.

Art. 130. Agotadas las Escalas de Sociedades, se cubrirán las vacantes por facultativos de las Escalas respectivas del grupo libre de Medicina general, por riguroso orden de prelación en las mismas.

Art. 131. Si el número de vacantes de Medicina general es superior al de facultativos que figuren en las Escalas de la localidad, las sobrantes podrán ser solicitadas por el resto de los facultativos que figuren en las de la provincia, adjudicándose por el orden de preferencia expresado en los artículos anteriores, y dentro de cada grupo por la antigüedad o purluación. Si a pesar de esto aún quedaran vacantes que cubrir, la Inspección Provincial de Servicios Sanitarios del Seguro de Enfermedad lo pondrá con la máxima urgencia, por conducto de su Jefatura, en conocimiento de la Dirección General de Previsión, al objeto de que adopte las medidas pertinentes.

Art. 132. Se faculta a la Caja Nacional y Entidades colaboradoras para elegir su facultativo entre los que, por su situación y número en las Escalas, y de acuerdo con las normas expresadas, les corresponda ocupar una de las vacantes anunciadas, a cuyo efecto la Inspección, una vez terminado el concurso y antes de elevar la propuesta de nombramiento, facilitará a cada una de las Entidades colaboradoras la relación de Médicos que hubieran solicitado la correspondiente Entidad colaboradora y reunan las condiciones expresadas.

Art. 133. Los nombramientos de facultativos especialistas tendrán el carácter de provisionales hasta tanto se den las especialidades con carácter obligatorio. Será condición indispensable para dicho nombramiento provisional que figuren en las Escalas de especialistas y con residencia en la localidad donde van a actuar. La Caja Nacional y Entidades colaboradoras comunicarán a la Inspección los facultativos elegidos, para conocimiento y aprobación de la Dirección General de Previsión. Por el Ministerio de Trabajo, y cuando las especialidades se ejercen con carácter obligatorio, se dictarán las normas definitivas para dichos nombramientos, que, en líneas generales, se ajustarán a lo prevenido para Medicina general.

CAPITULO VI

SECCIÓN ÚNICA

Obligaciones de los facultativos y de las Entidades con respecto a aquéllos

Art. 134. Los facultativos del Seguro tendrán que residir forzosamente en la localidad para la que se efectúe el nombramiento.

Art. 135. La toma de posesión de los facultativos se realizará en la Inspección Provincial, comenzando a ejercer sus funciones el día primero del mes siguiente al que tome posesión, o en fecha anterior, si las necesidades del servicio así lo aconsejan.

Art. 136. Las Entidades colaboradoras entregarán a los Médicos relación nominal de asegurados individuales y con beneficiarios, domicilio de los mismos y una copia de tales datos a la Inspección de Servicios Sanitarios. Igualmente lo hará con las altas y bajas los últimos días de cada mes.

CAPITULO VII

SECCIÓN ÚNICA

Vacaciones, licencias y cotización de Seguros Sociales de los facultativos y sus auxiliares

Art. 137. Los Médicos del Seguro Obligatorio de Enfermedad, cualquiera que sea su categoría y clase, lo mismo los pertenecientes a la Caja Nacional del Seguro que a las demás Entidades colaboradoras; Servicios Sindicales, Instituto Social de la Marina, Cajas de Empresas, Igualatorios, Federaciones, Mutualidades y Compañías que practiquen dicho Seguro tienen derecho a una licencia anual no inferior a treinta días, percibiendo íntegramente durante la misma los honorarios que les correspondan.

El personal auxiliar facultativo: practicantes, enfermeras y comadronas disfrutará de una licencia, también retribuida, de veinte días.

Art. 138. Independientemente de la vacación anual que se deja establecida en el artículo anterior, el personal comprendido en el mismo tendrá derecho a licencia durante el tiempo que dure una enfermedad, debidamente comprobada. En el primer mes disfrutará la totalidad de sueldo o emolumentos; en los dos siguientes, la mitad de los mismos, y en el resto, tendrán sólo derecho a la reserva del puesto.

Art. 139. Para la efectividad de lo ordenado, todas las Entidades colaboradoras, in-

cluso la Caja Nacional, de acuerdo con la Inspección de los Servicios Sanitarios del Seguro, establecerán los turnos de vacaciones.

El sistema a seguir será la sustitución del facultativo por el más próximo de residencia, y, si ello no fuera posible, se utilizarán los comprendidos en la lista del Seguro que no tengan colocación, y, por último, los titulados ajenos a dicha lista. En los casos de existir supernumerarios, éstos serán los sustitutos. Igual norma se seguirá con los auxiliares de Medicina.

Art. 140. La vacación anual de que se deja hecho mérito no podrá ser concedida si la sustitución del facultativo o de su auxiliar no pudiera realizarse, por no existir otros en la localidad o no haber forma material de realizar la sustitución.

Art. 141. Los emolumentos que se atribuyen al personal que los sustituya durante el período de vacaciones serán del 50 por 100 del sueldo establecido. Los que sustituyan en caso de enfermedad disfrutará el 50 por 100 los tres primeros meses, y la totalidad, en los siguientes.

Art. 142. Las ausencias y permisos de corta duración, por exigencias personales o sociales de carácter ineludible, serán solicitadas de la Inspección de Servicios Sanitarios y autorizadas por la misma.

Los Médicos y auxiliares facultativos al servicio de la Caja Nacional y de las Entidades colaboradoras, adscritos a la asistencia de los asegurados y beneficiarios de dicho Seguro, no estarán sujetos, por las cantidades que perciben con cargo al mismo, a los regímenes obligatorios de Subsidios y Seguros Sociales, sin que, por tanto, pueda serles descontada cantidad alguna por dicho concepto.

Tampoco podrá serles descontado ningún otro gravamen que se liquide con cualquiera de dichos Seguros o Subsidios.

Art. 143. Lo dispuesto sobre vacaciones, sustituciones y exención de Seguros y Subsidios Sociales, sobre el personal facultativo y auxiliar, regirá hasta tanto se apruebe el Reglamento general de Servicios del Seguro de Enfermedad. Hasta entonces cualquier petición que signifique cambio de residencia, o sustitución será solicitada, por conducto de la Inspección de Servicios Sanitarios, a la Dirección General de Previsión.

CAPITULO VIII

SECCIÓN ÚNICA

De los honorarios

Art. 144. Los honorarios de los facultativos de Medicina general serán de 4,50 pesetas por familia y mes, computándose a estos efectos dos asegurados individuales como una familia.

Los de especialistas, practicantes, enfermeras y comadronas, provisionalmente y hasta tanto se establezcan las especialidades y servicios auxiliares citados con carácter obligatorio, serán, como mínimo, los que figuran en las Bases de Trabajo aprobadas por la Sección Industrial del Jurado Mixto de Trabajo de Médicos, practicantes y demás especialidades al servicio de Sociedades y Mutualidades benéfico-sanitarias de Madrid en 1.º de julio de 1934, en relación con la remuneración que se fija en dichas Bases para los Médicos de Asistencia general.

CAPITULO IX

SECCIÓN ÚNICA

De las correcciones al personal facultativo y auxiliar

Art. 145. De conformidad con el artículo 113 del Reglamento del Seguro de Enfermedad, de 11 de noviembre de 1943, se crea el Tribunal encargado de resolver las cuestiones relativas al incumplimiento, por parte del personal sanitario, de las obligaciones que les correspondan en cuanto a la asistencia de los asegurados y beneficiarios del Seguro, así como de los preceptos dimanantes de las Ordenes que a tal objeto se les dicten por los Organismos competentes. Se considerará personal sanitario los Médicos, practicantes, comadronas y enfermeras.

Art. 146. El referido Tribunal estará integrado por un representante de la Dirección General de Previsión, otro de la Dirección General de Sanidad y un Vocal del Consejo Nacional de Sanidad, que ostentará la Presidencia; todos ellos serán nombrados por el Excelentísimo señor Ministro de Trabajo, a propuesta en terna de dichos Organismos. Actuará como Secretario, sin voto, un funcionario del Cuerpo Técnico Administrativo del Ministerio de Trabajo, con destino en la Sección del Seguro de Enfermedad de dicho Departamento, a cuya Sección se vincula la Secretaría del Tribunal. Este funcionario será designado por el Ilustrísimo señor Director general de Previsión.

En el caso de que las cuestiones que tenga que examinar el Tribunal se refieran al personal sanitario dependiente de la Caja Nacional del Seguro o de las Entidades colaboradoras previstas en el Decreto de 2 de marzo de 1944, el referido Tribunal será ampliado con dos Vocales designados por el Ministerio de Trabajo; uno, representando a la Asociación profesional de que trata en el artículo 152 de la presente refundición, o, en su defecto, a la Inspección de los Servicios Sanitarios del Seguro, y otro, de libre designación.

Art. 147. La acción para denunciar el incumplimiento por parte de los facultativos y sus auxiliares de las obligaciones que les impone el Seguro, podrá ejercitarse por los asegurados y por las Entidades colaboradoras de quienes deperda dicho personal. La denuncia deberá ser escrita y dirigida a la Inspección de Servicios Sanitarios de la provincia respectiva.

Art. 148. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, la propia Inspección Sanitaria del Seguro de Enfermedad podrá actuar por su iniciativa y suspender, en caso de notoria gravedad, al facultativo o a sus auxiliares en el ejercicio de su función en el Seguro, a reserva del fallo definitivo que recaiga en el expediente que deberá comenzar a instruirse dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes. La suspensión deberá comunicarse a la Entidad a que pertenezca el facultativo, con una antelación de tres días, para que pueda disponer lo conveniente, al objeto que evitar queden sin asistencia los asegurados.

Art. 149. En los casos previstos en los artículos anteriores, el Jefe provincial de la Inspección Sanitaria designará, de entre los

Inspectores de la plantilla de la misma, un Juez instructor para incoar el expediente disciplinario, auxiliándole en la práctica de las diligencias un Secretario nombrado de entre los funcionarios de la Delegación de la Caja Nacional del Seguro.

Una vez abierto el expediente, se procederá a la averiguación de los hechos denunciados, siendo obligatorio oír al inculcado, a quien se pasará el oportuno pliego de cargos, que deberá contestar en el plazo de ocho días, a contar de la notificación.

Concluido el expediente, lo elevará a Instructor, con propuesta razonada, por conducto de la Jefatura Provincial a la Inspección Central de Servicios Sanitarios, y ésta, con su informe, a la Sección del Seguro de Enfermedad de la Dirección General de Previsión, quien lo someterá al conocimiento del Tribunal de que se deja mérito.

Art. 150. Una vez recaído acuerdo del Tribunal, cuyo fallo será definitivo, la Secretaría lo pondrá en conocimiento del interesado, Inspección Central de Servicios Sanitarios, Caja Nacional del Seguro o Entidad colaboradora, si el expedientado prestare servicios en algunas de estas últimas.

Art. 151. Mientras no se apruebe el Reglamento general de Servicios del Seguro, será de aplicación, a efectos de sanciones, las normas disciplinarias establecidas para el Cuerpo de Médicos de Asistencia pública domiciliaria y sus auxiliares. Si no fueran exactamente aplicables, el Tribunal las señalará a su prudente arbitrio y en la posible analogía con aquéllas.

CAPITULO X

SECCIÓN ÚNICA

De los intereses profesionales y mutualistas de los facultativos

Art. 152. Los Médicos y Farmacéuticos, estos últimos en cuanto no tengan establecimiento abierto de su propiedad, y el personal auxiliar de practicantes, enfermeras y comadronas, adscritos al Seguro Obligatorio de Enfermedad y a las Entidades de cualquier género que practiquen el Seguro de Accidentes del Trabajo, o tengan a su cargo la prestación de Subsidios o Seguros Sociales, constituirán una Asociación profesional, que ostentará su representación ante el Ministerio de Trabajo. Dicha Asociación tendrá como finalidades específicas la de armorizar los intereses profesionales con las necesidades sociales del Seguro, elevar propuestas a la Superioridad de mejoras, en relación con los servicios o intereses que representen; informar sobre aquellos problemas que se sometan a su consideración y proceder con carácter inmediato a crear una Mutualidad nacional que cubra en lo posible los riesgos de accidentes, invalidez, vejez, muerte, viudedad, orfandad y demás modalidades previsoras.

Tanto la Asociación como la Mutualidad dependerán de la Dirección General de Previsión, quien dispondrá lo conveniente en orden a la efectividad de lo dispuesto en el presente artículo.

CAPITULO XI

De la inspección sanitaria del Seguro y de los servicios farmacéuticos del mismo

SECCIÓN PRIMERA

De las prestaciones y servicios farmacéuticos

Art. 153. En el plazo de tres meses, a partir de la publicación de la presente refundición, el Instituto Nacional de Previsión concertará con el Consejo Nacional de los Colegios Farmacéuticos un convenio, en que se garantice el buen servicio de todas las farmacias, con una tarifa reducida especial para el Seguro.

De conformidad con el artículo 32 de la Ley de 14 de diciembre de 1942, los 66 y 128 de su Reglamento, si no se llegase a un acuerdo sobre el particular, el Seguro de Enfermedad podrá establecer farmacias propias, las cuales quedarán sometidas al control de la Inspección de los Servicios Sanitarios del Seguro de Enfermedad. El Ministerio de Trabajo, oyendo a la Dirección General de Sanidad y a las Entidades colaboradoras, fijará la tarifa obligatoria para las localidades en que no existan.

Art. 154. Las prestaciones farmacéuticas del Seguro, interin se apruebe el petitorio oficial que haya de determinarlas, se realizará en la siguiente forma:

a) Podrán ser objeto de dispensación (despacho) todas las fórmulas magistrales;

b) Serán asimismo dispensadas las especialidades farmacéuticas consideradas como urgentes en el petitorio especial vigente para la beneficencia general, y, complementariamente, los preparados que consideren indispensables los facultativos del Seguro, siempre que los mismos no puedan ser objeto de preparación extemporánea por las oficinas de Farmacia, que figuren en el petitorio y sean autorizados por la Inspección de Servicios Sanitarios del Seguro.

Art. 155. La Inspección de los Servicios Sanitarios del Seguro de Enfermedad dispondrá de un Laboratorio Central de análisis, atendido por los Inspectores Farmacéuticos que integran la plantilla de dicha Inspección. El expresado Laboratorio tendrá como fin primordial comprobar la bondad de los productos farmacéuticos dispensados para el Seguro. De las infracciones comprobadas se instruirán el oportuno expediente, en el que, sin perjuicio de la responsabilidad que se deduzca y sea exigida con respecto al Seguro, se trasladará a la Dirección General de Sanidad para la exigencia de las que en orden a la legislación general del ramo pudieran producirse.

El expresado Laboratorio podrá establecer filiales en los lugares que las conveniencias del servicio lo exijan.

SECCIÓN SEGUNDA

De las facultades de la Inspección de Servicios Sanitarios del Seguro

Art. 156. El personal facultativo de la Caja Nacional y de las Entidades colaboradoras pertenecientes al Seguro de Enfermedad están, en el aspecto sanitario, bajo la vigilancia y control de la Inspección de los Servicios Sanitarios del expresado Seguro.

Art. 157. Cualquier asegurado podrá formular a la Inspección de Servicios Sanitarios denuncias en relación con las faltas de asistencia que juzgue oportuna.

Art. 158. Si la denuncia efectase a la actuación del personal facultativo o auxiliar del mismo, la Inspección de Servicios Sanitarios, una vez comprobados los hechos, procederá de la siguiente forma:

Si la falta o delito es incompatible con la buena marcha del servicio, suspenderá de empleo y sueldo al personal y remitirá el expediente, una vez concluso y tramitado con arreglo a los requisitos señalados, al Tribunal que se deja expresado.

En los demás casos procederá a abrir una información para, a la vista de la misma, determinar si procede o no la apertura de expediente.

Art. 159. No podrá adoptarse resolución alguna contra el personal sanitario que preste servicios en el Seguro, como consecuencia de la actuación del mismo, por Organos o Entidades ajenas a la Inspección de Servicios Sanitarios, debiendo limitarse a poner los hechos en su conocimiento, y aquella procederá con arreglo a lo prevenido en el artículo anterior.

Art. 160. Cuando la Inspección, bien directamente o con motivo de una denuncia, comprobase faltas en la actuación de alguna Entidad colaboradora, Farmacéutico o asegurado, que pueda afectar a la buena marcha del Seguro en relación con la asistencia, procederá a la apertura de una información, que será tramitada, con la correspondiente propuesta de sanción, a la Dirección General de Previsión, quien resolverá en definitiva. En los casos en que la índole de la falta y la buena marcha del servicio lo aconseje, la Inspección de Servicios Sanitarios podrá tomar la determinación que juzgue oportuna dando inmediata cuenta a la Dirección General de Previsión, a reserva de su resolución definitiva.

Art. 161. Los plazos y trámites para las informaciones, aperturas y trámite de expediente e imposición de sanciones se dictarán por la Jefatura de Inspección de los Servicios Sanitarios del Seguro, debiendo aprobarse previamente por la Dirección General de Previsión.

SECCIÓN TERCERA

De los Inspectores de Servicios Sanitarios

Art. 162. La Escala de Inspectores de Servicios Sanitarios del Seguro de Enfermedad estará constituida:

a) Por los Inspectores que estén en funciones y que, previos los trámites reglamentarios, hubieren sido nombrados por acuerdo del Consejo del Instituto Nacional de Previsión, y por los que, en virtud de contrato de trabajo anterior al 31 de octubre de 1945, se encuentren actualmente en período de prácticas y merezcan, al final de las mismas, la calificación de aptos, otorgada por la Jefatura del citado Servicio de Inspección;

b) Por los que en lo sucesivo, y para cubrir las plazas de nueva creación o vacantes que se produzcan, ingresen mediante el sistema de concurso-oposición.

Art. 163. El concurso-oposición para cubrir las plazas a que se refiere el artículo anterior será juzgado por un Tribunal com-

puesto por el Jefe de la Inspección de Servicios Sanitarios del Seguro, como Presidente, que podrá delegar en otro Inspector, y como Vocales un Catedrático de la Facultad de Medicina, un representante de la Dirección General de Previsión, otro de la Asociación profesional, a que se refiere el artículo 152, o, en su defecto, del Consejo General de Colegios Médicos; otro de la Dirección General de Sanidad, otro de la Delegación Nacional de Sanidad y un Inspector de Servicios Sanitarios del Seguro de Enfermedad, que actuará, además, como Secretario. Los Vocales del Tribunal tendrán sus suplentes designados por los Organismos de que se deja hecha mención.

Los aspirantes aprobados en el concurso-oposición realizarán un período de prueba de seis meses, que tendrá carácter eliminatorio, siendo preceptivo para su definitiva incorporación al cargo el informe favorable de la Jefatura Nacional de la Inspección.

Art. 164. La Dirección General de Previsión fijará las normas del concurso-oposición y acordará las convocatorias correspondientes. Dicho concurso-oposición será convocado en ocasión de vacantes, y a propuesta de la Inspección Nacional de los Servicios Sanitarios del Seguro.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. Conforme a la disposición transitoria 2.ª de la Ley de 14 de diciembre de 1942 y hasta tanto que el Seguro de Enfermedad otorgue todas las prestaciones previstas en su Reglamento, continuará en vigor el Seguro Obligatorio de Maternidad, conforme a sus disposiciones privativas y a las contenidas en el art. 24 de la presente refundición.

Segunda. Durante el plazo de seis meses a partir del día en que aparezca esta refundición en el *Boletín Oficial del Estado*, queda prohibida su reproducción en cualquier clase de publicaciones, reservándose tal derecho el Ministerio de Trabajo.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Corresponde a la Dirección General de Previsión acordar las resoluciones que exijan la aplicación de esta refundición, y asimismo las normas interpretativas procedentes.

Segunda. Se declaran extinguidas por haberse cumplido en los plazos a que se refieren los preceptos contenidos en las Ordenes y Resoluciones emanadas del Ministerio de Trabajo de que se hará mérito, y se ratifica el valor jurídico de las situaciones que al amparo de las mismas se produjeron.

Las referidas Ordenes y Resoluciones son las que siguen:

Orden de 21 de julio de 1943 (B. O. del E. de 4 de agosto), Orden de 16 de septiembre de 1943 (B. O. del E. del 22), Orden de 8 de octubre de 1943 (B. O. del E. del 8), Orden de 15 de octubre de 1943 (B. O. del E. del 18), Orden de 10 de noviembre de 1943 (B. O. del E. del 12) Circular de la Dirección General de Previsión de 26 de enero de 1944 (B. O. del E. del 27), Orden de 16 de mayo de 1944 (B. O. del E. del 22), Orden de 26 de junio de 1944 (B. O. del E. del 28) y Orden de 27 de julio de 1944 (B. O. del E. del 28).

Tercera. Se derogan expresamente, por en-

contrarse incluídas dentro del presente texto refundido, las siguientes disposiciones:

Orden de 8 de marzo de 1944 (*B. O. del E. del 16*), Orden de 8 de abril de 1944 (*B. O. del E. del 14*), Orden de 4 de mayo de 1944 (*B. O. del E. del 6*), Orden de 8 de mayo de 1944 (*B. O. del E. del 16*), Orden de 10 de mayo de 1944 (*B. O. del E. del 14*), Orden de 17 de mayo de 1944 (*B. O. del E. del 28*), Orden de 3 de junio de 1944 (*B. O. del E. del 15 de julio*), Orden de 27 de julio de 1944 (*B. O. del E. del 1 de julio*), Orden del 1 de julio de 1944 (*B. O. del E. del 9*), Orden de 17 de julio de 1944 (*B. O. del E. del 19*), Orden de 27 de julio de 1944 (*B. O. del E. del 28*), Orden Comunicada de 8 de agosto de 1944, Orden de 21 de septiembre de 1944 (*B. O. del E. del 30*), Orden de 30 de septiembre de 1944 (*B. O. del E. del 1 de octubre*), Orden de 14 de octubre de 1944 (*B. O. del E. del 15*), Orden del 19 de diciembre de 1944 (*B. O. del E. del 25*), Orden Comunicada de 16 de junio de 1945, Orden Comunicada de 21 de junio de 1945, Orden de 5 de julio de 1945 (*B. O. del E. del 19*) y Orden de 28 de julio de 1945 (*B. O. del E. del 7 de agosto*).

Cuarta. Se deroga, asimismo, cualquier otra disposición que se oponga al texto de la presente refundición.

465 SEGUROS Y SUBSIDIOS SOCIALES. — ACCIDENTES DEL TRABAJO

Orden del Ministerio de Trabajo de 24 de noviembre de 1952, *B. O. del E. núm. 340*, del 5 de diciembre de 1952.

I.—REASEGURO.—Se modifican los artículos 2.º y 4.º de la Orden de 18 de diciembre de 1947.

II.—TEXTO LITERAL.—La experiencia recogida en la práctica del reaseguro de accidentes del trabajo en cuanto se refiere al exceso de pérdidas desde la publicación de la Orden de 18 de diciembre de 1947, aconseja la conveniencia de modificar algunos de los preceptos de esta disposición legal para evitar, en lo posible, el desequilibrio económico que la progresiva elevación del costo de la siniestralidad ha producido.

Dicho objetivo ha de lograrse elevando, por una parte, los plenos de conservación establecidos en el artículo 2.º, y, por otra, las primas señaladas en el artículo 4.º.

La modificación de los plenos de conservación ha sido técnicamente determinada ya, pero no así la que deben sufrir las primas vigentes, por haberse estimado preciso conocer los resultados técnicos de este reaseguro correspondientes al ejercicio en curso, que es el décimo de práctica de esta cobertura, para contar así con la mayor base experimental posible, tanto en número de siniestros como en su más actual valoración. Por ello, la solución de esta parte del problema será objeto de nueva disposición complementaria de la presente.

Y a efecto de no dilatar más las soluciones posibles, siquiera sea en la parte ya técnicamente determinada,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

1.º El artículo 2.º de la Orden de 18 de diciembre de 1947 queda redactado así:

"Los plenos de conservación serán elegi-

dos por las entidades aseguradoras de accidentes del trabajo entre la siguiente escala: 150.000, 200.000 y 250.000 pesetas."

Si a alguna entidad aseguradora de las no comprendidas en el artículo 8.º interesa pleno de conservación distinto de los comprendidos en la escala anterior, podrá concertar con el Servicio de Reaseguro cuál haya de ser el pleno de excepción y su prima correspondiente."

2.º El artículo 4.º de la mencionada Orden queda redactado así:

"Las primas de esta cobertura ilimitada en los reaseguros de excesos de pérdidas se ajustarán, provisionalmente, a la siguiente escala:

Plenos de 150.000 pesetas ...	2,50 por 100
Plenos de 200.000 pesetas ...	2 por 100
Plenos de 250.000 pesetas ...	1,50 por 100

Estas primas o cuotas se referirán a las percibidas por las reaseguradas en el ramo de accidentes del trabajo por su cartera de riesgos graves, incapacidad permanente y muerte."

3.º Esta Orden empezará a regir a las cero horas del día primero de enero próximo, debiendo las entidades aseguradoras a quienes afecta comunicar al Servicio de Reaseguro de Accidentes del Trabajo la cuantía del pleno a que deseen acogerse, antes del día 20 de diciembre del corriente año.

466 SEGUROS Y SUBSIDIOS SOCIALES. — SEGURO OBLIGATORIO DE ENFERMEDAD

Orden del Ministerio de Trabajo de 1 de diciembre de 1952, *B. O. del E. núm. 341*, del 6 de diciembre de 1952.

I.—DERECHOS DE REGISTRO.—De las entidades que practican el Seguro Obligatorio de Enfermedad para el año 1953.

II.—TEXTO LITERAL.—En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 29 y 30 de la Orden de este Ministerio de 16 de enero de 1947 (*Boletín Oficial del Estado* del 18), en relación con el artículo 8.º del Decreto de 13 de diciembre de 1946, sobre los derechos de registro de las entidades que practiquen el Seguro Obligatorio de Enfermedad en Régimen de colaboración y de acuerdo con lo prevenido en el Decreto de 2 de marzo de 1939 (*Boletín Oficial del Estado* del día 5).

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de Previsión, se ha servido disponer:

Artículo 1.º Los derechos de Registro de las Compañías Mercantiles, Montepíos y Mutualidades, Cajas de Empresa y cualesquiera otra clase de entidades que practiquen el Seguro Obligatorio de Enfermedad en régimen de colaboración, se fijan para el año 1953 en 0.40 pesetas por asegurado que tuvieran adscrito en 1 de enero del referido año.

Los de los Igualatorios que practiquen únicamente las prestaciones sanitarias del Seguro se fijan en 0.15 pesetas por asegurado.

Art. 2.º Las entidades a que se refiere el artículo anterior se dirigirán en el mes de enero próximo a la Dirección General de Previsión (Registro de Entidades Colaboradoras del Seguro Obligatorio de Enfermedad) declaración jurada en la que hagan constar el

número de asegurados que tuvieran adscritos en aquella fecha.

El importe de estos derechos se satisfará en el plazo y forma que se determina en cada caso, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto de 2 de marzo de 1939 (*Boletín Oficial del Estado* del día 5) y serán precisamente imputados a los gastos de administración que dichas Entidades tengan legalmente autorizados por la práctica del Seguro Obligatorio de Enfermedad.

Art. 3.º Los derechos de registro de las Compañías Mercantiles, Montepíos, Mutualidades y cualesquiera otra entidad que practique el Seguro Obligatorio de Enfermedad son independientes de aquellos que le correspondan satisfacer por la práctica de otros Seguros o por la naturaleza de su persona jurídica.

467 DEPARTAMENTOS MINISTERIALES, INSTITUCIONES Y ORGANISMOS OFICIALES.—INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION

Orden del Ministerio de Trabajo de 1 de diciembre de 1952, B. O. del E. núm. 341, del 6 de diciembre de 1952.

I.—BALANCES.—Se aprueban los balances técnicos-contables del Instituto Nacional de Previsión correspondientes a los años 1946, 1947 y 1948.

II.—TEXTO LITERAL.—Conforme al cometido reservado a la Asesoría General y Técnica de Previsión Social de este Departamento, en virtud de lo dispuesto en el apartado e) de artículo 2.º del Decreto de 22 de febrero de 1946, se ha efectuado por la Comisión Especial Revisora destacada de entre su seno la revisión de los balances del Instituto Nacional de Previsión relativos a los ejercicios 1946, 1947 y 1948, de los que se ofrecen, como conclusión de tal labor, los resultados siguientes:

1.º Los balances y anejos correspondientes a las contabilidades del Instituto Nacional de Previsión, sus Cajas Nacionales de Accidentes de Trabajo y Subsidios Familiares y la Mutualidad de la Previsión acusan con fidelidad los saldos de las operaciones que aparecen sentadas en los respectivos libros de Contabilidad.

2.º Existe conformidad entre la recaudación y pagos y las anotaciones en registros y cuentas individuales.

3.º La constitución de las pensiones y dotaciones infantiles se ha efectuado en consideración a las oposiciones hechas en cada período y con arreglo a lo establecido en las tarifas oficiales.

4.º Las aportaciones del Estado a los distintos Seguros figuradas en los Presupuestos Generales han sido percibidas y distribuidas por el Instituto entre los diversos fondos con sujeción a las normas legales vigentes.

5.º Las reservas matemáticas corresponden en las fechas de cada balance a las obligaciones técnicas contraídas.

6.º Las reservas especiales de Previsión están debidamente constituidas y sus inversiones reúnen garantías de seguridad y afianzamiento.

7.º En el conjunto de las inversiones realizadas se han cumplido las disposiciones vigentes en cuanto a la clase, interés y proporcionalidad.

8.º Los gastos de administración del Instituto Nacional de Previsión y sus Cajas Nacionales están comprendidos en cuentas mensuales, debidamente contabilizados y justificados.

Debiendo someterse a igual revisión los balances aprobados con posterioridad por el Consejo del Instituto Nacional de Previsión, en cumplimiento del trámite legal que garantiza ante el Estado el normal desenvolvimiento de la organización técnico-contable de dicha Institución.

Este Ministerio ha tenido a bien:

1.º Aprobar los balances técnicos-contables del Instituto Nacional de Previsión correspondientes a los años 1946, 1947 y 1948, de conformidad por la Comisión Especial Revisora que los ha examinado; y

2.º Disponer se remitan a la Asesoría General y Técnica de Previsión Social los balances del Instituto Nacional de Previsión correspondientes a los años 1949 y 1950, a fin de que la Comisión que ha efectuado el informe de los ejercicios anteriores proceda sin interrupción a dictaminarlos con la amplitud y criterio establecido en la Orden de este Ministerio de fecha 5 de febrero de 1947.

468 REGLAMENTOS DE TRABAJO.—HOSTELERIA, CAFES, BARES Y SIMILARES. ESTABLECIMIENTOS BALNEARIOS

Sentencia del Tribunal Central de Trabajo de 16 de octubre de 1952.

I.—JARDINERO.—Mantiene el criterio de que un peón de jardines de un establecimiento balneario se rige por el Reglamento de Hostelería y no por el de Establecimientos Balnearios.

II.—RESULTANDO DE HECHOS PROBADOS.—“Que el demandante trabajó por cuenta y orden de la empresa demandada, como peón de jardines en su establecimiento balneario... desde el mes de julio de 1948 a 6 de julio de 1950. Ganaba un jornal de nueve pesetas diarias. Estuvo ocupado en su quehacer diario, durante los domingos, sin que la empresa le abonara retribución extraordinaria.”

III.—SENTENCIA.—En cuanto al derecho aplicable éste lo es erróneamente en la sentencia, ya que los trabajos o servicios de jardinería que prestaba el actor en el establecimiento de la demandada constituyen una actividad laboral expresamente incluida en la Reglamentación de Trabajo de 30 de mayo de 1944, en cuyo ámbito funcional, artículo 2.º, apartado b), se comprende, clasificándose el personal en el artículo 14, y se define específicamente la función de jardinero en el artículo 31; siendo, por tanto, la citada Reglamentación, y no la de 3 de junio de 1949 (Ref. 136/49), la que debe aplicarse al caso controvertido, según ya tiene declarado este Tribunal en sentencia de 15 de diciembre de 1950, bastando observar las definicio-

nes específicas del personal que da esta última para advertir que no se hallan comprendidos quienes, como el actor, realizar trabajos de jardinería; por consiguiente, en adecuada aplicación del artículo 46, apartado a), corresponde percibir al actor el sueldo inicial de 275 pesetas mensuales, sobre cuya base ha de realizarse el cómputo de jornadas dominicales trabajadas, con el aumento del 40 por 100 establecido, en cuyo extremo procede la estimación del recurso interpuesto.

469 NORMAS LABORALES DE APLICACION GENERAL. — CLASIFICACION PROFESIONAL

Resolución de la Dirección General de Trabajo de 23 de julio de 1952.

I.—SEGUROS Y SUBSIDIOS SOCIALES.—Mantiene la doctrina de que la exacción de determinadas cuotas en Seguros y Subsidios Sociales no puede estimarse como clasificación profesional.

II.—RESOLUCION.—La exacción de cuotas con destino a la seguridad no constituye una calificación posterior de los interesados, teniendo en cuenta que la misma debe superarse al procedimiento dispuesto por Orden de 29 de diciembre de 1945.

470 MUTUALIDADES Y MONTEPIOS LABORALES.—CAJA DE JUBILACION Y SUBSIDIOS DE LA INDUSTRIA TEXTIL

Resolución de la Dirección General de Trabajo de 28 de julio de 1952.

I.—OBTENCION DE FIBRAS DE ALGODON Y SUBPRODUCTOS.—No han de afiliarse a esa Caja los trabajadores eventuales o de campaña, sino solamente los fijos.

II.—RESOLUCION.—De acuerdo con el artículo 58 de la Reglamentación de 30 de abril de 1948, las industrias comprendidas en las mismas aportarán a la Caja de Jubilaciones y Subsidios de los Trabajadores Textiles el 8 por 100 a que se contrae la Orden de 17 de junio de 1946 (B. O. del E. del 19), sobre las remuneraciones básicas del personal fijo y a extinguir, por cuya circunstancia resultan excluidos de manera explícita los operarios eventuales o de campaña, tanto para los efectos de prima como para los de prestaciones a que pudieran tener derecho en su día ostentando carácter de permanencia laboral.

471 REGLAMENTOS DE TRABAJO.—FIBRAS ARTIFICIALES

Resolución de la Dirección General de Trabajo de 28 de julio de 1952.

I.—DIAS FESTIVOS.—Se establecen las normas a que en todo caso y previa la autorización correspondiente, puede traba-

jarse en la sección de acabados los días festivos.

II.—RESOLUCION.—De acuerdo con el artículo 80 de las Ordenanzas de 30 de marzo de 1946, se autoriza a determinada empresa para que trabaje en la mencionada sección de cuatro a seis horas durante las fiestas intersemanales, con sujeción a lo dispuesto por el artículo 6.º de la Ley de 13 de julio de 1940, sobre descanso dominical. Los obreros ocupados en dichos trabajos serán los estrictamente indispensables y tendrán una hora libre, cuando menos, en el transcurso de la mañana, mientras se celebren actos religiosos, para cumplimiento de tales deberes, sin que por el aludido interregno se efectúe descuento alguno en la percepción salarial. No se empleará al mismo personal durante toda la jornada de fiestas consecutivas, y cualquiera que sea el tiempo laboral invertido gozará un descanso continuo de veinticuatro horas, dentro de los siete días inmediatos a la fecha respectiva. Las horas indicadas quedarán circunscritas, en su caso, a las puramente necesarias para resolver las circunstancias que motivan la excepción.

472 REGLAMENTOS DE TRABAJO. — HOSTELERIA, CAFES, BARES Y SIMILARES.

Resolución de la Dirección General de Trabajo, de 11 de julio de 1952.

I.—CORRETORNOS.—No tienen derecho preferente a ocupar las plazas de personal fijo que vaguen.

II.—RESOLUCION.—De acuerdo con el artículo 28 de las Ordenanzas de 30 de mayo de 1944, la profesional que ejerce actividades comprendidas en el 21, con la mencionada intermitencia, no tiene derecho a la vacante en plaza fija originada por jubilación de su titular, pues si bien razones de índole moral aconsejan la preferencia del reclamante, tal privilegio no consta en disposición alguna de carácter legal susceptible de imponerlo reglamentariamente, máxime cuando el destino fué cubierto a través de la Oficina de Colocación, con arreglo a la Ley de 10 de febrero de 1943.

473 REGLAMENTOS DE TRABAJO. — HOSTELERIA, CAFES, BARES Y SIMILARES.

Resolución de la Dirección General de Trabajo, de 9 de julio de 1952.

I.—COMEDORES.—Casos en que es obligado para la empresa la instalación de comedores para el personal.

II.—RESOLUCION.—A los efectos del artículo 38 de las Ordenanzas de 30 de mayo de 1944, sobre instalación de comedor, si se trata de personal con derecho a manutención por cuenta de la empresa, deberá habilitarse el correspondiente refectorio para efectuar en el mismo las comidas reglamentarias.

Si los profesionales carecen del mencionado derecho se distinguirá, de acuerdo con el Decreto de 8 de junio de 1938 y Orden para su aplicación, si el régimen laboral concede a los obreros dos horas para comida,

y si no las disfrutaban, viniendo la empresa obligada a instalar comedor en el último de los supuestos, pero no en el primero.

474 REGLAMENTOS DE TRABAJO. — HOSTELERÍA, CAFES, BARES Y SIMILARES.

Resolución de la Dirección General de Trabajo, de 30 de junio de 1952.

I.—GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS.—No se computará para fijar su importe el plus de carestía de vida.

II.—RESOLUCION.—A los fines previstos en el artículo 37 de las Ordenanzas de 30 de mayo de 1944, el plus no repercute en las gratificaciones de 18 de julio y Navidad para el personal comprendido en el apartado b), inciso 1.º, del artículo 96, cuando en cuenta que el 2.º de la de 3 de octubre de 1950 (Ref. 719/50) únicamente dispone que se incrementará el salario real disfrutado por los profesionales al publicarse la misma, sin hacer extensivo el beneficio económico a los restantes emolumentos devengados en la industria.

475 SEGUROS Y SUBSIDIOS SOCIALES. — REGIMEN AGROPECUARIO

Resolución de la Dirección General de Previsión, de 2 de octubre de 1952.

I.—COTIZACION.—Se deniega la petición formulada por un Ayuntamiento de quedar exento del recargo sobre la contribución territorial, por el hecho de que no tenga a su servicio personal sometido al régimen especial agropecuario.

II.—RESOLUCION.—Vista la petición formulada por un Ayuntamiento, solicitando se le declare exento del recargo sobre la contribución territorial rústica en concepto de cuotas para el régimen especial de Seguros Sociales en la agricultura, fundamentada en que la totalidad de los empleados y trabajadores a su servicio están exentos del régimen especial agropecuario de Subsidios y Seguros Sociales, por no realizar ninguno de ellos labor alguna relacionada con esta rama de la producción.

Se declara la improcedencia de dicha petición salvando la competencia del Ministerio de Hacienda, ya que los regímenes de subsidio familiar y seguro de vejez e invalidez, que son los comprendidos en el régimen especial agropecuario de Subsidios y Seguros Sociales, no se fundamentan en la teoría matemática del seguro, que hace proporcional la prima al riesgo, sino en la teoría social de una gran mutualidad nacional, en la que uno es para todos y todos para uno, por lo que la inexistencia de riesgo no presupone en modo alguno la inexistencia de prima.

476 SEGUROS Y SUBSIDIOS SOCIALES.—COTIZACION

Resolución de la Dirección General de Previsión, de 7 de octubre de 1952.

I.—DOMINGOS.—Forma de cotización por las horas extraordinarias trabajadas los domingos.

II.—RESOLUCION.—Planteadas la cuestión acerca de si el jornal del domingo debe computarse al cotizar en Seguros Sociales por las horas extraordinarias trabajadas, se resuelve que dichas horas constituyen un salario cotizante por imperativo de lo dispuesto en el Decreto de 29 de diciembre de 1948 (Ref. 18/49), con la limitación establecida en el de 17 de junio de 1949 (Ref. 168/49) del 15 por 100 del salario contractual.

Por salario contractual ha de entenderse no sólo el salario propiamente dicho y demás complementos acumulables, sino la retribución que efectivamente se recibe como consecuencia del contrato laboral en vigor, en el que están comprendidos el salario dominical.

477 SEGUROS Y SUBSIDIOS SOCIALES.—COTIZACION

Resolución de la Dirección General de Previsión, de 11 de octubre de 1952.

I.—RELACION LABORAL.—No es suficiente la declaración del trabajador negando la existencia de la relación laboral, para que ésta sea estimada, si resultare otra cosa de la inspección practicada oportunamente.

II.—RESOLUCION.—Comprobado en visita de inspección que una trabajadora prestaba sus servicios en la empresa, aun no existiendo contrato, procede levantar acta de liquidación de cuotas, ya que las declaraciones de la productora—las cuales fueron en el sentido de no ser trabajadora por cuenta ajena—son posteriores a la iniciación del expediente y en la visita realizada la empresa reconoció la existencia de relación laboral.

En su virtud, no es de aplicación al presente caso la excepción 1.ª contenida en el artículo 2.º de la vigente ley de contrato de trabajo (Ref. 86/52), puesto que la labor realizada no es de carácter familiar.

478 MUTUALIDADES Y MONTEPIOS LABORALES.—DEPENDENCIA MERCANTIL

Resolución de la Dirección General de Previsión, de 7 de octubre de 1952.

I.—OFICINAS Y DESPACHOS.—Ha de cotizarse por aquellos trabajadores que prestan servicios, aun cuando por ser jubilados del Ejército quede garantizado su futuro.

II.—RESOLUCION.—Procede la afiliación en dicho Montepío de dos militares retirados, aunque la empresa manifiesta que trabajan por cuenta propia prestando servicios ocasionalmente y percibiendo una gratificación según la importancia de la gestión realizada.

El hecho de ser militares retirados y disfrutar de la consiguiente pensión que les pone a cubierto de eventualidades futuras,

no les excluye de la afiliación y cotización del Montepío de la dependencia mercantil por no existir disposición legal que les exima de esta obligación.

479 SEGUROS Y SUBSIDIOS SOCIALES. — SEGURO OBLIGATORIO DE ENFERMEDAD

Resolución de la Dirección General de Previsión de 26 de septiembre de 1952.

I.—ASISTENCIA FACULTATIVA.—No procede el abono de los gastos de asistencia facultativa hechos por el beneficiario que por falta de confianza no acudió al especialista que le correspondía.

II.—RESOLUCION.—Habiendo acudido el asegurado a los servicios de un médico particular, no procede aborarlo los gastos que tal intervención le ocasionó, ya que se ha comprobado que el facultativo del Seguro le prestó en todo momento la asistencia que precisaba y no acudió al especialista por falta de confianza en éste, después de tener en su poder el volante para ingresar en la clínica donde debía ser operado.

480 SEGUROS Y SUBSIDIOS SOCIALES. — SEGURO OBLIGATORIO DE ENFERMEDAD

Resolución de la Dirección General de Previsión, de 26 de septiembre de 1952.

I.—PRESTACIONES.—Las prestaciones por carencia reconocidas a los asegurados, son de aplicación, asimismo, a los familiares beneficiarios.

II.—RESOLUCION.—El privilegio concedido al asegurado que llegase a percibir el subsidio de Vejez e Invalidez, de conservar durante un año el derecho a las prestaciones del Seguro, debe extenderse a los familiares que tengan la categoría de beneficiarios según los artículos 8.º de la Ley y 20 del Reglamento (Ref. 463/52), ya que los derechos de éstos son consecuencia de la condición legal que no se varía, durante un año por el artículo 17 del referido, ni por otro concepto positivo y concreto.

En su consecuencia, los plazos de terminación de asistencia médico-farmacéutica e indemnización económica, en su caso, son los mismos para estos asegurados y beneficiarios que para los de régimen normal.

481 SEGUROS Y SUBSIDIOS SOCIALES. — SUBSIDIO FAMILIAR

Resolución de la Dirección General de Previsión, de 3 de octubre de 1952.

I.—REGIMEN AGROPECUARIO.—No es de aplicación a quien a la vez de realizar trabajos agrícolas es titular de un negocio industrial o mercantil.

II.—RESOLUCION.—Al practicarse la depuración del censo aludido, un subsidiado suscribió cuestionario, según el cual, y también lo informado por la Guardia civil, se dedica de modo principal a trabajar como herrero en forja de su propiedad, cultivando escasos ferrados de tierra.

Confesada por el propio actor la dualidad de actividades a que se dedica: agricultor y herrero, aun cuando se esfuerza en demostrar una mayor atención en los trabajos del campo, que también le apoya el informe último de la Guardia civil, es lo cierto que resulta ineludible la aplicación al caso de la norma excluyente contenida en el segundo párrafo del apartado b) del artículo 10 de la Orden ministerial de 3 de febrero de 1949 (Referencia 44/49), que, con carácter general, establece que "el ser titular de un negocio industrial o mercantil constituye causa de incompatibilidad para la inclusión en el censo de trabajadores autónomos del Régimen Agropecuario".

482 SEGUROS Y SUBSIDIOS SOCIALES. — ACCIDENTES DE TRABAJO

Sentencia del Tribunal Supremo, de 25 de junio de 1952.

I.—IMPRUDENCIA EXTRAPROFESIONAL.—Constituye esta imprudencia el hecho de que un trabajador, a la terminación de la jornada de trabajo y al regresar a su domicilio, intente tomar un tranvía en marcha.

II.—SENTENCIA.—"Deduciéndose de los hechos que la sentencia recurrida declara probados, no combatidos, que el accidente que sufrió el demandante cuando, habiendo terminado su trabajo, salía de la oficina de la demandada y regresaba a su domicilio, se produjo como consecuencia directa e inmediata de la incidencia del propio actor que temerariamente intentó tomar un tranvía en marcha, cayendo al suelo y siendo arrollado, es evidente la improcedencia de estimar que se produjo con ocasión o por consecuencia del trabajo que el accidentado prestaba, lo que requería que hubiese sobrevenido al trasladarse a su casa en forma procedente y guardando las mínimas reglas de prudencia que la más elemental cautela y el medio empleado para su transporte aconsejaban, ya que siendo imputable, como lo es en este caso, la imprudencia por su parte, extraña al trabajo, no puede ser causa de responsabilidad para el patrono a favor del que debe apreciar la causa de exención que a sensu contrario establece el párrafo tercero del art. 6.º de la Ley de Accidentes del Trabajo en la Industria, de 8 de octubre de 1932 y concordantes del Reglamento para su aplicación."

483 SEGUROS Y SUBSIDIOS SOCIALES. — ACCIDENTES DE TRABAJO

Sentencia del Tribunal Supremo, de 19 de junio de 1952.

I.—INCAPACIDADES PARCIAL Y TOTAL.—Norma para la distinción práctica entre la incapacidad parcial y total, para el ejercicio de la profesión habitual.

II.—SENTENCIA.—"Por definición legal —arts. 12 y 13 de la Ley de Accidentes y 13 y 14 de su Reglamento— se considera incapacidad parcial la resultante de un ae-

cidente que produce inutilidad que disminuya la capacidad para el trabajo habitual, e incapacidad total, la inutilidad absoluta para todos los trabajos de aquella profesión, conceptos cuya diferencia es perfectamente clara teóricamente, pero ofrece dificultades prácticas de las diversas profesiones y oficios, pudiéndose seguir, por modo general, que la incapacidad parcial permite la continuidad del ejercicio profesional, si bien con déficit de rendimiento en su doble aspecto de producción del trabajo y de retribución, déficit que puede manifestarse por la imposibilidad de ejecutar alguno de los trabajos exigidos en la profesión u oficio, conservando aptitud para los restantes o porque esa aptitud quede disminuida en todos ellos; en el primer caso, no podrá calificarse como incapacidad parcial cuando la aptitud quede completamente abolida para el trabajo que sea fundamental del oficio, siendo los demás complementarios, pues aun pudiéndose realizar éstos de nada servirían si no se puede realizar aquél, y en el segundo caso, la suma de las retribuciones parciales de la aptitud puede ser tal que prácticamente equivalga a la imposibilidad total."

484 JURISDICCION Y PRO- CEDIMIENTO LABO- RAL.—RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA

Sentencia del Tribunal Supremo, de 6 de junio de 1952.

I.—DENEGACION DE PRUEBAS.—No es procedente el recurso de casación por quebrantamiento de forma, basado en la denegación de pruebas, si no se justifica que esa denegación ha producido indefensión y si no se hizo constar en forma y oportunamente la correspondiente protesta.

II.—SENTENCIA.—"Según reiterada doctrina de esta Sala, es improcedente el recurso de casación por quebrantamiento de forma, cuando, como en el presente caso, no se formuló en su momento procesal oportuno la protesta prevenida en el artículo 466 del Código de Trabajo, siendo también preciso acreditar que la denegación de pruebas alegadas como motivo del recurso produjo indefensión al recurrente, como exige el núm. 3.º del art. 489 en que el escrito se ampara, sin que sea procedente la invocación que se hace del núm. 1.º del art. 487 del mismo Código, por referirse al recurso de casación por infracción de ley y por estar derogado por la Ley de 29 de diciembre de 1949, reformando la jurisdicción laboral."

485 NORMAS LABORALES DE APLICACION GENE- RAL.—MODIFICACIONES DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO

Sentencia del Tribunal Supremo, de 5 de junio de 1952.

I.—CAMBIO DE HORARIO Y DE LUGAR DE TRABAJO.—No puede la empresa, y menos cuando tiene aspecto de re-

presalia, modificar el horario o el lugar en que el trabajador prestaba sus servicios.

II.—SENTENCIA.—"El penúltimo párrafo del art. 30 del Reglamento de la Sociedad demandada, establece que el personal administrativo y técnico que trabaja exclusivamente en oficinas y que en 1.º de enero de 1943 viniese disfrutando de un régimen de trabajo más favorable—que el establecido en dicho Reglamento—se atenderá al mismo, con las modalidades que tenga."

"Acreditado por la prueba, que el actor desde hace muchos años, unos quince antes de 1943, viene prestando servicios de encargado de la demandada en el pueblo de Marchena, servicios que prestaba en su propio domicilio, sin sujeción a horario y en forma que le permitía atender a otras actividades, con conocimiento y consentimiento de la Empresa y que ésta, en 28 de mayo de 1948, ordenó a aquél, que, en lo sucesivo, las verificara en un local de su propiedad, con sujeción al horario que le señalaba y bajo cierta dependencia a otro empleado de la demandada, debe estimarse que la demandada al proceder en dicha forma, lo hizo en contra de lo dispuesto en el precepto reglamentario, ley para las partes, transcrito anteriormente, y que la sentencia recurrida al aprobar la conducta de la Empresa, desestimando la demanda, ha infringido los preceptos que se citan en el único motivo de este recurso, que no pueden interpretarse en forma retrictiva dada su naturaleza y que claramente se refieren a modalidades del trabajo y no sólo a horario del mismo y en su consecuencia que debe admitirse el recurso con todas sus consecuencias, máxime cuando no se ha justificado razón alguna que haga indispensable o necesario que el actor preste su trabajo en forma distinta a como siempre lo verificó, a satisfacción de la Empresa y con el consentimiento de ésta."

"A mayor abundamiento, la alteración del régimen de trabajo del demandante, fué acordada cuando el actor iba a reincorporarse al servicio, como consecuencia de avenencia a que llegaron las partes, en juicio por despido injustificado, promovido por el actor contra la demandada, mediante la que se sustituyó el despido, y éste se comprometió a desistir, como lo verificó, de la demanda inicial de aquel juicio, y de una reclamación sobre clasificación, que había deducido y estaba pendiente de resolución ante la Delegación de Trabajo, en cuya avenencia la demandada no hizo constar, o no se ha probado que hiciera constar, su propósito de variar las condiciones de trabajo del demandante, en forma que obligara a éste, con los perjuicios consiguientes, a abandonar sus trabajos complementarios o el servicio de la empresa."

486 NORMAS LABORALES DE APLICACION GENE- RAL.—CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS

Sentencia del Tribunal Supremo, de 30 de mayo de 1952.

I.—CLASIFICACION PROFESIONAL Y DIFERENCIAS DE SALARIOS.—Cuando

se prestan servicios de categoría superior de un modo circunstancial, excepcional y de corta duración, puede ejercitarse la correspondiente acción reclamando la diferencia de salarios, con respecto a esa categoría superior; pero cuando tales trabajos se prestan de un modo normal, se plantea un problema de clasificación, que no es de la competencia de la Magistratura, sino de la Delegación Provincial de Trabajo.

II.—SENTENCIA.—“Aún cuando es cierto que el art. 82 de la Reglamentación Nacional de Trabajo en la Industria de la Construcción y Obras Públicas, aprobada por Orden de 11 de abril de 1948, autoriza al personal obrero para realizar trabajos de categoría superior a la que tergan atribuida, ello han de hacerlo en casos excepcionales, de perentoria necesidad y corta duración, percibiendo, en ese caso, durante el tiempo de prestación del servicio, la retribución de la categoría a que circunstancialmente queda adscrito; mas no es este el caso a que se refiere la reclamación de los actores, los que han venido prestando el servicio, según afirman, como encargados de obras de la construcción desde el año 1946 hasta la fecha que formalizaron su reclamación el año 1947, y por tanto, como afirma la sentencia recurrida, no pueden accionar la reclamación de servicios como tales encargados de obras, sin obtener primeramente dicha clasificación en la forma que dispone el artículo 18 de la Reglamentación citada, petición que ha de formularse ante la Empresa y por el procedimiento que señala el repetido artículo 18, y como no ha sido ese el camino requerido por los actores, es vista lo procedencia de la reclamación de incompetencia que la Magistratura hace y que obliga a rechazar el recurso interpuesto.”

487 SEGUROS Y SUBSIDIOS SOCIALES.—ACCIDENTES DEL TRABAJO

Sentencia del Tribunal Supremo, de 27 de mayo de 1952.

I.—RELACION DE CAUSALIDAD.—El hecho de que un trabajador, durante una incapacidad temporal, fallezca a consecuencia de un proceso patológico común, no puede servir de base a una demanda de indemnización por accidente, de no justificarse la relación entre el fallecimiento y el accidente sufrido.

II.—SENTENCIA.—“El hecho de que un accidentado fallezca por consecuencia de un proceso patológico común producido durante el período de curación de un traumatismo sufrido en accidente del trabajo, o sea, durante la incapacidad temporal, consecutiva de accidentes de trabajo, no puede determinar responsabilidad patronal si el accidente no es su causa, ya directa, ya porque, como expresa el art. 10 del Reglamento de Accidentes, sea complicación derivada del proceso derivado por el accidente mismo, o producto de una infección adquirida en el medio en que se coloque al lesionado para su curación

por orden del patrono, por lo que, negadas esas circunstancias, no puede estimarse la infracción del art. 6.º de la Ley que acusa el recurso.”

488 SEGUROS Y SUBSIDIOS SOCIALES.—ACCIDENTES DEL TRABAJO

Sentencia del Tribunal Supremo, de 21 de mayo de 1952.

I.—IMPRUDENCIA PROFESIONAL.—Constituye imprudencia profesional, que no exime de responsabilidad patronal, el hecho de que el conductor de una yunta no vaya por su debida mano y al intentar cruzar la carretera para sujetar los animales sea arrojado por un automóvil, que le ocasionó la muerte.

II.—HECHOS PROBADOS.—“... 2.º El día 4 de septiembre último en ocasión en la que el referido obrero regresaba desde el lugar de trabajo al pueblo, por una carretera general en unión de sus compañeros, y los tres al cuidado de su respectiva “yunta”, al apercibirse aquél de que se acercaba por su espalda un automóvil velozmente, se cruzó del lado izquierdo en dirección de la marcha, por el que caminaba, hacia el costado contrario del camino, por donde lo hacía su “yunta”, al objeto de sujetar a ésta en tanto pasaba el vehículo mecánico; y al así obrar tuvo la mala fortuna de que le arrollara el repetido automóvil, causándole tan graves lesiones que determinaron su muerte en el mismo día...”

III.—SENTENCIA.—“Teniendo en cuenta: 1.º Que las lesiones que sufrió el hijo de los demandantes y que determinaron su muerte, se produjeron con ocasión del trabajo que prestaba por cuenta del patrono demandado, como lo demuestra el que de no haber sido porque estaba realizando tal trabajo, no se hubiera hallado siquiera en el lugar del accidente y de hallarse, no hubiera tenido necesidad de cruzar la carretera para atender a la yunta que su patrono le había confiado, como lo efectuaba al ser alcanzado por el automóvil que le lesionó; 2.º, que su presencia en el sitio de autos y su actuación no contravenía mandato alguno de su patrono, antes, al contrario, obedecía a órdenes de aquél, conduciendo la yunta a su cargo desde el campo al pueblo o viceversa, y 3.º, que el hecho de haber abandonado, momentáneamente y por causas que no constan, la referida yunta, en el lado derecho de la carretera y de marchar él por la mano izquierda, entraña, como acertadamente razona la sentencia recurrida, un caso de imprudencia profesional, que no exime de responsabilidad al patrono y cuyos efectos trataba de evitar el interfecto, librando de daño a la yunta y todo perjuicio a su patrono, cuando fué atropellado, es vista la imposibilidad de estimar las infracciones de los artículos 1.º y 10.º del Reglamento de 25 de agosto de 1931 en que se apoyan los dos motivos de casación alegados y, en su consecuencia, la procedencia de desestimar el recurso.”

489 SEGUROS Y SUBSIDIOS SOCIALES. — SEGURO DE ENFERMEDAD PROFESIONAL. ACCIDENTES DEL TRABAJO

Sentencia del Tribunal Supremo, de 19 de mayo de 1952.

I.—NEXO CAUSAL.—No puede considerarse como accidente el que motivó la muerte de un trabajador, por causa ignorada, y del que no se tuvo noticia alguna de que padeciera silicosis, hasta que se practicó su autopsia.

II.—SENTENCIA.—“Siendo obligado atenderse a los hechos que la sentencia recurrida declara probados, porque no han sido impugnados en forma legalmente procedente y estimarse por ello que el día 5 de agosto de 1947 falleció en su domicilio el marido de la actora sin que se haya podido determinar la causa de su fallecimiento, o sea, sin que se haya demostrado que, como se afirma en la demanda, falleciera a consecuencia de silicosis, enfermedad que se averiguó que padecía por no haberse advertido en él anteriormente, síntoma alguno de ella al practicarse la autopsia de su cadáver, es evidente la imposibilidad de establecer el nexo o relación causal entre dicho fallecimiento y la mencionada enfermedad, que sería preciso para que se hubiera producido la infracción de preceptos legales y de doctrina que se citan en el único motivo en que se apoya el presente recurso, que en su consecuencia debe ser desestimado tanto más cuando el recurrente omitió, al formalizarlo, la cita del número del art. 16 de la Ley de 22 de diciembre de 1949 en que se amparaba, incidiendo de 1949 (Ref. 344/49) en que se amparaba, incidiendo en un defecto de forma sustancial o insubsanable de oficio, que por sí solo determina la procedencia de desestimar el recurso sin necesidad de entrar a considerarlo en el fondo.”

490 SEGUROS Y SUBSIDIOS SOCIALES. — ACCIDENTES DEL TRABAJO

Sentencia del Tribunal Supremo, de 19 de mayo de 1952.

I.—DISTINCION ENTRE ACCIDENTE DEL TRABAJO Y RIESGO CATASTRÓFICO.—Sienta la doctrina diferencial entre los siniestros cubiertos por la Ley de Accidentes del Trabajo o por las disposiciones específicas sobre Riesgos Catastróficos.

II.—SENTENCIA.—“La única cuestión a resolver es la de declarar el accidente sufrido por el obrero demandante el 18 de agosto de 1947 con motivo de la explosión de minas submarinas, ocurrida en la ciudad de Cádiz, donde trabajaba aquél de camarero en un café-bar propiedad del patrono demandado, está amparado por la Legislación de Accidentes del Trabajo en la Industria y su Reglamento, como afirma la sentencia recurrida a virtud de la póliza de seguros colectiva concertada entre el patrono demandado y la Compañía recurrente o la es de aplicación las

disposiciones específicas sobre riesgos catastróficos, como sostiene ésta.”

“En el art. 1.º del Decreto-Ley de 2 de septiembre de 1947, para la mejor aplicación del sistema de cobertura del riesgo catastrófico, se fija la siguiente clasificación de los riesgos: a) *Ordinarios*. Los que son objeto de cobertura por el Seguro privado, y b) *Extraordinarios*. Los que quedar fuera de dicha cobertura, subdividiéndose éstos en complementarios de las pólizas ordinarias y en extraordinarias propiamente dichas, estableciéndose en su artículo 2.º que los mentados de cobertura de los riesgos *ordinarios* y de los complementarios de las pólizas ordinarias no sufrieron alteración alguna, y que en cuanto a la cobertura de los extraordinarios propiamente dichos, se hace con el carácter de riesgo catastrófico, clasificación que en el primer motivo del recurso también se hace, distinguiendo los “siniestros garantizados expresamente por las pólizas del seguro, en los cuales hay que satisfacer íntegramente las indemnizaciones, porque las Compañías aseguran y a la responsabilidad mediante las primas debidas por el riesgo garantizado, y siniestro no comprendidos en la póliza, para el pago de los cuales el legislador ha arbitrado una compensación a través del Consorcio de Compensación.”

“En la parte expositiva del Decreto-Ley de 17 de octubre de 1947, se lee en sus párrafos 2.º y 3.º que como el Seguro de Accidentes del Trabajo sólo protege a los productores en el caso de accidentes sufridos en el trabajo que realicen o con ocasión del mismo, “para resolver la situación de desamparo en que quedarían los asegurados por póliza de seguro colectiva, cuando el siniestro no se produzca en las condiciones antes indicadas”, se dictó el mencionado Decreto-Ley, y de acuerdo con tal Decreto, la Orden de 10 de diciembre del mismo año, en su número 1.º declara protegidos por el Consorcio de Compensación de Accidentes individuales, a todos los trabajadores asegurados por pólizas del Ramo de Accidentes del Trabajo que resulten víctimas de lesiones corporales determinantes de muerte o incapacidad permanente, por causas de naturaleza catastrófica, “no amparadas por el Seguro contra Accidentes del Trabajo.”

491 NORMAS LABORALES DE APLICACION LABORAL.—LEY DE CONTRATO DE TRABAJO

Sentencia del Tribunal Supremo, de 16 de mayo de 1950.

I.—TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA.—Lo es quien contrata por un tanto alzado la ejecución de una obra de albañilería, en la casa propiedad del otro contratante.

II.—HECHOS PROBADOS.—1.º El demandante... contrató con la demandada..., las obras de albañilería de una casa de su propiedad, al tanto alzado de 150 pesetas. 2.º Cuando se encontraba en un andamio de dicha casa, cayó del mismo, recibiendo lesiones, de las que necesitó asistencia facultativa. 3.º Los demandados no han

abonado indemnización de ninguna clase al actor, como consecuencia del accidente.

III.—SENTENCIA.—Conforme al resultado de la prueba practicada ante la Magistratura y por ésta recogida en la sentencia recurrida, faltan en la razón de pedir todas las notas características del contrato de trabajo. El actor dedicado a labores de albañilería convino con... en verificar labores propias de su profesión en una casa propiedad de aquella por precio alzado de 150 pesetas. No consta que la señora... señalara tiempo de trabajo, lo dirigiera ni en cualquier modo tuviera intervención en las modalidades de su práctica, siendo, por tanto, el demandante..., quien para todo ello tuvo la iniciativa, tiempo y decisión, con libertad para realizarlo personalmente o con auxiliares. El tanto alzado de 150 pesetas excluye la noción de salario por jornada o destajo, sea éste por unidad de producción neta o por rendimiento diferencial; y, en cambio, revela con perfecta claridad que... contrató a ganancia o pérdida propias y por él calculadas sobre prestación de labor e instrumental a su cargo. Quedar, pues, descartadas las notas de dependencia y salario de obra por precio cierto y convenido, y de ese contraste surge en derecho la negación del contrato específico laboral del cual emana la calidad de patrono y obrero entre actor y demandados, base necesaria e imprescindible para aplicación del régimen jurídico de la institución de derecho, "accidente del trabajo". Si de otro modo se interpretara, desnaturalizando los convenios del tipo del que es materia de este proceso, el servicio eventual, tal vez de breves momentos, llevaría consigo deberes que sólo la permanencia en el trabajo convenida o indefinida permiten razonable y legal aplicación, sino han de convertirse en infranqueable obstáculo a la relación entre propiedad y trabajo cuando éste tenga por materia menesteres indispensables, pero de breve tiempo, escasa valía y susceptibles de ser atendidos por trabajadores que al hacerlo puedan aunar el rendimiento de su labor eventual al de otro permanente o que tenga la conducción de modestos empresarios de industria laboral propia. Tal es el sentido de los artículos que, como vulnerados—sin serlo—, se citan en el primer motivo del recurso, y así lo han entendido y resuelto repetidas sentencias de este Tribunal Supremo, entre otras, las de 5 de julio de 1916, 18 de febrero de 1923, 11 de febrero de 1927 y 17 de mayo de 1941.

Faltando contrato de trabajo sometido al régimen de su especial Reglamentación, esta jurisdicción es incompetente para pronunciar fallo atinente al fondo del litigio; mas la Magistratura, a pesar de que los hechos que declara probados y en los razonamientos a ellos atinentes sostiene la inexistencia de aquél, prescindiendo de lo dispuesto en el artículo 435 del Código Laboral en relación con el 427, fundamentales para atribuir o negar competencia jurisdiccional, realiza un acto pleno de ésta pronunciando fallo absolutorio. Por ello, y atendida la razón de interés de orden público, en el que radica cuanto a competencia por razón de la materia atañe y a los que se debe en todo caso estricta obediencia, esta Sala ha de rectificar aludida incon-

gruencia declarando que por el resultado de los hechos declarados probados y razonamientos de la sentencia recurrida, no modificados por ninguna de las razones aludidas en los motivos de casación alegados por el recurrente, la jurisdicción del trabajo es incompetente para conocer y decidir sobre la materia del litigio, y por ello, y por Ministerio de Ley, debe dejar sin efecto anulando la parte dispositiva de la sentencia recurrida en cuanto al pronunciamiento absolutorio que como único contiene.

492 JURISDICCION Y PROCEDIMIENTO LABORAL.—RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY

Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 1952.

I.—FORMALIZACION.—Es necesario en el escrito de formalización del recurso precisar si éste se basa en violación, interpretación errónea o aplicación indebida del precepto que se considere infringido.

II.—SENTENCIA.—El recurso se basa en el número 1.º del art. 16 de la Ley de 22 de diciembre de 1949 (Ref. 344/49), y si bien se alega genéricamente que "se han infringido—en el fallo—los preceptos indicados", no se concreta si tal infracción es por violación, interpretación errónea o aplicación indebida de los mismos, como exige aquel número primero, y por tal omisión falta igualmente la expresión del concepto en que aquellos preceptos han sido infringidos, requisito esencial del artículo 1.720 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y únicamente al invocar el artículo primero del Decreto de 13 de mayo de 1938, creando la Magistratura del Trabajo, se alega su aplicación indebida.

493 JURISDICCION Y PROCEDIMIENTO LABORAL.—RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY

Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de abril de 1952.

I. — CLASIFICACION PROFESIONAL. DIFERENCIAS DE SALARIOS.—No es la jurisdicción laboral competente para determinar la clasificación profesional, pero sí para conocer en una demanda sobre reclamación de salarios por la diferencia correspondiente por los trabajos de superior categoría que le fueron encomendados.

II.—SENTENCIA.—Por la demanda inicial de este procedimiento, el actor, tomando como base un convenio de carácter laboral ya extinguido y que tenía por objeto la realización de trabajos de albañilería, se limita a reclamar una supuesta diferencia de salarios en relación al tiempo en que prestó sus servicios a la Empresa demandada invocando al efecto el artículo 62 de la correspondiente Reglamentación, que se refiere al caso en que "el personal obrero realice trabajos de categoría superior a la que tenga atribuida";

por lo que hay que estimar que el problema que se somete a la resolución del Magistrado (a quo) no es de clasificación profesional que regula la Orden de 29 de diciembre de 1945, que implica—como ya declaró la sentencia de esta Sala de 16 de marzo de 1951—“el que durante la vigencia del contrato de trabajo fuera asignada al productor por el empresario una categoría profesional que no correspondiera a las funciones que aquél realice o que no sea la determinada en las respectivas normas reglamentarias, siendo entonces cuando, ante la reclamación del productor, corresponde a la Delegación del Trabajo, con alzada a la Dirección General, el dilucidar cuál es la categoría profesional del reclamante con arreglo a los correspondientes Reglamentos”, caso distinto el que constituye la materia de esta litis, que por ser de la competencia del indicado juzgador—conforme a lo dispuesto en el artículo 435 del Código del Trabajo, en relación con el artículo 1.º del Decreto de 13 de mayo de 1938 y al 1.º de la Ley Orgánica de la Magistratura de 17 de octubre de 1940—debió ser resuelto por el mismo en cuanto al fondo, y en tal sentido debe prosperar el primer motivo del recurso—apoyado en el número sexto del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ya que por lo anteriormente expuesto ha habido, por parte del Magistrado, defecto en el ejercicio de la jurisdicción, lo que impone—sin necesidad de entrar en el examen de los otros motivos—la casación y anulación de la sentencia recurrida.

494 JURISDICCION Y PRO- CEDIMIENTO LABO- RAL.—RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA

Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de abril de 1952.

I.—DENEGACION DE PRUEBA.—No puede servir de base para el recurso la no práctica de pruebas propuestas, cuando pudo ser aportada al acto del juicio por el actor, cuando en todo caso no se hizo la protesta oportunamente y en ningún caso la prueba pericial denegada, cuando no fué propuesta en momento hábil.

II.—SENTENCIA.—Acordado en providencia de 11 de noviembre de 1947 el señalamiento y citación para el juicio el 29 del mismo mes, la propuesta de prueba anticipada que se hizo por la parte demandada en el escrito que presentó el 24 de noviembre, interesando informe de la Jefatura Provincial de Minas sobre clase de minerales existentes en las minas de Reccir, así como el que se pide de la Caja Nacional del Seguro de Accidentes del Trabajo sobre cantidad de polvo existente en las galerías de las minas y la proporción de sílice de dicho polvo, fueron pruebas que pudo la parte proponente practicar por sí mismo y aportarlas al juicio y, en todo caso, hacer la protesta sin esperar a fecha inmediata a la que el juicio estaba señalado y ostensiblemente sin tiempo suficiente para llevarlas a cabo; y en cuanto a la prueba pericial solicitada en el acto del juicio sobre

estudio técnico de los minerales que integran la explotación por ser igualmente imputable a dicha parte el no haberse preparado dicha prueba con todos los elementos necesarios para que pudiera practicarse, y por las razones expuestas, y porque dada la sentencia recaída en la que no aparecía la existencia de silicosis, es visto que la denegación de prueba a que ha hecho referencia no ha podido producir indefensión, y es, por tanto, de desestimar el motivo de casación alegado.

495 REGLAMENTOS DE TRABAJO.—MINAS DE CARBON.—MINAS DE PLOMO Y MINAS DE POTASA

Orden del Ministerio del Ejército del 31 de octubre de 1952, B. O. del E. núm. 345, del 10 de diciembre de 1952.

I.—SERVICIO MILITAR.—Normas complementarias sobre la exención temporal del servicio militar, de los trabajadores del interior de esas minas.

II.—TEXTO LITERAL.—En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo noveno y disposición transitoria tercera del Decreto del Ministerio del Ejército de 26 de septiembre del presente año (*Boletín Oficial del Estado* número 288 de 14 de octubre) (Ref. 404/52), relativo a exclusión temporal del servicio militar activo de los mineros, a continuación se publican las instrucciones para desarrollo y aplicación del mismo que han sido dictadas por los Ministerios del Ejército, Industria, Gobernación y de Trabajo, conjuntamente.

1.ª Durante el mes de diciembre de cada año, el Ministerio de Industria publicará en el *Boletín Oficial del Estado* una relación nominal de empresas mineras, por provincias donde radiquen, declarándolas con derecho a que sus obreros puedan acogerse a los beneficios establecidos por el Decreto.

El mencionado Ministerio deberá tener en cuenta los siguientes extremos, en relación con las empresas mineras: clase del mineral que habrá de ser de los eruncionados en el artículo primero del Decreto, tonelaje anual obtenido, número de obreros empleados, capital de la empresa y, finalmente, interés de la explotación minera para la economía nacional.

2.ª Los mozos comprendidos en el artículo primero del Decreto que deseen acogerse a los beneficios que establece, dirigirán sus instancias, durante el mes de enero del año en que cumplan veintiuno de edad, al Capitán General de la Región donde residan, por conducto de la empresa minera donde trabajen, las cuales las entregarán en los Ayuntamientos del término municipal donde estén enclavadas las minas y éstos a las Juntas de Clasificación y Revisión de las Cajas de Recluta correspondientes a los interesados, que, previo informe, las elevarán al Capitán General de la Región, quien las resolverá sin ulterior recurso.

3.ª Dichas instancias irán acompañadas de los siguientes documentos:

a) Certificación extendida y firmada por el Director o Gerente de la empresa minera en la que el solicitante preste sus servicios, acreditativa del tiempo que lleva trabajando

en la mina y clase de trabajo que realiza en el interior de ella.

Dicha certificación expresará la disposición oficial del Ministerio de Industria por la que se autoriza a la empresa para que sus obreros puedan acogerse a los beneficios del Decreto.

b) Copia del contrato de trabajo, firmado por el solicitante y su empresa minera, de acuerdo con el modelo que se publica anexo a estas Instrucciones.

El mencionado contrato llevará el conforme del Jefe del Organismo sindical local correspondiente.

c) Dos fotografías, tamaño carnet, firmadas por el interesado al reverso, y con el sello de la empresa minera.

d) Certificación extendida por el médico de la empresa minera y el conforme de su Director o Gerente acreditativa de que el mozo resulta útil para el trabajo en el interior de la mina y en la que consten los siguientes datos:

Nombre de los padres, naturaleza, fecha de nacimiento, si sabe leer y escribir, religión, estado, estatura y las siguientes señas personales: pelo, cejas, ojos, nariz, barba, boca, color, frente y señas particulares.

Dichos datos servirán para que los Ayuntamientos extiendan la filiación de Caja del mozo.

4.ª Las empresas mineras remitirán las instancias, acompañadas de los documentos mencionados, a los Ayuntamientos del término municipal correspondiente a la residencia de aquéllas, donde habrán de tener entrada antes del tercer domingo de febrero de dicho año.

5.ª Recibidas por los Ayuntamientos las instancias y documentos expresados, surtirán ante ellos los efectos necesarios para el alistamiento y clasificación militar de los mozos. Estos no tendrán que comparecer personalmente en los citados Ayuntamientos para las operaciones del reclutamiento.

Las Juntas Municipales de Reclutamiento clasificarán a los mozos como "útiles para todo servicio, excluidos temporalmente del contingente anual" (mineros).

Los Ayuntamientos comunicarán, en su caso, a los de nacimiento de los mozos, la clasificación concedida, a fin de que sean dados de baja en éstos para evitar la duplicidad del alistamiento.

Antes del día 1 de abril remitirán los Ayuntamientos a las Juntas de Clasificación y Revisión de las Cajas de Recluta correspondientes los expedientes de los mozos.

6.ª Las indicadas Juntas procederán al examen de los expedientes recibidos, y en consecuencia informarán al Capitán General de la Región para su resolución.

Consecuente con la resolución que adopte dicha Autoridad, las Cajas procederán, en su caso, a clasificar y considerar a los mozos como "ingresados en Caja, útiles para todo servicio, excluidos temporalmente del contingente anual", no serán destinados a Cuerpo y quedarán dispensados de comparecer personalmente ante los Organismos de Reclutamiento.

7.ª Los Capitanes Generales, antes de resolver los aludidos expedientes, solicitarán informe de la Comisión Regional de Movilización Industrial, y si lo estiman conveniente podrán usar de las facultades que les confiere el artículo séptimo del Decreto.

De la resolución que en definitiva adopte dicha Autoridad dará conocimiento a las Comisiones Regionales de Movilización Industrial y a las Cajas de Recluta correspondientes, a efectos de la situación militar de los interesados a quienes se comunicará dicha resolución por las Cajas a través de la empresa minera a que pertenezca.

8.ª Concedidos por el Capitán General de la Región los beneficios del Decreto, los interesados habrán de justificar, durante el mes de enero de cada año, que permanecen en las minas realizando los trabajos especificados en el artículo primero del Decreto, hasta tanto pase a la situación de reserva su reemplazo.

Dicha justificación será realizada por certificación extendida por el Director o Gerente de la empresa minera en que trabajen, la cual llevará el conforme del Inspector del Trabajo y del Jefe de la Organización Sindical Laboral a que pertenezcan, y acreditará que se encuentra el mozo en las circunstancias exigidas por el Decreto.

La mencionada certificación será remitida a la Caja de Recluta por conducto de la empresa minera a que pertenezca el mozo.

Para la debida comprobación de que persisten las condiciones requeridas para el goce del beneficio los Capitanes Generales podrán ordenar e interesar las inspecciones a que se refiere el artículo séptimo del Decreto.

9.ª La infracción por parte de alguna empresa de las disposiciones del Decreto será comunicada por el Organismo o Autoridad que de ella tuviere conocimiento al Gobernador civil de la provincia, a los efectos determinados en el artículo octavo del mismo.

10. Cuando por alguna de las causas mencionadas en el artículo sexto del Decreto los acogidos deban cesar en el disfrute de los beneficios del mismo, tendrán la ineludible obligación de comunicarlo inmediatamente a las Cajas de Recluta a que pertenezca, expresando el motivo del cese.

Análoga obligación tendrán las empresas mineras y los Organismos Sindicales Locales de realizar dicha comunicación a las indicadas Cajas de los individuos en cuyos expedientes informaron o certificaron.

11. Las Cajas de Recluta tan pronto tengan noticias de que un acogido al Decreto ha cesado o debe cesar en los beneficios del mismo informarán a la Comisión Regional de Movilización Industrial y al Capitán General de la Región, proponiendo lo procedente de acuerdo con lo establecido al efecto en el Decreto.

En tal sentido propondrá razonadamente el abono de tiempo que corresponda a efectos del servicio militar según los casos, o la improcedencia de concederlo cuando así sea pertinente.

Del mismo modo señalarán los casos en que haya de cumplirse dicho servicio militar en Cuerpo de Disciplina en Africa.

12. Los Capitanes Generales a la vista de los informes recibidos, resolverán de acuerdo con las facultades que el Decreto les concede.

De su resolución darán conocimiento a las Cajas de Recluta y a la Comisión Regional de Movilización Industrial y, en su caso, a los Gobiernos civiles y Organismos mencionados en el artículo octavo del Decreto.

13. Dispuesto por el Capitán General el

cese de los acogidos, procederán las Cajas a dar cumplimiento a cuanto se previene en los artículos sexto y octavo del mencionado Decreto.

14. Cuando la Orden de incorporación a filas del reemplazo anual no disponga la concesión de los beneficios del Decreto los Capitanes Generales ordenarán a las Cajas de Recluta correspondientes el cese de los bene-

ficiarios de ese reemplazo en la exclusión del servicio militar activo concedida, siendo destinados a Cuerpo, con la obligación de comparecer personalmente ante los Organismos de Reclutamiento.

15. Cuando el reemplazo a que pertenezcan los acogidos al Decreto pase a la situación de reserva, se incorporarán a él, siguiendo sus vicisitudes en caso de movilización.

ANEXO QUE SE CITA

En ... a ... de ... de ... en representación de la Empresa Minera de ... y D. ... de estado ... de profesión ... formalizan el presente contrato de trabajo de conformidad con lo dispuesto en el Decreto de 26 de septiembre de 1952 y a los fines del mismo, con arreglo a las siguientes cláusulas:

1.º El trabajo a realizar consistirá en ... con la categoría de ... y se prestará en el interior de la mina por cuenta y bajo la dependencia de la Empresa.

2.º El salario será el establecido para la categoría del trabajador en la Ordenanza Laboral que afecte a la Empresa, y disfrutará de los demás devengos y derechos establecidos e que se establezcan reglamentariamente, tanto si durante la vigencia de este contrato trabajase a jornal como a prima, tarea o destajo.

Y en prueba de conformidad y enterados de las instrucciones publicadas para aplicación del mencionado Decreto, firman el presente contrato por cuadruplicado, del que un ejemplar quedará unido a la petición que el trabajador formule de exención del Servicio Militar ante la Caja de Reclutamiento y otro en la Oficina de Colocación de la Delegación Comarcal de Sindicatos ...

Por la Empresa,

El trabajador,

V.º B.º:

El Delegado Local de Sindicatos,

496 SEGUROS Y SUBSIDIOS SOCIALES. — ACCIDENTES DEL TRABAJO

Orden del Ministerio de Trabajo, de 5 de diciembre de 1952, B. O. del E. núm. 349, del 14 de diciembre de 1952.

I.—REGISTRO.—Se fijan los derechos de registro que han de satisfacer las Compañías y Mutualidades Industriales y Agrícolas durante el año 1952.

II.—TEXTO LITERAL.—En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto de 27 de agosto de 1900, en cuanto se refiere a los derechos de Registro de las entidades aseguradoras de accidentes del trabajo, en relación con el artículo cuarto de la Orden de 14 de septiembre de 1939, y de lo prevenido en el Decreto de 2 de marzo de 1939.

Este Ministerio, a propuesta de esa Dirección General, se ha servido disponer:

Artículo 1.º Los derechos de Registro que las Compañías y Mutualidades aseguradoras en la Agricultura, han de satisfacer por el de Accidentes del Trabajo en la Industria y ejercicio de 1952, se fijan en tres pesetas por cada cien mil pesetas o fracción del total de salarios que tuvieron asegurados en el mencionado año, con los siguientes mínimos de cuotas: seiscientas pesetas para las Compañías; ciento cincuenta pesetas para las Mutualidades Industriales y setenta y cinco pesetas para las Mutualidades Agrícolas.

2.º El importe de los derechos de Registro establecidos anteriormente, se hará efectivo

en el plazo y forma que se determinará al ser aprobadas las liquidaciones oportunas, que deberán formular las Compañías y Mutualidades bajo su responsabilidad ante la Dirección General de Previsión, Sección de Accidentes del Trabajo, dentro de los quince primeros días del próximo mes de enero de 1953.

497 MUTUALIDADES Y MONTEPIOS LABORALES. — DEPENDENCIA MERCANTIL

Resolución de la Dirección General de Previsión, de 9 de diciembre de 1952, B. O. del E. núm. 350, del 15 de diciembre de 1952.

I.—ENSEÑANZA NO ESTATAL.—Se fija una fecha límite para solicitar la devolución de las primas a los afectados por la Reglamentación Nacional de Trabajo para la Enseñanza no Estatal.

II.—TEXTO LITERAL.—Habiéndose acordado por el excelentísimo señor Ministro de este Departamento, de conformidad con lo determinado en la disposición transitoria primera de la Orden de 20 de enero de 1951 (Ref. 15/52), que el personal docente afectado por la Reglamentación de trabajo para la enseñanza no estatal pueda solicitar la devolución de las primas ingresadas en favor de los mismos en póliza de pensión constituidas en el Instituto Nacional de Previsión.

Esta Dirección General ha acordado señalar la fecha del día 1.º de febrero del año próximo 1953, hasta la que por los afectados por

las disposiciones mencionadas pueda ser solicitada la devolución de las primas que en favor de los mismos hubiesen sido irrogadas en el Instituto Nacional de Previsión, con la advertencia de que, transcurrida dicha fecha, no se estimará reclamación alguna que sobre ello pudiera producirse.

498 JURISDICCION Y PRO- CEDIMIENTO LABO- RAL.—DESPIDOS

Sentencia del Tribunal Supremo, de 30 de junio de 1952.

I.—CABALLEROS MUTILADOS.—Es incompetente el Magistrado de Trabajo para conocer, por sí solo, de los despidos propuestos contra Caballeros Mutilados.

II.—SENTENCIA.—“La materia del litigio causa de este recurso, es el despido de trabajador de quien ostenta la condición de Caballero Mutilado por la Patria. Esta circunstancia no se tuvo en cuenta por la Magistratura, y olvidándola creyóse autorizado para tramitar y resolver por sí aquella cuestión a pesar de que para ello carecía de competencia propia excluyente, porque la Orden de 24 de junio de 1946 le obliga a compartirla con el Tribunal colegiado que debe formarse con los componentes que dispone el párrafo 2.º de la citada norma. Existe, pues, manifiesta incompetencia y por ello un vicio formal que debe subsanarse aun disponiéndolo de oficio, porque lo exige el interés y orden público, bases fundamentales del derecho procesal.”

499 SEGUROS Y SUBSIDIOS SOCIALES.—ACCIDENTES DEL TRABAJO.—ENFERME- DADES PROFESIONALES

Sentencia del Tribunal Supremo, de 30 de junio de 1952.

I.—BRONCONEUMONIA.—No puede calificarse de enfermedad profesional, pero si se prueba que el fallecimiento del trabajador provino de una bronconeumonía producida a consecuencia del servicio prestado, puede considerarse como accidente del trabajo.

II.—SENTENCIA.—“La bronconeumonía no se considera enfermedad profesional, lo que no excluye que pueda producirse por consecuencia del trabajo, en cuyo caso tiene el concepto de accidente común indemnizable.”

500 JURISDICCION Y PRO- CEDIMIENTO LABO- RAL.—EXCEPCIONES

Sentencia del Tribunal Supremo, de 24 de septiembre de 1952.

I.—LITIS PENDENCIA.—Requisitos para que pueda ser estimada esta excepción.

II.—SENTENCIA.—“Como ha declarado esta Sala, en sentencia de 14 de febrero de 1951, se produce la excepción de litis-pendencia cuando existen dos litigios en curso,

en los que, por darse las identidades subjetiva, objetiva y de causa, la sentencia que se pronuncie en el primero produce la cosa juzgada en el segundo.”

501 SEGUROS Y SUBSIDIOS SOCIALES.—ACCIDENTES DEL TRABAJO

Sentencia del Tribunal Supremo, de 2 de octubre de 1952.

**I.—VALOR PROBATORIO DE LA CON-
FESION. PRESUNCION.**—En esta sentencia se contienen estas dos doctrinas: a) La confesión en juicio no debe considerarse como prueba irrefutable. b) Si el siniestro se produce estando prestando servicios el trabajador, existe la presunción del accidente del trabajo, sin que, a sensu contrario, pueda presumirse la falta de relación causal, a menos que así se pruebe debidamente.

II.—SENTENCIA.—“La sentencia de instancia declara probado que el obrero causante de la actora cayó al suelo inopinadamente desde un carro en el que se hallaba subido, dedicado a operaciones de recolección de cereales, falleciendo inmediatamente por consecuencia de conmoción cerebral determinada por la caída; también declara probado que el sujeto sufría degeneración alcohólica, revelada por ciertas estigmas apreciadas en la autopsia, y en uso de los considerandos, tras rechazar las manifestaciones testificales de los otros operarios y la confesión del patrono, que afirmaron se produjo la caída por un brusco movimiento del vehículo, del informe pericial médico se deduce que no hubo tal movimiento sino que, “por el contrario, es un “desvarecimiento”, o “congestión”, de motivación alcohólica, lo que da lugar a la caída y consiguiente traumatismo mortal y, por tanto, no concurren en el caso las circunstancias de hecho determinantes del accidente de trabajo indemnizable (artículos 1.º y 9.º del Reglamento de 25 de agosto de 1931) y, en consecuencia, se hace pronunciamiento absolutorio bajo el supuesto de no provenir el siniestro del trabajo mismo, sino de la causa que expresa.”

“Por el hecho cierto y declarado de haberse producido el accidente cuando realizaba su trabajo el siniestrado, tiene la presunción de ser un accidente de trabajo, debiendo, para excluir la calificación de tal, acreditarse que tiene otra causa cierta extraña al trabajo como es la fuerza mayor o la culpa de la propia víctima, causa ésta que aprecia el juzgador de instancia, pero como mera presunción, deducida de haber observado los peritos en la autopsia que la víctima tenía restos alimenticios en el estómago con “olor vináceo” y ciertos estigmas que atribuyen a degeneración alcohólica; más todo ello no autoriza a considerar legítima la presunción de que la caída productora de la muerte tuviera como causa esa degeneración y no el movimiento brusco del carro como afirman los testigos e incluso el patrono responsable en su confesión judicial, y si bien el valor de la confesión no es tan absoluto que no pueda posponerse a otros medios de prueba, para ello es preciso que estos medios sean idóneos y proporcionen

conocimiento cierto de algo contrario a lo confesado, pero no puede ser enervada por un juicio deductivo sin valor lógico, por no ser lo deducido consecuencia necesaria del dato conocido, y en este caso no lo es, quedando en la categoría de mera probabilidad o conjetura, como la denominaba el Ministerio Fiscal, pues del hecho cierto de tener la víctima restos alimenticios en el estómago con "olor vináceo", no puede deducirse la embriaguez, ni de los estigmas de alcoholismo crónico se deduce necesariamente que a ello o a la embriaguez se debiera la caída, de donde resulta que la sentencia hace una afirmación de facto, de la que se deduce la calificación del suceso como accidente laboral y después hace una interpretación de la prueba pericial para deducir una causa de exclusión del concepto de accidente laboral, sin que pueda estimarse que tal deducción tenga el valor lógico de necesaria y cierta y aun la mera probabilidad, como estado del juicio comprendido entre la certeza y la duda, tiene un valor lógico muy reducido, en este caso, por el resultado de los otros medios de prueba."

502 JURISDICCION Y PRO- CEDIMIENTO LABO- RAL.—CONTRATO DE EMBARQUE

Sentencia del Tribunal Supremo, de 7 de octubre de 1952.

I.—LAUDO DEL CAPITAN DEL PUERTO.—El sometimiento al laudo del capitán del puerto, en los conflictos derivados del contrato de embarque, no tiene el carácter de mera conciliación, siendo imprescindible su celebración, antes del juicio.

II.—SENTENCIA.—"Lo prescrito en el artículo 113 de la Ley del Contrato de Trabajo donde se impone que toda cuestión surgida sobre cumplimiento del contrato de embarque se someterá previamente al Capitán del Puerto que con su asesor actuará de amigable componedor, no significa, en verdad, un mero acto de conciliación, sino que ha de ser una decisión sin la cual no llega la jurisdicción laboral, y como en el caso no se ha procedido así, obvio es que la referida jurisdicción es incapaz de actuar; y, en consecuencia, se impone decidir ahora la nulidad de todo lo actuado como es doctrina jurisprudencial."

503 JURISDICCION Y PRO- CEDIMIENTO LABO- RAL.—RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY

Sentencia del Tribunal Supremo, de 10 de octubre de 1952.

I.—FORMALIZACION.—Es esencial citar los números de los artículos 15 y 16 de la Ley de 22 de diciembre de 1949, incurriendo en defecto insubsanable el recurso que se fundamenta en el art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con posterioridad a la vigencia de la ley primeramente citada.

II.—SENTENCIA.—"Habiéndose omitido por el recurrente al formular el presente recurso la cita del número o números del artículo 16 de la Ley de 22 de diciembre de 1949, (Ref. 344/49), en que lo amparaba, fundamenteándolo en preceptos que en aquella fecha—19 de julio de 1951—no eran aplicables en la jurisdicción laboral, como son los números 1.º, 6.º y 7.º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, lo que entraña un defecto esencial de forma, insubsanable de oficio, determinante, por sí solo, de la procedencia de desestimar ese recurso sin necesidad de considerarlo en el fondo, como tiene reiteradamente declarado la jurisprudencia de esta Sala, es visto que debe declararse no haber lugar al recurso, con todas las consecuencias legalmente procedentes."

504 SEGUROS Y SUBSIDIOS SOCIALES.—ACCIDENTES DEL TRABAJO

Sentencia del Tribunal Supremo, de 10 de octubre de 1952.

I.—RETROACTIVIDAD LEGAL.—La ley aplicable en materia de accidentes del trabajo, para su calificación, debe ser la vigente en el momento de producirse el siniestro y no la que rigiera en el momento de calificarse la incapacidad.

II.—SENTENCIA.—"No puede someterse la reparación a la ley, no retroactiva, que rija en el momento en que declara la incapacidad permanente sino a la que regía cuando el accidente se produjo, pues, lo contrario, además, implicaría una modificación de condiciones que, por afectar a la estimación económica del riesgo que afronta el asegurador, destruiría el seguro, que no por ser aleatorio deja de tener su fundamento en el cálculo matemático de probabilidades."

505 JURISDICCION Y PRO- CEDIMIENTO LABO- RAL.—EXPEDIENTE DISCIPLI- NARIO

Sentencia del Tribunal Central de Trabajo de 5 de febrero de 1951.

I.—DEFECTOS DE FORMA.—No pueden invocarse en suplicación defectos de forma en la tramitación del expediente, si no se hizo constar la oportuna protesta en el acto del juicio.

II.—SENTENCIA.—Las razones que la recurrente expone en el motivo relativo a la revisión de los hechos, por referirse a formalidades que debieron observarse en la tramitación del expediente disciplinario, implican en esencia la alegación de una falta de derecho formal, y como en el momento procesal oportuno, es decir, en el acto del juicio nada se dijo ni se protestó es evidente que no puede prosperar el motivo.

506 NORMAS LABORALES DE APLICACION GENERAL.—DESPIDO

Sentencia del Tribunal Central de Trabajo de 9 de febrero de 1951.

I.—FALTAS AL TRABAJO.—Es causa justificada de despido la inasistencia al trabajo, por estar el productor cumpliendo condena.

II.—SENTENCIA.—El problema planteado... es el de determinar si la falta de asistencia al trabajo, por estar el operario cumpliendo condena recaída en procedimiento criminal, constituye la causa justa de despido enumerada en el apartado a) del artículo 77 de la Ley de Contrato de Trabajo; y como dicho precepto exige dos requisitos: que las faltas sean reiteradas y que estén injustificadas, el primero, evidentemente, se da en el caso de autos, y respecto al segundo, es necesario tener en cuenta que los motivos que impidieron al recurrente dedicarse a sus ocupaciones no se hallan comprendidos en ninguno de los casos a los que el artículo 79 del referido texto legal cor. la virtualidad para no dar por terminado el contrato de trabajo, sin que por otra parte puedan considerarse como fuerza mayor desde el momento en que pertenece a una asociación ilegal y realizar propaganda de este orden son hechos eminentemente voluntarios y sus consecuencias, plenamente previsibles, por lo que es preciso afirmar que concurre también el segundo requisito de los apuntados, no desvirtuando este criterio lo dispuesto en la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de julio de 1933, invocada por el recurrente, toda vez que en ella se habla de "situaciones no sólo no previsibles por el reo, sino extrañas totalmente a su propósito", supuesto distinto al que venimos examinando; por consiguiente se impone la desestimación del motivo.

507 JURISDICCION Y PRO-CEDIMIENTO LABORAL.—DESPIDOS

Sentencia del Tribunal Central de Trabajo de 8 de marzo de 1951.

I.—EXPEDIENTE DISCIPLINARIO.—El hecho de no concluirse el expediente dentro del plazo reglamentario, no califica de injustificado el despido.

II.—SENTENCIA.—La circunstancia de que la Empresa no termine el expediente dentro del plazo fijado en la Reglamentación nunca puede producir el efecto de injustificar el despido, toda vez que el alcance de dicha inobservancia está determinado en la Orden de 18 de agosto de 1948.

508 JURISDICCION Y PRO-CEDIMIENTO LABORAL.—DESPIDOS

Sentencia del Tribunal Central de Trabajo de 9 de marzo de 1951.

I.—CADUCIDAD.—Puede ser apreciada de oficio en trámite del recurso, aun

cuando no hubiera sido alegada por la parte demandada en el acto del juicio.

II.—SENTENCIA.—Aunque tal excepción (caducidad) no se propuso en el acto del juicio, sino que se formula en el escrito de impugnación del recurso, como es de orden público puede la Sala estimarla de oficio.

509 JURISDICCION Y PRO-CEDIMIENTO LABORAL.—NORMAS DE APLICACION GENERAL

Sentencia del Tribunal Central de Trabajo de 8 de marzo de 1951.

I.—HECHOS PROBADOS.—Las declaraciones testificales que constan en los expedientes disciplinarios no pueden considerarse como prueba documental, base de un recurso.

II.—SENTENCIA.—La revisión de los hechos probados se apoya en declaraciones de testigos, olvidando que la circunstancia de que figuren incorporadas a expediente disciplinario en nada afecta a su específica naturaleza de prueba testifical, sin que tal hecho las convierta en la documental exigida en el artículo 1.º de la Ley citada (22 de diciembre de 1949). (Ref. 344/49.)

510 JURISDICCION Y PRO-CEDIMIENTO LABORAL.—NORMAS DE APLICACION GENERAL

Sentencia del Tribunal Central de Trabajo de 8 de marzo de 1951.

I.—HECHOS PROBADOS.—Las Actas del juicio no pueden considerarse como documento a efectos de acreditar el error de hecho en la apreciación de las pruebas.

II.—SENTENCIA.—Según reiterada doctrina jurisprudencial, el acta del juicio no merece la consideración de documento a efectos de acreditar el error de hecho que se imputa al juzgador al apreciar los diversos elementos de convicción aportados por las partes.

511 SEGUROS Y SUBSIDIOS SOCIALES. — SEGURO OBLIGATORIO DE ENFERMEDAD

Sentencia del Tribunal Central de Trabajo de 5 de marzo de 1951.

I.—ASISTENCIA SANITARIA.—Procede el abono por el Seguro de los honorarios de un facultativo que practicó una intervención quirúrgica al asegurado, aun después de transcurridas las veintiséis semanas, si tal intervención había dejado de practicarse a su debido tiempo por el cirujano de la entidad aseguradora.

II.—SENTENCIA.—Si bien se limita por el artículo 38 de la Ley del Seguro de Enfermedad la asistencia médica y farmacéutica al plazo de veintiséis semanas, salvo la facultad de prorrogarlo cuando las circunstancias del enfermo lo aconsejen, que establece el artículo 39, lo que no se llevó a cabo, y

la amputación de la pierna al actor le fué hecha unos días después de transcurrido aquel plazo, que finalizó el 24 de julio, han de valorarse para la determinación de los derechos que pueda tener el obrero derivados de la operación las circunstancias que en relación con el hecho concurren; y teniendo en cuenta, según expresamente se reconoce por la representación de la Caja y consta en el acta del juicio, que a requerimiento de la esposa del enfermo intervino el médico inspector del Seguro, que interés fuera nuevamente reconocido por el cirujano de la Entidad, el que antes de transcurrir el plazo de asistencia lo hizo, apreciando una placa gangrenosa seca en el primer dedo y estimando el mal estado general del enfermo y temer "exitus letalis", y en el mejor de los casos una reproducción por el sitio de amputación, desahorsó a la familia la intervención quirúrgica, lo que aquélla, ante la opinión del técnico aceptó; pero al transcurrir los días, el 27 de julio, el empresario del obrero denunció al Inspector que el enfermo no recibía la asistencia necesaria, y ante estas manifestaciones inmediatamente se trasladó aquél otra vez a su casa, apreciando se iniciaba un proceso de gangrena y requiriendo al médico de cabecera para que extendiera el volante para que volviera el cirujano, por quien juzgaba necesario fuera visto, pero no se llevó a cabo por haber terminado tres días antes, el 24 de julio, el plazo de asistencia; hechos éstos reconocidos expresamente en el acta del juicio, por lo que la familia requirió la asistencia de un cirujano particular, que procedió a la amputación de la pierna; tal intervención, aun realizada después del día 24, no puede considerarse, del examen de las circunstancias acaecidas con independencia de la obligación de la prestación sanitaria que correspondía al Seguro y que si a este órgano jurisdiccional no corresponde a determinar en cuanto al trámite y normas de la asistencia que el art. 175 encomienda a órganos administrativos del Seguro, reconocido expresamente por el cirujano del Seguro que la operación no se llevó a cabo por el estado de gravedad del enfermo y posible reproducción de la lesión después de la amputación dentro del período normal de asistencia, y tres días después de concluido aquél se le dejó de prestar asistencia por lo que hubo de llevarse a cabo la operación por médico particular, lo que evidenció que tal acto podía hacerse; es indudable que asisten al trabajador unos derechos por la relación de la causa que los motivó, y que pudieran haberse evitado con una intervención que con anterioridad se estimó necesaria, y por ello no puede aplicarse en el caso de auto lo dispuesto en el art. 73 del Reglamento de 20 de enero de 1948, que se invoca en el escrito de impugnación, por la intervención de médico extraño al Seguro, al no haberse realizado por éstos, no obstante, los requisitos hechos."

512 REGLAMENTOS DE TRABAJO. — TRABAJO AGRICOLA

Sentencia del Tribunal Central de Trabajo, de 9 de marzo de 1951.

I.—SALARIO DOMINICAL.—Abonado el salario dominical, trabajando ese día, con el jornal sencillo, procede la condena al recargo del 40 por 100 y no del 140.

II.—SENTENCIA.—"Reconocido en la sentencia recurrida que el salario diario percibido por el actor estaba incrementado de acuerdo con lo dispuesto en el art. 59 de la Reglamentación Agrícola para la provincia de Huelva con la parte proporcional del correspondiente domingo y reconocido por el actor que al trabajar en ese día se le abonaba el salario sencillo, es indudable que en esa forma de retribución tiene percibido el correspondiente al domingo por el descanso como incluido en la percepción diaria y otro salario por el servicio prestado, por lo que únicamente ha dejado de abonársele el 40 por 100 de incremento que por el carácter de trabajo extraordinario le corresponde, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 53 de la Ley de Descanso Dominical, y al condenar el pago del salario incrementado con el 40 por 100 se infringió lo dispuesto en el citado artículo, ya que de esta forma recibiría tres salarios, más el aumento del tanto por ciento, por lo que ha de estimarse el recurso interpuesto y condenar únicamente al pago del 40 por 100."

513 NORMAS LABORALES DE APLICACION GENERAL.—REGLAMENTO DE TRABAJO APPLICABLE

Sentencia del Tribunal Central, de 16 de marzo de 1951.

I.—EMPRESAS MIXTAS.—Clasificada una industria por la Delegación Provincial de Trabajo dentro de un determinado Reglamento de Trabajo, no puede prosperar la pretensión deducida ante la Magistratura, de prestar servicios en Sección independiente.

II.—SENTENCIA.—"Clasificada la industria en que prestaba sus servicios la actora dentro de la Reglamentación de Metalgráficas, es evidente que por el principio de unidad de industria esta Reglamentación es la aplicable al caso de auto, como acertadamente razona el Magistrado de instancia, y si como se sostiene en el escrito de formalización del recurso, la Sección en que trabajaba la actora era sección totalmente independiente del resto de la industria, debió acudir a los órganos administrativos competentes, a fin de la clasificación dentro de la reglamentación que correspondiera a los trabajos efectivamente prestados y satisfechos los primeros con arreglo a la Reglamentación de aplicación a la Industria que afectaba al demandado, es evidente la improcedencia del recurso."

514 JURISDICCION Y PROCEIMIENTO LABORAL.—SANCIONES

Sentencia del Tribunal Central de Trabajo, de 10 de marzo de 1951.

I.—REDUCCION.—Habiendo incurrido un trabajador en causa justa de despido,

puede la Empresa imponerle, sin embargo, una sanción inferior.

II.—SENTENCIA.—“Establecido por el juzgador que el actor incurrió en la falta sancionada por la Ley de Contrato de Trabajo (artículo 77, apartado c) (Ref. 86/52) con el despido, es evidente la facultad de la Empresa para imponer sanción más beneficiosa para el productor, en atención a las circunstancias que pudieron concurrir en el agente.”

515 JURISDICCION Y PROCEDIMIENTO LABORAL.—RECURSO DE SUPLICACION

Sentencia del Tribunal Central de Trabajo, de 26 de marzo de 1951.

I.—HECHOS PROBADOS.—COSA JUZGADA.—Los hechos declarados probados en un juicio anterior, no vinculan al juzgador en posterior procedimiento.

II.—SENTENCIA.—“El segundo motivo parte de la base equivocada de admitir como firme de cosa juzgada los hechos declarados probados en otro juicio diferente; se está en el caso de desestimar el recurso entablado.”

516 JURISDICCION Y PROCEDIMIENTO LABORAL.—PRUEBAS

Sentencia del Tribunal Central de Trabajo, de 3 de marzo de 1951.

I.—LIBRO DE SALARIOS.—Las partidas autorizadas con la firma del trabajador consignadas en el Libro de Salarios, han de estimarse como auténticas, salvo prueba en contrario.

II.—SENTENCIA.—“Apareciendo expresamente consignado en el Libro de Salarios, y así reconocido en confesión por el actor, que autorizó con su firma la percepción de las pagas extraordinarias, aun cuando manifieste que no recibió tales cantidades, en tanto no se demuestre la certeza de esta afirmación, que se hace sin apoyarla en ninguna clase de prueba, ha de estarse, como lo hizo el Magistrado, a lo consignado en el Libro Oficial.”

517 JURISDICCION Y PROCEDIMIENTO LABORAL.—RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY

Sentencia del Tribunal Central de Trabajo, de 13 de marzo de 1951.

I.—INCOMPETENCIA DE JURISDICCION. Sienta la doctrina de que el recurso procedente en caso de impugnarse la competencia de jurisdicción es el de tasación y nunca el de suplicación.

II.—SENTENCIA.—“Que alegado en el acto del juicio y en el escrito del recurso incompetencia de jurisdicción y procediendo el recurso de casación por infracción de ley y doctrina legal contra las resoluciones de la Magistratura de Trabajo que decidan cuestiones

de competencia por razón de la materia, cualquiera que sea la cuantía litigiosa—art. 5.º, apartado 2.º de la Ley de 22 de diciembre de 1949 (Ref. 344/49)—, es visto que el procedente en el caso debatido debió serlo el de casación en lugar del de suplicación, erróneamente concedido en el fallo de la sentencia recurrida.”

518 JURISDICCION Y COMPETENCIA LABORAL.—JUSTICIA ROGADA

Sentencia del Tribunal Central de Trabajo, de 12 de marzo de 1951.

I.—INCONGRUENCIA.—El principio de congruencia exige que en las demandas se concreten las peticiones, sin que sea admisible la fórmula de reclamar “todos los derechos” correspondientes al actor.

II.—SENTENCIA.—“Las sentencias, incluso en la jurisdicción laboral, han de ser congruentes con las peticiones concretas y oportunamente deducidas en la demanda y discutidas en el juicio, y no pudo, por consiguiente, el juzgado “a quo” como pretende el recurrente demandante condenar cuando el actor es obrero a todos los derechos que le asistan, aunque no los invoque en su petición”, puesto que ni llega a tanto el carácter tuitivo de su legislación, ni le consiente el principio de igualdad de los litigantes, consustancial ante los tribunales una vez formalizado el cuasi-contrato de litis.”

519 JURISDICCION Y PROCEDIMIENTO LABORAL.—RECURSO DE SUPLICACION

Sentencia del Tribunal Central de Trabajo, de 26 de marzo de 1951.

I.—PRUEBAS.—No es admisible la presentación de nuevos documentos en trámite del recurso de suplicación.

II.—SENTENCIA.—“Tratándose de un “recurso extraordinario, tampoco es admisible en trámite suplicatorio la presentación de documentos o pruebas que debieron serlo en la instancia.”

520 NORMAS LABORALES DE APLICACION GENERAL.—DISPOSICIONES ACLARATORIAS

Sentencia del Tribunal Central de Trabajo, de 6 de marzo de 1951.

I.—EFECTOS RETROACTIVOS.—En qué casos las normas y disposiciones aclaratorias producen efectos retroactivos.

II.—SENTENCIA.—“Los efectos retroactivos de las leyes o disposiciones aclaratorias, sólo cabe reconocerlos en cuanto no constituyan derogación, renovación o modificación del régimen u orden jurídico establecido en la aclarada, ya que a ello se opone el artículo 5.º del Código civil.”

521 JURISDICCION Y PROCEDIMIENTO LABORAL.—RECURSO DE SUPPLICACION

Sentencia del Tribunal Central de Trabajo, de 6 de marzo de 1951.

I.—HECHOS PROBADOS.—No es necesario que se consignen en la sentencia todos los hechos discutidos, sino solamente aquellos en los que el Magistrado considere que han quedado suficientemente probados.

II.—SENTENCIA.—“No cabe impugnar la apreciación de la prueba con la pretensión de que se incluyan en el oportuno Resultando como hechos probados los que fueron alegados por la recurrente y excluidos de él por el juzgador, que no lo estimó ciertos o consideró que eran dudosos, pues, según la jurisprudencia interpretativa del art. 464 del Código de Trabajo, sólo ha de consignar los que estime verdaderos, sin que esté obligado a recoger los que se aleguen y sean objeto de prueba (sentencias 23 de abril de 1934 y 6 de abril de 1942).”

522 JURISDICCION Y PROCEDIMIENTO LABORAL.—EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS

Sentencia del Tribunal Central de Trabajo, de 25 de abril de 1951.

I.—PRUEBAS.—No es imprescindible la práctica, dentro del expediente, de todas las pruebas propuestas por el expedientado.

II.—SENTENCIA.—“A esta admisión (pruebas propuestas por el expedientado) no puede darse la interpretación absoluta que en el recurso se pretende, según la cual resultaría que al tenerse que admitir y aportar todas las pruebas que el expedientado propusiera, la efectividad del expediente quedaría a merced de quienes cometen faltas laborales y, por tanto, éstas impunes.”

523 JURISDICCION Y PROCEDIMIENTO LABORAL.—COMPARECENCIA EN JUICIO

Sentencia del Tribunal Central de Trabajo, de 12 de abril de 1951.

I.—REPRESENTACION POR LETRADO.—Nada se opone a que las partes sean representadas en el acto del juicio por Abogado en ejercicio.

II.—SENTENCIA.—“De acuerdo con la doctrina del Tribunal Supremo, contenida en sus sentencias de 17 de marzo de 1941 y 31 de enero de 1942, ni puede privarse de actuar como mandatario del que no puede concurrir al juicio laboral a quien sea abogado de profesión, ni admitiendo la representación por éste se infringe lo dispuesto en el artículo 2.º del Decreto de 13 de mayo de 1938.”

524 JURISDICCION Y PROCEDIMIENTO LABORAL.—EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS

Sentencia del Tribunal Central de Trabajo, de 4 de abril de 1951.

I.—DESPIDO.—No es necesaria la instrucción de expediente, cuando el despido no es por faltas cometidas en el trabajo.

II.—SENTENCIA.—“Al no fundarse el despido en la comisión de faltas por el trabajador, no es necesaria la instrucción de expediente, ni, por tanto, elevar propuesta a la Magistratura, según tiene declarado este Tribunal, entre otras, en sentencia de 24 de abril de 1950.”

525 JURISDICCION Y PROCEDIMIENTO LABORAL.—EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS

Sentencia del Tribunal Central de Trabajo, de 26 de abril de 1951.

I.—PRUEBAS.—Casos en que no es imprescindible la práctica de las pruebas propuestas por el expedientado.

II.—SENTENCIA.—“Al establecerse que “el expedientado propondrá cuantos medios de prueba considere convenientes, las cuales se practicarán, no se refieren a la necesidad absoluta y total de la admisión y práctica de cuanto proponga el expedientado, sino que lógicamente ha de entenderse que serán admisibles solamente de entre las pruebas propuestas las que guarden relación con los hechos, sean de práctica posible, fueren presentadas por el interesado o se hallen dentro de la Empresa, o en cualquier forma a ella sometidas, y que, en todo caso, no impliquen un perjuicio notable para la misma o una inútil y entorpecedora reparación. De no interpretarse así los citados preceptos, la rapidez y efectividad del procedimiento quedaría a merced del expedientado, y de hecho aparecería la facultad sancionadora de las infracciones laborales. Por lo expuesto, y dado que en la sentencia recurrida se hace aplicación de la interpretación que se ha razonado como errónea, declarando nulo el expediente disciplinario, instruido al demandante, por haberse rechazado razonadamente una prueba testifical de persona a la sazón ajena a la Empresa y que anteriormente había depuesto sobre los mismos extremos que el actor consignaba en su pliego de preguntas, y de otra prueba documental que se pretendía, fuese solicitada por la Empresa de entidad tan ajena a ella como es la Jefatura de Obras Públicas, resulta procedente estimar el recurso...”

526 JURISDICCION Y PROCEDIMIENTO LABORAL.—DESPIDO

Sentencia del Tribunal Central de Trabajo, de 2 de abril de 1951.

I.—CADUCIDAD.—En el cómputo del plazo de caducidad no se tendrán en cuenta los días inhábiles.

II.—SENTENCIA.—“Alegándose por la parte recurrente, como único motivo del recurso que interpone, la infracción del art. 82 de la Ley de Contrato de Trabajo (Ref. 86/52), por cuanto que el Magistrado de instancia no estimó la caducidad alegada al descontar los días festivos en el oportuno cómputo de tiempo, es vista la procedencia de desestimar tal alegación, ya que el juzgador, lejos de incurrir en el error invocado, obró acertadamente, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 304 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y siguiendo la doctrina sentada por el Tribunal Supremo, entre otras, en las sentencias de 11 de junio y 27 del mismo mes de 1946 y 17 de enero de 1947.”

527 NORMAS LABORALES DE APLICACION GENERAL.—H O R A S EXTRAORDINARIAS.—TRABAJO EN DOMINGO Y DIAS FESTIVOS

Sentencia del Tribunal Central de Trabajo, de 4 de abril de 1951.

I.—TRABAJO OBLIGATORIO.—Circunstancia en que es obligatorio el trabajo en domingo o en horas extraordinarias y cuya negativa a trabajar puede ser causa de justo despido.

II.—RESULTANDO DE HECHOS PROBADOS.—“Que X... desde junio de 1949 venía prestando sus servicios como Practicante, por cuenta de la Empresa... 2.º. Que hacia las doce de la noche del día 29 de octubre pasado, el citado Practicante se negó a efectuar un sondeo uretral a un obrero de la Empresa..., por lo que a fin de evitar los fuertes dolores que aquejaban al obrero, se le trasladó a un Hospital...”

III.—SENTENCIA.—“Alegándose en el recurso “a)—Que se trataba de un enfermo, y que, por lo tanto, tenía que ser operado por el Seguro de Enfermedad, b)—Que el hecho de que se trata ocurrió en domingo, por lo que el recurrente estaba libre y c)—Que se trataba de un trabajo en horas extraordinarias, y que por imperativo de la Ley de Jornada en su artículo 5.º, es libre la aceptación o denegación del obrero, claramente se advierte que un elemental deber de humanidad, dada la urgencia del caso, obligaba al recurrente a prestar el servicio que repetidamente se le pidió, sin que la negativa pueda hoy justificarse con la excusa de que el paciente tenía que haber sido asistido por el Seguro de Enfermedad, y sin que, por tratarse de un domingo o de horas extraordinarias, pueda entenderse que un enfermo aquejado de fuertes dolores de retención de orina haya de esperar el comienzo de la nueva jornada de trabajo para que pueda ser asistido.”

528 JURISDICCION Y PRO-CEDIMIENTO LABORAL.—RECURSO DE SUPPLICACION

Sentencia del Tribunal Central de Trabajo, de 25 de abril de 1951.

I.—ADHESION AL RECURSO.—No se admite la adhesión a este recurso.

II.—SENTENCIA.—“En este recurso extraordinario no existe el trámite de adhesión al recurso, por no tratarse del ordinario de apelación.”

529 NORMAS LABORALES DE APLICACION GENERAL.—TRABAJOS DE CATEGORIA INFERIOR

Sentencia del Tribunal Central de Trabajo, de 5 de abril de 1951.

I.—SALARIOS.—Aquel que preste servicios en categoría inferior, por conveniencia de la empresa, tiene derecho a percibir el salario de la categoría profesional superior que le corresponde, sin que tal salario pueda compensarse con los aumentos que consiga mediante el trabajo a destajo en la inferior categoría.

II.—SENTENCIA.—“Cuando un trabajador, por conveniencia de la Empresa, pase a desempeñar trabajos de categoría inferior a los que esté adscrito..., deberá conservar el salario correspondiente a su categoría personal, es indudable la obligación de la Empresa del pago de la diferencia entre el salario abonado y aquel que debió percibir por su categoría, sin que para el cómputo de estas diferencias pueda tenerse en cuenta el exceso sobre aquél mínimo que percibió durante la ejecución de trabajos a destajo que corresponden a un mayor rendimiento en relación con un superior esfuerzo.”

530 REGLAMENTOS DE TRABAJO.—CUMERCIO EN GENERAL

Sentencia del Tribunal Central de Trabajo, de 27 de abril de 1951.

I.—TRANSPORTE DE SERONES.—El plus establecido a favor del personal encargado del transporte de serones, no es de aplicación a los mozos que cargan con distintos envases.

II.—SENTENCIA.—“Aclarada la Orden de 17 de julio de 1948 por Resolución de la Dirección General de Trabajo de 1 de junio de 1950 (Ref. 744/50), en el sentido de que únicamente tienen derecho a percibir la mencionada prima los mozos que porten bultos denominados serones y no quienes manipulen otra clase de envases, es evidente la recta interpretación que de la citada Orden hace el juzgador de instancia.”

531 JURISDICCION Y PRO-CEDIMIENTO LABORAL.—PRUEBAS

Sentencia del Tribunal Central de Trabajo, de 2 de abril de 1951.

I.—DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER.—El resultado de las pruebas practicadas a instancias del Magistrado, para mejor proveer, son de la libre apreciación del mismo.

II.—SENTENCIA.—“Las pruebas aportadas, como consecuencia de diligencia acordada para mejor proveer, no obliga al juzgador, el que, al igual que las demás practicadas, ha de valorarlas y estimarlas o no, de acuerdo con la facultad que para su apreciación le conceden los distintos preceptos legales, ni es obligado, al no estimarlas; el razonar en su Considerando los motivos que para ello tuvo.”

532 NORMAS LABORALES DE APLICACION GENERAL. — CLASIFICACIÓN PROFESIONAL

Sentencia del Tribunal Central de Trabajo, de 4 de abril de 1951.

I.—COMPETENCIA DE LA EMPRESA. Inicialmente corresponde la clasificación profesional de los trabajadores a la misma Empresa, sin perjuicio de la facultad de éstos para impugnarla adecuadamente.

II.—SENTENCIA.—“La clasificación profesional corresponde a la Empresa, sin perjuicio de los recursos que puedan interponerse, y hasta tanto no se resuelvan éstos ha de estarse, a todos los efectos, a la que por la Empresa le fué asignada.”

533 NORMAS LABORALES DE APLICACION GENERAL. — HORAS EXTRAORDINARIAS

Sentencia del Tribunal Central de Trabajo, de 14 de abril de 1951.

I.—PRUEBA.—Reitera la doctrina de que la prueba de las horas trabajadas, día a día, corresponde al demandante.

II.—SENTENCIA.—“Es doctrina constante de la jurisprudencia que ésta prueba (horas extraordinarias), cuya carga incumbe a los demandantes, ha de ser practicada con toda exactitud, día a día, y en número preciso de horas en cada uno de ellos.”

534 NORMAS LABORALES DE APLICACION GENERAL.—PLUS DE DISTANCIA

Sentencia del Tribunal Central de Trabajo, de 27 de abril de 1951.

I.—COMPENSACION CON JORNADA REDUCIDA.—Puede compensarse el importe del plus de distancia con la reducción de jornada.

II.—SENTENCIA.—“Es esencial en el presente recurso determinar el fundamento de la reducción de jornada legal, establecida por el Comité Peritario Interlocal de X... y es preciso reconocer que se estableció la jornada de siete horas, percibiendo los obreros la legal de ocho, en atención a la distancia media entre las canteras y los centros de población en que residen los productores, acuerdo muy anterior a la Reglamentación de la Construcción y Obras Públicas, en la que se establece el plus de dis-

tancia en atención al mismo motivo, pretendiendo los actores percibir por este concepto dos cantidades, que supondría imponer a la Empresa un doble gravamen y que únicamente habría de satisfacerse en la correspondiente diferencia en el caso de que se hubiese acreditado que lo que les correspondía por el referido plus fuese superior al importe de la hora que percibían sin prestación de trabajo correspondiente.”

535 JURISDICCION Y PROCEIMIENTO LABORAL. — NORMAS DE APLICACION GENERAL

Sentencia del Tribunal Central de Trabajo, de 28 de marzo de 1951.

I.—INCONGRUENCIA.—No es incongruente la sentencia que declara injustificado un despido, habiéndose formulado esta petición en trámite de conclusiones, aunque en la demanda se pedía la nulidad de resolución del contrato laboral.

II.—SENTENCIA.—“El requisito de congruencia exigido para las sentencias en el artículo 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no puede tener el mismo alcance en Derecho Civil, eminentemente privado, que en Derecho social, protector del económicamente débil, y si en el primero se le va concediendo una amplitud muy distinta a la absoluta y rígida de acoplamiento inflexible del fallo de la sentencia al suplico de la demanda, ya que para los Tribunales lo esencial es la justicia de sus pronunciamientos, sobre la base de lo discutido en el juicio, más que las peticiones deficientes de las demandas, porque es más fuerte el derecho que ampara a los litigantes que el error en la acción ejercitada en Derecho laboral, dado su espíritu y naturaleza, forzosamente tiene que interpretarse la congruencia con una mayor latitud; por eso el Código de Trabajo, al determinar los requisitos de la demanda en el número 4 del artículo 456, exige la petición de condena, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 467, es decir, que autoriza a las partes para después de practicadas las pruebas concretar su petición sin alterar sustancialmente los motivos de pedir invocados en la demanda, lo que indudablemente faculta al juzgador a aplicar las disposiciones pertinentes.”

“Por lo expuesto, y si bien el actor solicita en su demanda la nulidad del despido, teniendo en cuenta que aquélla aparece extendida en un impreso y firmada únicamente por el interesado, no cabe duda que el motivo de la reclamación no es otro que el despido de que fué objeto el demandante; por ello, al pedir en réplica la injustificación del mismo, tal modificación no supone alteración sustancial de la solicitud formulada en la demanda, y reconociéndose por el demandado la realidad del despido, sin que aportase pruebas tendientes a demostrar la concurrencia de alguna de las causas enumeradas en el art. 77 de la Ley de Contrato de Trabajo (Ref. 86/52), es evidente que el Magistrado no incidió en incongruencia al declarar injusta la decisión de la Empresa de dar por terminado el contrato laboral.”

536 JURISDICCION Y PROCEDIMIENTO LABORAL.—NULIDAD DE ACTUACIONES

Sentencia del Tribunal Central de Trabajo, de 14 de marzo de 1951.

I.—SENTENCIA DICTADA POR MAGISTRADO DISTINTO AL QUE PRESIDIO EL JUICIO.—Se anularán las actuaciones, a partir de la citación de las partes, cuando la sentencia esté dictada por Magistrado distinto de aquél que presidió el acto del juicio.

II.—SENTENCIA.—“Dictada sentencia por Magistrado distinto del que presidió el acto del juicio... es procedente, de conformidad con la doctrina de la sentencia de esta Sala de 19 de octubre de 1950, reponer las actuaciones al estado de citación de las partes para la celebración del juicio, como único medio de que dicte sentencia el mismo juzgador que presentó la práctica de pruebas, pues tratándose de un procedimiento verbal y recogiendo en síntesis tanto las manifestaciones de las partes, como las declaraciones testimoniales, la simple lectura del acta no permite obtener el conocimiento completo y necesario para el fallo que adquiere, sin duda, el Magistrado que asiste al acto del juicio.”

537 JURISDICCION Y PROCEDIMIENTO LABORAL.—DESPIDO

Sentencia del Tribunal Central de Trabajo, de 16 de marzo de 1951.

I.—CADUCIDAD.—Para evitar los efectos de una posible caducidad, son admisibles las demandas por despido injustificado, sin haber apurado la vía gubernativa, en los casos en que este trámite sea preceptivo.

II. SENTENCIA.—“Por el corto plazo y efectos fatales de la caducidad de la acción de despido, establecida en el art. 82 de la Ley de Contrato de Trabajo (Ref. 86/52) la presentación a la Magistratura de Trabajo de las demandas por despido contra el Estado u organismos dependientes del mismo cuando, siendo necesario apurar la vía gubernativa, no van acompañadas de la resolución derogatoria o ejemplar duplicado de la reclamación a que se refieren los artículos 1.º y 2.º de la Ley de 26 de septiembre de 1941, no puede tenerse por nula y como si no hubiese sido realizada, sino que debe ser tenida por presentada, pero sin darle el trámite subsiguiente hasta tanto se haya acreditado haber seguido el procedimiento gubernativo. Con ello, y sin merma para las naturales y legales prerrogativas del Estado, se impide que resulte ilusorio el derecho del trabajador a reclamar por despido que estima injusto en los casos en que, como en el de autos, el organismo estatal en que los servicios fueron prestados se niega a recibir el escrito y duplicado prevenidos en el art. 1.º citado, permitiendo la

admisión condicionada de la demanda el que la Magistratura de Trabajo actúe para que la vía gubernativa sea apurada, lo que le estaría vedado si la demanda hubiese sido rechazada de plano y no produjese efecto alguno. El cómputo de caducidad... ha de hacerse entre la fecha del despido y la de presentación de la demanda, sin necesidad de presentarla nuevamente o de comparecer ante la Magistratura para reproducirla.”

538 NORMAS LABORALES DE APLICACION GENERAL.—ENFERMEDAD

Sentencia del Tribunal Central de Trabajo, de 6 de marzo de 1951.

I.—RESERVA DE PUESTO.—Circunstancias que han de concurrir para que sea reservado el puesto de trabajo durante la enfermedad del obrero.

II.—SENTENCIA.—“El artículo 70 de la Ley de Contrato de Trabajo (Ref. 86/52) al establecer que no podrá darse por terminado el contrato laboral durante una enfermedad exigen que se den en ésta dos circunstancias: primera, que no pueda atribuirse al trabajador, y segunda, que no exceda del plazo que determinan las leyes o reglamentaciones y en su defecto el uso o costumbre; y si bien en el presente caso la concurrencia del segundo requisito de los enunciados es evidente, no resulta lo mismo con el primero, ya que por no haberse dado cuenta a la Empresa se la privó de la facultad de comprobar la realidad de la enfermedad y, por tanto, los motivos que la originaron.”

539 NORMAS LABORALES DE APLICACION GENERAL.—CONTRATOS POR TIEMPO DETERMINADO. — CONTRATOS POR TIEMPO INDETERMINADO

Sentencia del Tribunal Central de Trabajo, de 14 de marzo de 1951.

I.—PRORROGA DE LOS CONTRATOS. La prórroga de un contrato por el tiempo en que el trabajador encuentra nuevo empleo, no debe considerarse como indefinida y, por otra parte, para establecer el límite de esa prórroga condicionada no es necesario acudir a la jurisdicción laboral.

II.—SENTENCIA.—“Concertado un contrato de trabajo por el tiempo de dos meses, con cláusula expresa de improrrogable, si antes de llegar el vencimiento del término establecido comunica la Empresa al productor que puede continuar hasta que encuentre trabajo, es visto que no se está en presencia de la prórroga tácita por tiempo indefinido a que se refiere el art. 76 de la Ley de Contrato de Trabajo de 26 de enero de 1944 (Ref. 86/52), sino que se trata de una prórroga expresamente concedida por la Empresa y condicionada al tiempo que el obrero tarde en hallar nueva colocación y claro es que siendo evidente la voluntad de las partes de que la relación la-

boral no se convierta en indefinida, se conseguiría con la inactividad del actor, no buscando trabajo, o rechazando sin causa el que se le ofreciera, lo que indudablemente sería inadmisibles, es visto que al entenderlo así la sentencia de instancia obró con acierto, y pues estimó cumplida la obligación de la Empresa de dar trabajo por el espacio de un plazo en que razonablemente debió el peón demandado encontrar trabajo, no cabe hablar de despido injustificado, puesto que no era necesario acudir a la Magistratura en trámite previo de despido, para que aquella señalase un plazo prudencial de duración de la obligación patronal, como se deduce de la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de febrero de 1914 al interpretar el artículo 1.128 del Código, sobre obligaciones que no tengan señalado plazo."

540 NORMAS LABORALES DE APLICACION GENERAL.—DESPIDO

Sentencia del Tribunal Central de Trabajo, de 27 de marzo de 1951.

I.—ABANDONO DE TRABAJO.—Aun constituyendo falta, no es causa suficiente de despido, el abandono de trabajo antes de terminar la jornada realizada por el obrero con el fin de consultar en el Sindicato sobre si podía continuar sin que le dieran trabajo alguno que realizar.

II.—SENTENCIA.—"El hecho de que el actor abandonase la oficina antes de la hora de salida a raíz de una discusión con su superior inmediato, sin que consten los términos de la misma, y manifestando a sus compañeros de trabajo que iba a decirse al Sindicato, no constituye causa justa de despido, habida cuenta de que... no se daba al demandante el trabajo que le correspondía, teniéndole en su puesto donde no realizaba misión alguna y si bien no justifica plenamente la falta, si la atenúa, hasta el punto de hacerla excesiva la sanción de despido impuesta por la Empresa."

541 NORMAS LABORALES DE APLICACION GENERAL.—DESPIDO

Sentencia del Tribunal Central de Trabajo, de 16 de marzo de 1951.

I.—DESLEALTAD, FRAUDE Y ABUSO DE CONFIANZA.—El fraude, aunque no se haya consumado, es causa justificada de despido.

II.—SENTENCIA.—"La circunstancia de que el fraude de billeteaje, no llegase a consumarse, y todo ello hubiese quedado en una simple y supuesta intención de defraudar no puede, ni debe impedir que prospere la propuesta de sanción de despido formulado por la Empresa, pues, aun dado esto por cierto, resulta evidente la comisión, por parte del expedientado, de una falta de deslealtad y de abuso de confianza que forzosamente ha de producir la falta de confianza, que es elemento esencial en el con-

trato de trabajo y que son causa justa de despido sin indemnización, a tenor de lo dispuesto en el apartado c) del art. 77 de la Ley de Contrato de Trabajo." (Ref. 86/52).

542 JURISDICCION Y PRO-CEDIMIENTO LABORAL.—MAGISTRATURA DE TRABAJO

Sentencia del Tribunal Central de Trabajo, de 27 de marzo de 1951.

I.—SEGUNDA CITACION.—En el procedimiento laboral vigente no existe el trámite de segunda citación.

II.—SENTENCIA.—"No procede la suspensión de los actos de conciliación y juicio para hacer nuevo señalamiento, aunque el demandado haya sido citado por cédula, pues es doctrina jurisprudencial, declarada en sentencias del Tribunal Supremo de 9 de marzo de 1943, 1.º de mayo de 1944 y 3 de junio de 1947, que el artículo 462 del Código de Trabajo, en el que aquella segunda citación se disponía, quedó derogado por el art. 2.º del Decreto de 13 de mayo de 1938, en cuanto dispone expresamente que la celebración del acto del juicio tendrá lugar, en única convocatoria, el mismo día de la conciliación sin avenencia."

543 JURISDICCION Y PRO-CEDIMIENTO LABORAL.—MAGISTRATURA DE TRABAJO

Sentencia del Tribunal Central de Trabajo, de 27 de marzo de 1952.

I.—SUSPENSION DEL JUICIO.—No procede la suspensión del juicio por el simple hecho de presentar ante la Magistratura un certificado de enfermedad del demandado, sin escrito que haga la petición de tal suspensión.

II.—SENTENCIA.—"Tampoco es causa de suspensión la simple remisión a la Magistratura de Trabajo de un certificado en enfermedad, sin que le acompañe escrito alguno en que se formule la petición de la suspensión."

544 NORMAS LABORALES DE APLICACION GENERAL.—OFICINAS Y DESPACHOS. DESPIDO

Sentencia del Tribunal Central de Trabajo, de 3 de marzo de 1951.

I.—MALICIA.—No es esencial la existencia de malicia para que el acto realizado por el trabajador pueda ser causa justificada de despido.

II.—SENTENCIA.—"En cuanto a la infracción del párrafo primero del artículo 64 de la Reglamentación de Trabajo en Oficinas y Despachos, no cabe estimarla, pues si bien

en el citado precepto se establece que las faltas cometidas por el personal se clasificarán atendiendo a su importancia, transcendencia y malicia, en leves, graves y muy graves, tal precepto sólo constituye una norma general de clasificación que no puede interpretarse en el sentido de que la ausencia de malicia impida la clasificación de una falta como muy grave, sino que ha de entenderse que el elemento intencional, representado por la palabra malicia, puede convertir una falta de escasa importancia material en falta muy grave por el doloroso propósito del autor, y, asimismo, puede existir una falta de gran transcendencia e importancia en sus consecuencias materiales sin que exista un propósito malicioso del causante, y que deben ser calificadas como muy graves, pues de otra forma las negligencias o las graves imprudencias, en que no podía estimarse malicia, quedarían al margen de las sanciones muy graves, lo que indudablemente sería inadmisibles, por lo que se ha de concluir que la malicia a que el art. 64 de la Reglamentación de Trabajo se refiere no es sino una circunstancia que el juzgador ha de tener en cuenta en cada caso concreto."

545 NORMAS LABORALES DE APLICACION GENERAL.—DESPIDO

Sentencia del Tribunal Central de Trabajo, de 26 de marzo de 1951.

I.—DESLEALTAD Y ABUSO DE CONFIANZA.—Es siempre causa de despido, aun cuando voluntariamente el trabajador reintegrara lo sustraído y el acto lo hubiera cometido para atender necesidades familiares y cualquiera que sea la cuantía del daño.

II.—SENTENCIA.—Del hecho declarado probado... se deduce con absoluta claridad que el auxiliar administrativo..., el sustraer un recibo... haciéndose cargo de su importe y destinarlo a atenciones particulares incurrió en causa de extinción del Contrato de Trabajo, determinado en el apartado e) del artículo 77 de la Ley de dicho nombre, de 26 de enero de 1944..., y no cabe apreciar en hechos de tan manifiesta gravedad circunstancias concurrentes que aminoren la sanción impuesta por la Empresa, pues aunque inmediatamente devolviera el inculpa la cantidad sustraída eliminando el perjuicio al patrono, y su empleo fuera el de atender necesidades familiares, tales circunstancias no excluyen que el hecho realizado constituya fraude, deslealtad y abuso de confianza, y que el motivo terminal del contrato venga, en este caso, impuesto por la pérdida producida de la natural confianza que ha de presidir como elemento básico y fundamental en toda relación laboral, sin tener en cuenta la cuantía del daño ni el grado de intencionalidad al producido, teniéndolo así reconocido el Tribunal Supremo, entre otras..., y este Tribunal Central en las (sentencias) de 26 de abril de 1950 y 27 de mayo y 7 de noviembre de igual año.

546 NORMAS LABORALES DE APLICACION GENERAL.—EXPEDIENTES DE CRISIS

Sentencia del Tribunal Central de Trabajo, de 4 de abril de 1951.

I.—CONCESION TACITA.—Transcurrido el término de veinte días desde la solicitud de autorización para el despido del personal por causa de crisis, sin que haya resuelto la Delegación Provincial de Trabajo, se entiende concedida tácitamente tal autorización, pudiendo resolverse la relación laboral con los trabajadores, aun cuando con posterioridad a tal término la Delegación resulta denegatoriamente la petición solicitada; y en todo caso, el plazo de veinte días ha de contarse en relación con la fecha de notificación a la Empresa, y no desde la fecha de la resolución del Organismo oficial.

II.—SENTENCIA.—“El párrafo último del artículo 3.º del Decreto de 26 de enero de 1944, sobre suspensión o cese de industrias, dispone que, si en el plazo de veinte días hábiles no se hubiese dictado resolución por el Organismo competente, se presumirá que se accede en todos sus términos a lo solicitado por el empresario, sin perjuicio de la responsabilidad exigible al funcionario que por negligencia diere lugar a ello, y como quiera que en el caso presente aparece... que si bien la resolución de la Delegación Provincial de Trabajo fué dictada dentro del plazo..., no fué notificada hasta (fecha posterior), lo que plantea el problema de si la resolución ha de ser dictada o notificada dentro de los veinte días hábiles, o bastaría con que apareciera dictada dentro de dicho plazo y notificada después; y claro es que debe estimarse que la interpretación procedente es la primera, pues si bien cabe distinguir entre la fecha en que la resolución se dicta y la notificación de la misma, es evidente que el efecto de vinculación de la resolución de la Delegación de Trabajo, sólo se producirá a partir de la notificación al empresario y, claro es que, si por la inversión de la doctrina de silencio administrativo aplicada en el precepto que se comenta se entienda concedida la autorización que se solicitaba si transcurren veinte días hábiles desde que se formuló la petición, ha de admitirse que dentro de este plazo el empresario ha de ser notificado de la resolución recaída, pues de otra forma la presunción de autorización sería ineficaz, ya que en cualquier momento, después de rebasados los veinte días, podían notificarse la resolución con efectos retroactivos, creando así una situación de inseguridad que, sin duda, no fué propósito del legislador, y máxime cuando el carácter de urgencia que revisten las cuestiones de ceses o suspensión por causa de crisis económica exigen una rápida solución, que de otro modo podría ser indefinidamente prolongada con sólo el retraso de las notificaciones.”

547 JURISDICCION Y PRO- CEDIMIENTO L A B O - RAL.—NORMAS DE APLICACION GENERAL

Sentencia del Tribunal Central de Trabajo,
de 2 de abril de 1951.

I.—CADUCIDAD.—A los efectos de evi-
tar la caducidad se admite la presentación
de demandas por despido, sin haber apu-
rado la vía gubernativa, en los casos de
ser preceptivo este trámite.

II.—SENTENCIA.—“El primer motivo del
recurso se funda en la infracción de la Ley de
26 de septiembre de 1941, por estimar que la
parte actora no acreditó haber agotado la vía
gubernativa con anterioridad a la presentación
de la demanda, y teniendo en cuenta que, dado
el plazo presentorio concedido en el artícu-
lo 82 de la Ley de Contrato de Trabajo (Refe-
rencia 86/52) para el ejercicio de la acción por
despido, nada tiene de particular que, para evi-
tar una posible caducidad, se plantease la de-
manda, sin perjuicio de iniciar después el trá-
mite previo regulado en aquella disposición.”

548 REGLAMENTOS DE TRABAJO. — CONFECCION, VESTIDO Y TOCADO

Sentencia del Tribunal Central de Trabajo,
de 9 de abril de 1951.

I.—EXPEDIENTE DISCIPLINARIO.—
Sólo es preceptivo el expediente discipli-
nario previo y la propuesta de despido ante
la Magistratura, en los casos de trabaja-
dores de taller con más de quince ope-
rarios.

II.—SENTENCIA.—“Si bien es cierto que
al publicarse la Reglamentación de Trabajo
para las Actividades de Confección, Vestido y
Tocado, se decía en su art. 83 que era precep-
tiva la formación de expediente en los casos
de sanción por faltas graves o muy graves, y
que, en los casos en que la sanción a imponer
fuese la de despido, éste no podría ser acor-
dado por la empresa, sino propuesto a la Ma-
gistratura, no es menos evidente que tal redac-
ción fué modificada posteriormente por la Re-
solución de la Dirección General de Trabajo de
fecha 30 de noviembre de 1948... quedando
modificado, como consecuencia de tal rectifi-
cación, el precepto anteriormente mencionado
en el sentido de que lo en él dispuesto era apli-
cable respecto a los trabajos que no sean a do-
micilio, siempre que su número no exceda de
quince.”

549 JURISDICCION Y PRO- CEDIMIENTO L A B O - RAL.—DESPIDO

Sentencia del Tribunal Central de Trabajo,
de 20 de abril de 1951.

**I.—FRAUDE, DESLEALTAD O ABUSO
DE CONFIANZA.**—Reitera la doctrina de
que las sustracciones realizadas por el tra-

bajador son causa justificada de despido,
con independencia del escaso valor de lo
sustraído.

II.—SENTENCIA.—“No puede alegarse
para impugnar el despido “el escaso valor de
lo sustituido”, ya que además de no haberse ta-
sado, lo esencial en estos casos es el hecho
en sí, y su gravedad no depende de la cuantía.”

550 JURISDICCION Y PRO- CEDIMIENTO L A B O - RAL.—EXPEDIENTES DISCIPLI- NARIOS

Sentencia del Tribunal Central de Trabajo,
de 10 abril de 1951.

I.—PRUEBAS.—No puede estimarse co-
mo causa de indefensión el que en el ex-
pediente no se hayan practicado las prue-
bas propuestas por el expedientado, si las
mismas pudieron realizarse en el acto del
juicio.

II.—SENTENCIA.—“La declaración de im-
pertinencia de parte de la prueba propuesta por
el expedientado... en modo alguno puede ser
considerado como causante de indefensión y
llevar aparejado vicio de nulidad, pues... es
evidente que la parte recurrente pudo suplir
el alegado defecto proponiendo en el acto del
juicio la prueba que le había sido rechazada.”

551 NORMAS LABORALES DE APLICACION GENE- RAL.—CONTRATO DE APRENDI- ZAJE

Sentencia del Tribunal Central de Trabajo,
de 25 de mayo de 1951.

I.—PRESUNCION.—El hecho de que no
se haya otorgado contrato escrito no opta
para que, sin embargo, pueda calificarse
como de aprendizaje.

II.—SENTENCIA.—“La falta de formali-
zación del contrato de aprendizaje podría dar
lugar a la correspondiente sanción adminis-
trativa, pero no es suficiente para considerar
una categoría superior cuando del conjunto
de las pruebas practicadas por el Magistra-
do que ha de apreciarlas se consideran de
aquella naturaleza los servicios prestados.”

552 NORMAS LABORALES DE APLICACION GENE- RAL.—HORAS EXTRAORDINA- RIAS

Sentencia del Tribunal Central de Trabajo,
de 22 de mayo de 1951.

I.—PRUEBA.—Se reitera la doctrina de
que las horas extraordinarias han de pro-
barse una a una y día a día, sin que sea
suficiente una declaración general en los
hechos probados.

II.—SENTENCIA.—“La falta de prueba

adecuada, que al reclamante incumbía para justificar la realidad de las horas extraordinarias, que dice trabajadas, no puede sustituirse por la presunción, admitida por el juzgador como fundamento del fallo condenatorio, basada en el hecho de que aquél "estaba durante todo el día en inmediata y continua relación de trabajo, con excepción del tiempo invertido en la comida", ya que de tal hecho no aparece..., la determinación concreta de las trabajadas, base necesaria para que puedan ser estimadas, conforme a reiterada jurisprudencia."

553 NORMAS LABORALES DE APLICACION GENERAL.—ENFERMEDAD

Sentencia del Tribunal Central de Trabajo, de 4 de mayo de 1951.

I.—RESERVA DE PLAZA.—Terminado el plazo reglamentario de reserva de puesto de trabajo por motivo de enfermedad, automáticamente queda resuelto el contrato laboral sin necesidad de notificación alguna.

II.—SENTENCIA.—Trancurrido el plazo reglamentario de reserva de puesto por enfermedad "éste quedó extinguido al finalizar dicho período de tiempo, sin necesidad de comunicarlo al actor, ya que, además de no existir ningún precepto legal que imponga tal notificación, la finalidad que se persigue con la determinación del plazo alcanza por igual el garantizar la continuidad de la producción y los derechos del trabajador que sustituye el enfermo."

554 REGLAMENTOS DE TRABAJO.—SECTOR SEDE-RO DE LA INDUSTRIA TEXTIL

Resolución de la Dirección General de Trabajo, de 14 de noviembre de 1952.

I.—PLUS DE CARESTIA DE VIDA.—El Plus de Carestía de Vida reglamentario se calculará sobre el salario base inicial y los aumentos por años de servicio.

II.—RESOLUCION.—El mencionado Plus de Carestía de Vida recae, no sólo sobre la retribución básica, sino, además, sobre los aumentos periódicos por tiempo de servicio, pues si bien en el apartado 1.º de la Disposición Adicional 2.ª de las Ordenanzas de Trabajo, se dispone que dicho Plus se establece sobre el salario base o el destajo, en su caso, que tenga respectivamente asignado el personal que menciona, la circunstancia de que el Plus de Carestía entre directamente en el concepto de salario en metálico para constituir una retribución directa de trabajo, por una parte y de otra la de ser verdadero salario en su más estricto sentido, por cuanto son aumentos, periódicos y legales del mismo, es indudable que cumplido el término señalado para el percibo de tales aumentos periódicos no pueden señalarse diferencias entre el salario base y el Plus de antigüedad.

555 NORMAS LABORALES DE APLICACION GENERAL.—DESPIDO

Sentencia del Tribunal Supremo, de 19 de junio de 1952.

I.—FRAUDE O ABUSO DE CONFIANZA.—Es causa justificada de despido el hecho comprobado de que el empleado de una compañía aérea pase de contrabando determinados artículos.

II.—HECHOS PROBADOS.—"1.º—Que los demandantes... venían prestando sus servicios como radiotelegrafista aéreo y piloto aviador por cuenta y orden de la Compañía... 2.º—Que con motivo de suscribir ambos demandantes una carta dirigida al Oficial de aeropuerto de..., denunciando sustracciones que venía efectuando desde hacía más de un año—según ellos—el mozo..., cuyas sustracciones correspondían a encargos que traían escondidos para evitar el pago de Aduanas..."

III.—SENTENCIA.—"En el primer motivo, además de argüir con hechos improbados, que no se avienen con aquellos que la Magistratura declaró ciertos, se pretende que se admita como base del fallo que el señor... se limitó a pasar unos cigarrillos para su uso personal... Tal pretensión es inaceptable como improbada, quedando subsistentes aquellos hechos que el Tribunal de instancia imputa al recurrente, y ellos integran la causa de despido que autoriza el caso c) del art. 77 de la Ley de 26 de enero de 1944, reguladora del contrato de Trabajo. Para valorar la entidad de la falta, basta tener presente, la índole del servicio que la empresa demandada presta, la repercusión de ellos a fines de crédito moral y material y de orden económico por los actos que sus empleados puedan realizar cuando la sirven. Indudablemente que la conducta de los actores, conforme se estimó probada, es motivo muy fundado para que la Compañía demandada, perdiendo la confianza que necesariamente debe tener en sus funcionarios, les haya despedido."

556 JURISDICCION Y PROCEDIMIENTO LABORAL. RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY

Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de junio de 1952.

I.—ERROR DE DERECHO.—Para que prospere el recurso de casación fundado en este motivo es necesario citar el precepto legal que valora la prueba o que priva de ella a la que fué atendida por la sentencia.

II.—SENTENCIA.—"El error de derecho precisa la cita de una disposición legal que imponga la fuerza probatoria de una prueba, que haya sido desestimada, o que, por el contrario, priva de eficacia a la que sea fundamento esencial del fallo."

557 SEGUROS Y SUBSIDIOS SOCIALES. — ACCIDENTES DEL TRABAJO

Sentencia del Tribunal Supremo, de 20 de octubre de 1952.

I.—HIJOS BENEFICIARIOS.—Sólo tienen derecho a indemnización los hijos del trabajador menores de 18 años e inútiles para el trabajo, pero no aquéllos que pueden realizar algunas labores, si bien no puedan realizar aquéllos que exijan un gran vigor físico o considerable esfuerzo.

II.—SENTENCIA.—“Conforme al art. 28 número segundo de la Ley de Accidentes del Trabajo, los hijos de un fallecido en accidente laboral, mayores de 18 años, sólo tiene derecho a indemnización cuando sean inútiles para el trabajo, expresión que debe interpretarse en el sentido de carecer de aptitud para atender a su propia subsistencia por su trabajo, y por tanto, no se puede entender en esa situación a la mujer que por consecuencia de deformidades orgánicas no puede dedicarse a trabajos ruidos de fuerza, pero sí a otros muchos, apropiados de su sexo, que, como ocurre ordinariamente, no precisan gran esfuerzo físico y, por ello, no incide la sentencia recurrida en la infracción del citado art. 28 de la Ley y 29 del Reglamento de accidentes que denuncia el único motivo del recurso.”

558 NORMAS LABORALES DE APLICACION GENERAL.—DESPIDO

Sentencia del Tribunal Supremo, de 28 de octubre de 1952.

I.—FALTA DE ASISTENCIA.—Es causa justa de despido la falta de asistencia motivada por haber sido condenado el trabajador por la comisión de un delito.

II.—SENTENCIA.—“Para resolver con acierto el presente recurso no basta simplemente afirmar que el obrero que está preso no puede ir al trabajo, aun queriendo ir, porque hay una causa que se lo impide..., sino que es preciso analizar y conocer la naturaleza y calidad de esa causa, origen de tal privación de libertad, y que no es lo mismo y de igual importancia legal y social perder la libertad como víctima de un secuestro, de una detención ilegal, por una medida precautoria, que perderla a virtud de condena de los Tribunales encargados de administrar justicia, debiendo tenerse en cuenta la causa de la prisión y el tiempo que en ella se lleva, y en el presente caso el origen de tal situación del obrero... por delito de propaganda y asociación ilegal, habiendo sido penado a un año.”

559 NORMAS LABORALES DE APLICACION GENERAL.—TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA

Sentencia del Tribunal Supremo, de 24 de noviembre de 1952.

I.—AGENTE MEDIADOR.—No puede

considerarse como trabajador por cuenta ajena y, por consiguiente, no queda amparado por la legislación laboral.

II.—SENTENCIA.—“En la vida mercantil actual, cada día con más frecuencia, impuesta por la necesidad, agentes autónomos dedicados a proporcionar a las Empresas y comerciales, negocios y operaciones, y como no tienen la representación del principal—pues si la tuvieran serían verdaderos factores mercantiles—, su misión consiste en proponer a la empresa los negocios, proporcionando la clientela y ofreciendo la suficiente información sobre ésta, para el mejor éxito de las operaciones propuestas, las que se realizan directamente entre el comerciante y el cliente, con ausencia del agente mediador, características éstas de los servicios que los demandantes prestan a la Empresa demandada y, por tanto, actúan con libertad y medios propios en la realización de sus gestiones, si bien naturalmente, las operaciones que propongan se han de someter a las condiciones que la Empresa establezca y como ello excluye la idea de dependencia en el modo, tiempo y cuantía de las gestiones, no puede entenderse que exista entre las partes procesales contrato de trabajo.”

560 NORMAS LABORALES DE APLICACION GENERAL.—SERVICIOS DOMESTICOS

Sentencia del Tribunal Supremo, de 19 de noviembre de 1952.

I.—ABASTECIMIENTO DE AGUA.—La mujer encargada de suministrar agua potable en sus domicilios particulares a los trabajadores de una Empresa, recibiendo de éstos la retribución pactada, no puede considerarse como trabajadora de tal Empresa.

II.—HECHOS PROBADOS.—1.º Que la actora se ha dedicado desde julio de 1948 a octubre del corriente año, a suministrar a los empleados de la empresa demandada el agua necesaria para abastecer sus domicilios particulares. 2.º Para ello, transportaba cántaros de agua de una fuente distante aproximadamente un kilómetro. 3.º Que el precio convenido entre las partes era el de veinte céntimos por cántaro y con arreglo a él ha cobrado la actora.

III.—SENTENCIA.—“El trabajo efectuado sin horario, jornada ni dependencia, sin más control que de exigir procediera el agua de fuente no contaminada, por tanto alzado, no tiene característica laboral, por lo cual y prescindiendo a varios domicilios, tiene semejanzas con el doméstico, sin signos bastantes a encuadrarlo como de trabajo.”

561 DEPARTAMENTOS MINISTERIALES, INSTITUCIONES Y ORGANISMOS OFICIALES.—JUNTA NACIONAL DE PA-RO OBRERO

Ley de 20 de diciembre de 1952, *Boletín Oficial del Estado* núm. 356, del 21 de diciembre de 1952.

I.—SUBVENCIONES.—Se concede un suplemento de crédito de sesenta millones de pesetas, con destino a aumentar la subvención del Estado a la Junta Nacional del Paro Obrero.

II.—TEXTO LITERAL.—Agotado el crédito que el Presupuesto en vigor figura para el otorgamiento de subvenciones a obras destinadas a mitigar el paro obrero, resulta preciso se proceda a su más rápida suplementación para que en todo momento pueda la Junta administradora de dichos fondos acudir a la absorción del paro involuntario en las comarcas en que sea necesario hacerlo.

Y como en el expediente que a dichos fines se ha instruido constan los informes favorables de la Intervención General y del Consejo del Estado, de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,

DISPONGO :

Artículo primero.—Se concede un suplemento de crédito de sesenta millones de pesetas al figurado en el Presupuesto en vigor de la Sección novena de Obligaciones de los Departamentos ministeriales, "Ministerio de Trabajo"; capítulo cuarto, "Gastos de carácter extraordinario o de primer establecimiento"; artículo primero, "Construcciones y adquisiciones extraordinarias"; grupo único, "Junta Nacional del Paro"; concepto único, "Para subvenciones propuestas por la Ponencia con aprobación del Pleno y acuerdo del Consejo de Ministros".

Artículo segundo.—El importe a que asciende el mencionado suplemento de crédito se cubrirá en la forma determinada por el artículo cuarenta y uno de la vigente Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública.

562 REGLAMENTOS DE TRABAJO.—INDUSTRIA RESINERA

Resolución de la Dirección General de Trabajo, de 15 de diciembre de 1952, *Boletín Oficial del Estado* núm. 356, del 21 de diciembre de 1952.

I.—GRATIFICACION EXTRAORDINARIA.—Aclara la Orden de 3 de diciembre de 1952, en cuanto al salario-base que ha de computarse en esta gratificación, así como en cuanto al personal con derecho a ésta.

II.—TEXTO LITERAL.—La Orden de 3 de diciembre de 1952 (Ref. 462/52) por la que se acordó la concesión de una gratificación extraordinaria en favor de los trabajadores afectados por la Reglamentación Nacional de Trabajo para la Industria Resinera, aprobada por Orden de 14 de julio de 1947, establece que para calcular la misma se entenderá por salario el base de la categoría del trabajador, incrementado con los aumentos por antigüedad, en su caso, y el plus o pluses de carestía de vida legalmente establecidos.

El cumplimiento de dicha disposición no ofrece ninguna duda en cuanto al personal fijo de las empresas, que trabajan a jornal, pero sí en cambio en cuanto a los obreros de monte, resineros y remasadores que trabajan

a destajo y que prestan su servicio durante la temporada de recolección de la miera, y con objeto de que se proceda en todo caso con criterio uniforme.

Esta Dirección General ha tenido a bien acordar:

1.º Que la gratificación extraordinaria de una mensualidad que corresponde percibir a los resineros y remasadores de acuerdo con la Orden de 3 de diciembre de 1952, debe calcularse partiendo del salario regulador que para los mismos fija el artículo 30 de la Reglamentación Nacional de Trabajo para la Industria Resinera, incrementado con los pluses del veinte y veinticinco por ciento establecidos en disposición adicional del referido Reglamento y Orden de 17 de noviembre de 1950 (Ref. 825/50), respectivamente.

2.º Que tienen derecho a la referida gratificación los resineros y remasadores contratados en la campaña del corriente año y que no hubiesen sido despedidos por falta muy grave o abandonado el trabajo confiado a cada uno de ellos, antes de su terminación.

563 REGLAMENTOS DE TRABAJO.—VARIOS

Resolución de la Dirección General de Trabajo, de 16 de diciembre de 1952, *Boletín Oficial del Estado* núm. 356, del 21 de diciembre de 1952.

I.—GRATIFICACION EXTRAORDINARIA.—Se dictan normas para determinar el personal con derecho a esta gratificación y sobre el salario que ha de servir de base para fijar su importe.

II.—TEXTO LITERAL.—En aclaración al contenido de las Ordenes de este Ministerio de 30 de octubre, 28 de noviembre y 1 y 3 de diciembre del año en curso (Refs. 412/52, 460/52, 461/52 y 462/52), publicadas, respectivamente, en el "Boletín Oficial del Estado" de 1 de noviembre y 1, 2 y 4 de diciembre.

Esta Dirección General, en uso de las atribuciones que le confiere el apartado a) del artículo quinto del Decreto de 4 de agosto de 1952, ha tenido a bien acordar:

Primero.—Las gratificaciones extraordinarias establecidas en las Ordenes de referencia, han de abonarse en su integridad, tanto a los trabajadores fijos como a los eventuales que se hallen presente en las empresas respectivas en las fechas que a continuación se indican:

a) Las gratificaciones establecidas por las Ordenes comunicadas del 2 de octubre se abonarán a quienes estuviesen presente en la propia fecha.

b) La gratificación al personal de la RENFE, aprobada por Orden comunicada de 10 de octubre, se abonará a los trabajadores presentes en dicho día.

c) Las gratificaciones establecidas por Orden comunicada del 24 de octubre y las restantes que se contienen en la Orden del 30 del propio mes, publicada en el "Boletín Oficial del Estado" del 1 de noviembre, se abonarán a los trabajadores presentes en el expresado día 30.

d) Las gratificaciones establecidas por las Ordenes de 28 de noviembre y 1 y 3 de diciembre se abonarán a los trabajadores que estuviesen presentes en las expresadas fechas de aprobación.

Segundo.—Tendrá el carácter de presentes en las empresas no sólo quienes se hallasen en la prestación de trabajo efectivo, sino quienes se encontrasen en situación de baja por incapacidad temporal derivada de accidente de trabajo o de enfermedad, en tanto perciban la prestación económica del Seguro o de la empresa. Tendrán también este carácter quienes de baja por enfermedad se encontrasen en los cuatro primeros días de ésta o dentro de las veintiséis primeras semanas, siempre que el no percibir la indemnización del Seguro se debiese a no haber cubierto aún el período de carencia.

Tercero.—No alcanzará el derecho al disfrute de gratificación a los trabajadores que en las fechas indicadas se hallasen de baja por causa del Servicio Militar, a excepción de aquellos que, en virtud de los preceptos de su Reglamentación, disfrutasen de salarios en el mes en que fué aprobada la gratificación correspondiente.

Cuarto.—No tendrán consideración de salarios en ningún caso a los efectos de la gratificación las percepciones en especie que percibiesen los trabajadores con independencia de los salarios reglamentarios a que se alude en el texto de las Ordenes.

Quinto.—El plus de capitalidad establecido en la Reglamentación Nacional del Trabajo en el Comercio tendrá el concepto de salario para el percibo de las gratificaciones.

Sexto.—Por su carácter de normas complementarias de la Reglamentación de Trabajo en el Comercio la gratificación establecida para esta Ordenanza por Orden de 30 de octubre último será de aplicación a los trabajadores de las Empresas de Exportación de Pescado Fresco a que se refiere la Orden de 10 de junio de 1948.

Séptimo.—Las gratificaciones establecidas en favor de los trabajadores incluidos en la Reglamentación Nacional del Trabajo en la Pesca Marítima deberán ser abonadas también a quienes trabajen en la modalidad de pesca a la parte cuyo importe será abonado con cargo al Monte Mayor, entendiéndose por salario el que se fija en el artículo 55 de la propia Reglamentación incrementando con el Plus de Caresía de Vida establecido en la Orden de 26 de enero de 1951. (Ref. 37/51).

Octavo.—Como normas complementarias de la Reglamentación de la Construcción y Obras Públicas, la gratificación establecida para esta Ordenanza Laboral será de aplicación a los trabajadores de las empresas explotadoras de Canteras, Graveras y Areneras a que se refieren las Normas de 28 de octubre de 1947.

Noveno.—Asimismo y por tratarse de normas complementarias de la Reglamentación de Trabajo en las Industrias de la gratificación establecida en la Orden de Confección, Vestido y Tocado alcanza la referencia a los trabajadores afectos a las normas para la Confección de Prendas de Peletería, aprobada por Orden de 20 de octubre de 1949 (Referencia 265/49).

Décimo.—A los trabajadores que con carácter normal prestan su servicio en la empresa por horas, la gratificación les será abonada multiplicando por el número de días que la gratificación comprende el importe del salario que normalmente perciban por su labor diaria.

564 REGLAMENTOS DE TRABAJO. — INDUSTRIAS QUIMICAS

Resolución de la Dirección General de Trabajo, de 17 de diciembre de 1952, *Boletín Oficial del Estado* núm. 356, del 21 de diciembre de 1952.

I.—PARTICIPACION EN BENEFICIOS. Se establece para el ejercicio de 1952 una dozava parte del salario base en concepto de participación en los beneficios.

II.—TEXTO LITERAL.—La experiencia obtenida en los años anteriores aconseja reiterar la sustitución para el ejercicio económico de 1952, del sistema de participación en beneficios establecido en el artículo 33 del Reglamento de Trabajo en las Industrias Químicas, de 26 de febrero de 1946, por el de abono a los trabajadores de una dozava parte de los salarios devengados durante aquél.

Esta Dirección General ha tenido a bien acordar:

1.º El sistema de participación en beneficios establecidos en el artículo 33 del Reglamento Nacional de Trabajo en las Industrias Químicas, se sustituirá para el ejercicio económico de 1952 por el abono, a todo el personal comprendido en el expresado Reglamento, de la dozava parte de los salarios base de la categoría de cada trabajador devengados durante el propio ejercicio, incrementados en su caso con los aumentos por antigüedad y con el plus de caresía de vida establecido en la Orden de 17 de julio de 1950. (Ref. 581/50).

2.º A esta participación en beneficios tienen derecho el personal fijo y el de temporada a que se refiere la Orden de 16 de diciembre de 1947, pero no los eventuales.

3.º Los trabajadores a prima o destajo percibirán la participación en beneficios en proporción al salario-base correspondiente a su categoría profesional, aumentado en un 25 por 100.

4.º El pago de lo que corresponda, en concepto de participación en beneficios, deberá hacerse dentro del plazo de sesenta días, contados a partir del de cierre del ejercicio, y en todo caso, con anterioridad al día primero de abril de 1953.

5.º El trabajador que hubiese ingresado o cesado durante el transcurso del ejercicio económico, tendrá derecho a percibir la parte proporcional correspondiente al tiempo trabajado.

6.º Quedan exceptuados de la presente Resolución las Empresas que se encuentren en situación legal de suspensión de pagos o quiebra.

565 REGLAMENTOS DE TRABAJO. — MINAS DE CARBON

Decreto de 14 de noviembre de 1952, *Boletín Oficial del Estado* núm. 358, del 23 de diciembre de 1952.

I.—VACACIONES ANUALES.—Posible compensación económica en el año 1952 para los trabajadores del interior de las minas.

II.—TEXTO LITERAL.—Reiteradamente, por aconsejario el alto interés de la Economía Nacional, y al amparo de lo dispuesto en la Ley de veintinueve de septiembre de mil novecientos cuarenta y dos, se ha venido autorizando en años anteriores la compensación a metálico de las vacaciones a los trabajadores de las minas de carbón.

Como en la actualidad subsisten las mismas circunstancias que motivaron la promulgación de los Decretos referidos, a propuesta del Ministro de Trabajo y previa deliberación del Consejo de Ministros,

DISPONGO :

Artículo primero.—Se autoriza la compensación a metálico de las vacaciones correspondientes al presente año de mil novecientos cincuenta y dos de los obreros ocupados en las minas de carbón.

Sólo alcanzará la anterior autorización a los trabajadores que presten a ella asentimiento, y siempre que las empresas, en compensación de la vacación suprimida, les concedan, además de los salarios correspondientes a la misma, los jorales de los días que hubieran debido descansar, incrementados éstos en un cuarenta por ciento.

Artículo segundo.—No será admitida la renuncia al disfrute de vacaciones a los obreros que por su salud las necesiten, a juicio del servicio médico competente.

Artículo tercero.—El Ministro de Trabajo adoptará las medidas oportunas para el exacto cumplimiento de este Decreto y resolverá cuantas incidencias se presentaren.

566 REGLAMENTOS DE TRABAJO.—INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA

Orden del Ministerio de Trabajo, de 20 de diciembre de 1952. *Boletín Oficial del Estado* núm. 361 del 26 de diciembre de 1952.

I.—GRATIFICACION EXTRAORDINARIA.—Se establece a favor del personal de esta industria una gratificación extraordinaria, independiente de la de Navidad.

II.—TEXTO LITERAL.—Con destino a los trabajadores comprendidos en la Reglamentación Nacional de Trabajo, en la Industria Cinematográfica, aprobada por Orden de 31 de diciembre de 1948 (Ref. 28/49), y en atención a las circunstancias que en los mismos concurren, se estima necesario establecer una gratificación extraordinaria de carácter circunstancial.

En su virtud,

Este Ministerio, previa aprobación del Consejo de Ministros y en uso de las atribuciones que le están conferidas, ha tenido a bien disponer:

Artículo 1.º Antes del 31 del actual mes de diciembre, las Empresas incluidas en la Reglamentación Nacional de Trabajo en la Industria Cinematográfica abonarán a su personal una gratificación extraordinaria por el importe de una mensualidad de retribución, entendiéndose por tal el salario inicial de la categoría del trabajador, incrementado por los aumentos de antigüedad, en su caso, y el plus de carestía de vida establecido por Orden de 22 de junio de 1951. (Ref. 293/51).

Art. 2.º Esta gratificación será independiente de la reglamentaria de Navidad y compatible con la misma; no podrá repercutir en los precios; tendrá la consideración de gastos de Empresa; no será computable a efectos de seguros sociales y Montepío de Previsión Laboral, y no incrementará el fondo del plus familiar.

Art. 3.º Las Empresas que voluntariamente hubiesen satisfecho alguna gratificación extraordinaria durante los meses transcurridos del año en curso no vendrán obligadas a satisfacer la que por la presente Orden se establece.

567 MUTUALIDADES Y MONTEPIOS LABORALES.—ACTIVIDADES DIVERSAS

Servicio de Mutualidades Laborales, *Boletín Oficial del Estado* núm. 562, del 27 de diciembre de 1952.

I.—ESTATUTOS.—Se rectifica el artículo 88 del texto oficial de los Estatutos.

II.—TEXTO LITERAL.—Habiendo padecido error en la redacción del segundo párrafo del artículo 88 de los Estatutos del Montepío Nacional de Actividades Diversas (Ref. 416/52), se entenderá modificado el texto del mismo por el que a continuación figura:

“La cuantía de este premio será de mil pesetas.”

568 MINISTERIO DE TRABAJO.—SERVICIO DE TRABAJOS PORTUARIOS

Orden del Ministerio de Trabajo, de 26 de diciembre de 1952. *Boletín Oficial del Estado* núm. 365, del 30 de diciembre de 1952.

I.—ORGANIZACION.—Se reorganiza el Servicio de Trabajos Portuarios con sujeción al siguiente Índice General.

Dependencia, personalidad y fines del Servicio (art. 1.º).

Estructura del Servicio (art. 2.º).

De la Jefatura del Servicio (art. 3.º).

De la Junta Técnica Central (artículos 4 a 7).

De la Inspección General (arts. 8 a 10).

De la Sección Central (arts. 11 a 15).

De las Secciones Provinciales de los Trabajos Portuarios (art. 16).

Organización de las Secciones Provinciales (art. 17).

De los cargos de dirección (arts. 18 y 19).

De la Junta Rectora de cada Puerto (artículos 20 a 23).

De las Comisiones Permanentes (artículos 24 a 29).

De los Servicios Administrativos de las Secciones Provinciales (arts. 30 a 33).

Del personal de Servicio de Trabajos Portuarios (arts. 34 a 38).

Disposiciones Transitorias.

Disposición final.

II.—TEXTO LITERAL.—Regido el Servicio de Trabajos Portuarios por la Orden de 24 de marzo de 1947 y por el Reglamento de 15 de diciembre siguiente, se hace necesario proceder a una reorganización del mismo conforme a la experiencia adquirida en los años

que lleva funcionando, a fin de perfeccionarlo y dar una mayor movilidad de acción a las Secciones Provinciales que de él forman parte, aunque sin perder de vista las peculiaridades características de la misión que tiene encomendada.

En su virtud, y como desarrollo de lo determinado en el apartado 2) del artículo 92 del Reglamento Orgánico de este Departamento, aprobado por Decreto de 4 de agosto del año en curso. (Ref. 402/52).

Este Ministerio, en uso de las atribuciones conferidas, ha tenido a bien disponer:

Artículo 1.º Dependencia, personalidad y fines del Servicio.—Bajo la dependencia administrativa de la Subsecretaría de este Ministerio, se reorganiza el Servicio de Trabajos Portuarios, que continuará con la misma personalidad idénticos fines e igual régimen económico que le fueron atribuidos por los Reglamentos aprobados por Ordenes de 14 de marzo y 15 de diciembre de 1947.

Art. 2.º Estructura del servicio.—El Servicio de Trabajos Portuarios quedará constituido en la siguiente forma:

- 1) Jefatura del Servicio.
- 2) Junta Técnica Central.
- 3) Inspección General.
- 4) Sección Central.
- 5) Secciones Provinciales.

Art. 3.º De la Jefatura del Servicio.—Corresponderá al Subsecretario la Jefatura del Servicio de Trabajos Portuarios, y en el orden administrativo, ostentará la representación legal del mismo, con las funciones y facultades que se le atribuyen por el artículo tercero del Reglamento Orgánico del Ministerio de Trabajo, aprobado por Decreto de 4 de agosto de 1952.

Técnicamente, los Directores generales de Trabajo y Previsión ejercerán las funciones concernientes a la propuesta, redacción, interpretación o aclaración de las disposiciones relativas a sus correspondientes órbitas de competencia y que afecten a los trabajadores portuarios, comunicando sus resoluciones a la Subsecretaría, para que por ésta se ordene su cumplimiento a los órganos que del Servicio dependen.

Tanto el Subsecretario como los Directores generales antes mencionados no percibirán asignación alguna por el ejercicio de las funciones que pro la presente Orden se les atribuye, ni, por tanto, devengarán dietas de asistencia en las reuniones que se celebren por la Junta Técnica Central, en Pleno o Comisión Permanente.

Art. 4.º De la Junta Técnica Central.—Para el asesoramiento técnico de la Subsecretaría y de las Direcciones Generales de Trabajo y de Previsión, en todas aquellas cuestiones relacionadas con el Servicio que afecten al régimen laboral o de previsión de los trabajadores portuarios, se establece una Junta Técnica Central, que estará integrada por el Subsecretario de Trabajo, como Presidente; los Directores generales de Trabajo y de Previsión, como Vicepresidentes, y por los siguientes Vocales, designados por este Ministerio:

Uno, a propuesta de la Subsecretaría de la Marina Mercante; otro, de la Dirección General de Puertos y Señales Marítimas; otro, por el Instituto Social de la Marina, y otro, de la Delegación Nacional de Sindicatos.

Tres Delegados Provinciales de Trabajo, con destino en provincias marítimas, nombrados por la Subsecretaría.

Tres representantes de los trabajadores y otros tres de las empresas, designados por el Subsecretario entre los Vocales electivos componentes de las Juntas Rectoras de los puertos.

Actuará de Secretario, con voz, pero sin voto, el Jefe de la Sección Central.

Los Vocales podrán ser removidos por el Ministerio de Trabajo, debiendo asimismo cesar al término de la representación por la que fueron designados.

La Junta Técnica Central actuará en Pleno o en Comisión Permanente, debiendo reunirse el primero, como mínimo, dos veces al año, y siempre que lo acuerde su Presidente.

Art. 5.º Serán funciones de la Junta Técnica Central, en Pleno, las que siguen:

1.º Estudiar, informar o proponer las normas fundamentales o especiales, o la modificación de las mismas, referentes al régimen laboral de previsión o de asistencia social de los trabajadores portuarios o que afecten al Servicio y que deban elevarse a la Subsecretaría o a las Direcciones Generales de Trabajo o de Previsión para la superior resolución.

2.º Proponer, a través de la Subsecretaría, a los distintos Departamentos Ministeriales aquellas medidas que relacionadas con los mismos conduzcan al abaratamiento de los intereses de la economía nacional.

3.º Tender al establecimiento de un régimen de compensación, en los términos convenientes, con objeto de asegurar el disfrute de beneficios similares a todos los trabajadores portuarios, teniendo en cuenta a quienes por pertenecer a puertos de escasa capacidad económica no podrían normalmente gozarlos en cuantía adecuada, y en evitación de que otros pudieran perder su disfrute por una desviación circunstancial de tráfico en el puerto a que pertenecieran.

4.º Informará preceptivamente en los siguientes casos:

a) El proyecto anual de presupuestos de gastos e ingresos del Servicio, previo examen de los proyectos parciales que hayan elevado las Secciones provinciales.

b) El plan nacional para la creación, conservación y sostenimiento de los servicios y obras asistenciales que, con cargo al Presupuesto del Servicio, deban ejecutarse, tales como comedores para obreros, cuartos vestuarios y locales para pasar lista de llamamiento, pago de salarios u oficinas, servicios de higiene, botiquines y enfermerías, economatos o cooperativas, biblioteca, construcción o adquisición de viviendas con destino a los trabajadores, y aquellos otros que puedan solicitarse en las propuestas que al efecto se formulen por las Secciones provinciales.

c) Para la fijación de plantillas de trabajadores portuarios o su modificación.

d) En la delimitación de Zonas de aplicación de las Ordenanzas laborales de trabajadores portuarios.

e) En la aprobación de tarifas de destinos, tareas, primas o regímenes especiales, así como en las modificaciones de aquéllas.

f) En la confección del nomenclátor y fijación de pluses o primas por manipulación de mercancías especiales, molestas o peligrosas.

5.ª Aquellas otras de índole general que por la Presidencia de la Junta se estime conveniente someter al estudio, conocimiento o informe de la misma.

Art. 6.º *De la Comisión Permanente.*—Como órgano coordinador de las funciones administrativas y técnicas a que se refiere el artículo 3.º de la presente Orden, se constituirá una Comisión Permanente, que estará integrada por el Presidente, los dos Vicepresidentes y el Secretario a la que se le confiere las siguientes funciones:

1.ª Las que correspondiendo a la Junta en Pleno hayan delegado por la misma.

2.ª Emitir su informe, con carácter preceptivo, respecto a las cuestiones que a continuación se relacionan:

a) Los Reglamentos particulares de cada puerto, tanto en lo que se refiere al régimen laboral como al de previsión, y las modificaciones que en aquéllos pretendan introducirse.

b) El proyecto de plantilla del personal administrativo y subalterno del Servicio.

c) La inclusión o exclusión de determinadas actividades laborales relacionadas con el tráfico portuario, en el ámbito de aplicación de las disposiciones sobre trabajos portuarios.

d) La implantación en los puertos del Seguro de Enfermedad, tanto si éste se lleva a cabo por gestión directa, concierto o cualquier otro procedimiento.

e) La contratación de los riesgos de accidentes del trabajo que propongan las Secciones provinciales, así como cuando por éstas se solicite asumir directamente el riesgo de incapacidad temporal.

3.ª Aquellas otras funciones que por la Subsecretaría puedan asignársele, y el conocimiento de aquellos asuntos que aun estando atribuidos a la Junta Técnica, la urgencia de la cuestión planteada no permita su aplazamiento hasta la reunión del Pleno.

Art. 7.º *De la labor realizada y acuerdos adoptados por la repetida Comisión Permanente* deberá darse cuenta a la Junta Técnica Central en la primera reunión que se celebre, y muy especialmente cuando se trate de asuntos comprendidos en el último párrafo del artículo anterior.

La Comisión Permanente celebrará cuantas reuniones se estimen convenientes por la Presidencia.

Art. 8.º *De la Inspección General.*—Como órgano técnico e inspector, a las órdenes directas del Subsecretario, el Servicio de Inspección General tendrá a su cargo en todo el territorio nacional el examen y funcionamiento de los diversos organismos creados en beneficio de los trabajadores portuarios y el cuidado y desvelo por su constante perfeccionamiento. A tal efecto:

A) Vigilará la actuación de los órganos rectores de los puertos y de las oficinas administrativas provinciales o locales, comprobando y revisando la contabilidad, registros de personal, ficheros, liquidaciones, etc., así como el exacto cumplimiento de su deber por parte de empleados y subalternos.

B) Conocerá el desarrollo de las actividades laborales en los puertos, los problemas que en tal aspecto puedan presentarse, la aplicación en aquéllos de las Ordenanzas de carácter nacional y Reglamentos particulares y, en general, todas aquellas cuestiones que afecten a la ejecución de las faenas portuarias, rendi-

miento de los trabajadores y desenvolvimiento económico de los puertos.

C) Velará por el buen funcionamiento de los diversos servicios u obras asistenciales de toda índole establecidos en beneficio de los trabajadores portuarios, comprobando el estado en que se encuentren los edificios e instalaciones y la situación administrativa y contable, la concesión de prestaciones de previsión, enfermedad o accidentes, no sólo en cuanto a su licitud y procedencia, sino también en la rapidez de su otorgamiento.

D) Recibirá y tramitará las quejas y sugerencias que le sean dirigidas por los trabajadores, Empresas, Autoridades o particulares, o por el personal de las Secciones o adscrito a servicios de previsión o asistencia social.

E) Informará, antes de que sean sometidos a la Junta Central, en Pleno o en Comisión Permanente, en los asuntos enumerados como funciones primera y cuarta, excepto en el caso a) del artículo quinto, y en los citados en la segunda del artículo sexto de esta Orden, y cuyo conocimiento se encuentra atribuido a dicho órgano asesor.

F) Redactará anualmente una Memoria expresiva de la labor realizada por la Inspección y del funcionamiento de los distintos servicios establecidos en cada puerto.

G) Sin perjuicio de lo dispuesto en los anteriores apartados, evacuará todas las consultas e informes que con respecto a la misión que le está confiada le ordene la Subsecretaría y aquellos otros que considere necesarios para el perfeccionamiento e instalación de los servicios.

Art. 9.º Los medios de información de que habrá de valerse la Inspección General serán de dos clases: unos, reglados y otros, discrecionales.

A) Regladamente, esta Inspección está obligada:

1.º A practicar visitas de inspección ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias, automáticamente, a todas las Secciones y Subsecciones, dos veces al año; y las extraordinarias, cuando las necesidades del servicio lo requieran, a juicio del Subsecretario. Del resultado de las visitas realizadas se elevará el oportuno informe.

2.º A conocer por las actas de las reuniones que las Juntas Rectoras, en Pleno o Comisiones Permanentes, deben remitir a la Sección Central los acuerdos de carácter técnico que por las mismas se adopten, formulando los oportunos reparos a todos aquellos que no se ajusten a las disposiciones contenidas en la Reglamentación Nacional de Trabajos Portuarios o en el Reglamento particular de cada puerto.

B) Discrecionalmente, la Inspección General podrá:

1.º Hacer a los Delegados de Trabajo, Jefes de las Secciones Provinciales, en las visitas de inspección que realice, las observaciones que proceda, para el mejor cumplimiento de los fines encomendados a las Juntas Rectoras, en Pleno o en Comisiones, u oficinas administrativas; todo ello sin intervenir en la dirección de los asuntos que tramiten ni menoscabo de la independencia y responsabilidad que a dichos Delegados u Organos rectores corresponde.

2.º Solicitar de las Secciones, Subsecciones o Representaciones, así como de las Juntas Rectoras o sus Comisiones Permanentes, in-

formes concretos sobre cualquier problema que guarde relación con la actividad de aquellos organismos o que afecten al régimen laboral, de previsión o asistencia social de los trabajadores portuarios.

3.º Hacer a los Delegados de Trabajo las observaciones pertinentes respecto al desarrollo, en los puertos de su jurisdicción, del régimen laboral, de previsión o asistencia social de los trabajadores portuarios, de acuerdo con las normas nacionales o particulares de cada puerto; todo ello sin perjuicio de dar cuenta a la Inspección Provincial de Trabajo de las infracciones que pueda conocer, a los efectos legales que proceda.

4.º Pedir a las Autoridades, empresas o trabajadores los datos, informaciones o declaraciones que estime convenientes a la función inspectora.

Art. 10. La Inspección general estará a cargo de un Inspector General-Jefe, asistido de los Inspectores que sean necesarios para el cumplimiento de las funciones que a aquélla se le atribuyen.

Con independencia de las funciones inspectoras que personalmente debe ejercer, el Inspector-Jefe corresponderá:

a) Dirigir la actuación de los Inspectores adscritos al Servicio de Inspección, transmitiendo las órdenes e instrucciones que reciba del Subsecretario y coordinando la actuación de aquéllos.

b) Distribuir entre los Inspectores las funciones o trabajos que están atribuidos al Servicio de Inspección, a tenor de lo dispuesto en el artículo anterior.

c) Todos aquellos otros cometidos que por la Subsecretaría expresamente se le encomienden.

El Servicio de Inspección será auxiliado en sus funciones por el personal administrativo que le designe el Subsecretario, de entre los empleados que figuren adscritos a la Sección Central.

Art. 11. De la Sección Central.—A las inmediatas órdenes del Subsecretario, y con las funciones administrativas que por este artículo se le atribuyen, existirá una Sección Central, que constará de los Negociados que sean necesarios para el mejor cumplimiento de su misión.

Igualmente formará parte de la Sección Central, sin perjuicio de la autonomía técnica que le corresponde, la Administración General, cuyas funciones y cometidos se señalan en el artículo 14.

Art. 12. En el orden administrativo, corresponderá a la Sección Central:

A) El estudio y tramitación de todos aquellos expedientes o asuntos que por disposiciones generales o específicas afecten a los trabajadores portuarios, cuyo conocimiento se encuentre atribuido a la Jefatura del Servicio o sus órganos asesores, previo informe, caso de que así proceda, de la Inspección o Administración General.

B) Cuanto se relacione con las plantillas de personal, nombramientos, escalafones, excepciones, comisiones de servicio, ceses, derechos pasivos, plus familiar, etc., del mismo, y propuesta de distribución del personal entre las distintas Secciones o Subsecciones del Servicio.

C) Todo lo concerniente al régimen legal, ordenación e incidencias relativas a los edificios

propiedad del Servicio, u otros inmuebles que igualmente le pertenezcan; asimismo le corresponderá el archivo y custodia de los títulos y expedientes de propiedad de dichos bienes.

D) Confeccionar la estadística mensual del Servicio y redactar la Memoria anual del mismo, de acuerdo con los datos y consideraciones que a tal fin remitan las Secciones Provinciales.

E) Editar carteles, cartillas o folletos para la prevención de accidentes de los trabajadores portuarios.

F) La apertura y distribución de la correspondencia oficial, el registro general de la misma y la custodia de los archivos.

G) Aquellas otras funciones que, como consecuencia de normas laborales o de previsión y asistencia social, o por otras disposiciones, o por acuerdo de la Jefatura del Servicio, puedan asignársele.

Art. 13. Al frente de la Sección Central habrá un Jefe, que ejercerá las siguientes funciones:

a) Organizar, dirigir y distribuir entre el personal los servicios y trabajos de la Sección, de acuerdo con las normas dictadas por la Subsecretaría.

b) Someter al despacho y resolución del Subsecretario todos los asuntos de índole administrativa que se tramiten en la Sección Central, con vista de los informes emitidos.

c) Elevar a la Subsecretaría las oportunas propuestas de nombramientos, ascensos, traslados, premios, sanciones, ceses, etc., del personal del Servicio.

d) Someter, previo conocimiento del Subsecretario, al despacho y resolución de las Direcciones Generales de Trabajo y de Previsión, los asuntos de carácter técnico que sean de su respectiva competencia, formularlos en los expedientes que al efecto se tramiten las pertinentes propuestas, en vista de los informes emitidos.

e) Ejecutar las diligencias y oficios de trámite necesarios para el despacho de los expedientes, a cuyo efecto solicitará directamente de la Inspección General, Administración General, Secciones o Subsecciones de Trabajos Portuarios o sus órganos rectores, los informes necesarios cuando dicho requisito sea obligado y aparezca impuesto por disposición reglamentaria.

f) Disponer el archivo de expedientes, devolución de documentos y expedición de certificaciones.

g) Resolver, de acuerdo con los informes emitidos por las Secciones o Subsecciones respectivas, las solicitudes que puedan dirigirse por los trabajadores portuarios para su traslado de un puerto a otro de distinta provincia, de conformidad con las disposiciones en vigor.

h) Remitir a las Secciones o Subsecciones cuantas solicitudes o escritos sean elevados a la Jefatura del Servicio, y cuya resolución esté atribuida exclusivamente, por preceptos reglamentarios, a los Delegados de Trabajo, Organos rectores u Oficinas administrativas de los puertos.

i) Convocar, por orden superior, la reunión de la Junta Técnica Central, bien en Pleno o en Comisión Permanente, y llevar el libro de actas de las reuniones que celebren dichos organismos, en su condición de Secretario de los mismos.

j) Someter, en cumplimiento de orden de la Subsecretaría, a conocimiento de la Junta Técnica Central, en Pleno o en Comisión Permanente, todos los asuntos que sean de su competencia, así como tramitar los expedientes y proponer las resoluciones que procedan en vista de los acuerdos adoptados.

k) Todas aquellas otras funciones que por delegación de la Subsecretaría o de los Directores generales de Trabajo atribuidas.

Art. 14. La Administración General continuará ejerciendo las funciones que actualmente tiene atribuidas, entendiéndose en cuanto se relaciona con el régimen económico y contable, en su más amplio sentido, interviniendo no sólo en lo referente a la confección de los proyectos de Presupuestos Generales del Servicio, que han de formularse conforme a lo dispuesto en la Ley de 13 de marzo de 1943, y desarrollo de los mismos, sino también en cuantas operaciones de tipo económico se lleven a cabo por las Secciones provinciales y por las Subsecciones u otros organismos anexos a las mismas, creados en beneficio de los trabajadores portuarios, y tanto si se refiere a obras o funciones asistenciales, como si se trata de la administración de cantidades en gestión, tales como liquidaciones de seguros sociales, vacaciones, gratificaciones extraordinarias, plus familiar, etcétera.

A tal efecto, reflejará en libros y cuentas los actos administrativos que hayan de llevarse a cabo, y que, debidamente intervenidos representen para el Servicio derechos u obligaciones que hayan de introducirse en la realización de ingresos y pagos, y el registro de las situaciones económicas que por la gestión encomendada al Organismo hayan de repercutir en su patrimonio o en los recursos que tenga reconocidos o se le reconozcan por las disposiciones en vigor.

Art. 15. La Administración General seguirá a cargo, como hasta ahora, del Administrador general, y en caso de vacante se estará a lo dispuesto en el Decreto de 3 de octubre de 1952.

El Administrador general someterá directamente al despacho y fiscalización del Delegado de la Intervención General del Estado los libramientos, órdenes de pago y cuantos asuntos exija la indicada fiscalización.

Art. 16. *De las Secciones Provinciales de Trabajos Portuarios.*—Las Secciones Provinciales de Trabajos Portuarios, a través de sus órganos de dirección, rectores y administrativos, que se enumeran en el artículo siguiente, ejercerá las funciones de carácter general, régimen laboral, previsión y asistencia social, que en los artículos 18, 19, 23, 25, 26, 31 y 32 de esta Orden se relacionan; sin perjuicio de aquellas otras que, afectando a cualquiera de los indicados aspectos, sean indispensables para la aplicación a los trabajadores portuarios de los beneficios sociales impuestos por normas generales, o que puedan atribuirse a las mencionadas Secciones en virtud de preceptos específicos o por resolución de la Jefatura del Servicio.

Art. 17. *Organización de las Secciones Provinciales.*—Para la mayor eficacia de su cometido las Secciones Provinciales de Trabajos Portuarios quedarán constituidas en la siguiente forma:

A) Cargos de dirección, en los que se comprenden los Delegados de Trabajo y los Jefes de la Inspección de Trabajo.

B) Organos rectores, constituidos por las Juntas Rectoras de cada puerto.

C) Servicios administrativos, en los que estarán comprendidos las Secciones y Subsecciones administrativas y las Representaciones.

Art. 18. *De los cargos de Dirección.*—Corresponde al Delegado de Trabajo la superior y directa Jefatura de la Sección de Trabajos Portuarios, y en su virtud:

a) Ostentará la representación del Servicio dentro de la provincia.

b) Organizará sus Oficinas administrativas, así como los servicios asistenciales adscritos a la Sección.

c) Tendrá sobre todo el personal administrativo, subalterno o asistencial las facultades disciplinarias que le otorga el artículo 24 del Reglamento de Delegaciones de Trabajo, aprobado por Decreto de 21 de diciembre de 1943.

d) Presidirá la Junta Rectora de cada puerto, en Pleno o en Comisiones permanentes, con las atribuciones, facultades y representación que a la presidencia corresponde.

e) Podrá ejercer el derecho de veto, en la forma que establece el artículo 28 de la presente disposición, respecto de los acuerdos que se adopten por la Junta Rectora, en los casos enunciados en el propio artículo.

f) Resolverá aquellos asuntos que, aun estando atribuidos a la Jefatura del Servicio o Junta Rectora, en Pleno o en Comisión permanente, la urgencia del caso imponga la adopción de tal medida; si bien vendrá obligado a poner en conocimiento inmediato de la nombrada Jefatura, o en la primera reunión que celebren los órganos rectores, los antecedentes de la cuestión y resolución adoptada.

g) Impondrá a los trabajadores, a propuesta de la Comisión de Régimen laboral, las sanciones que correspondan por faltas graves y muy graves cometidas en el trabajo, pudiendo recurrir el trabajador sancionado ante la Magistratura del Trabajo, en la forma y términos legalmente establecidos.

h) Tramitará, con su informe, los recursos que se interpongan, a tenor de lo dispuesto en el artículo 29 de esta Orden.

Art. 19. El Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo, además de las funciones que como Vicepresidente de la Junta Rectora le corresponden, continuará ejerciendo el cometido fiscalizador e interventor que actualmente tiene atribuido.

Art. 20. *De la Junta Rectora de cada puerto.* La Junta Rectora será el órgano de que disponga el Servicio de Trabajos Portuarios, y que integrando los intereses legales y económicos del puerto, sirvan de cauce por el que se manifiesten las aspiraciones, propuestas y reclamaciones de las Autoridades, entidades, trabajadores y empresas, con representación en dicha Junta, para la mejor aplicación de los beneficios laborales, de previsión y asistencia social, dictados o que se promulguen en favor de los trabajadores portuarios.

La Junta Rectora actuará en Pleno y en dos Comisiones, denominadas, respectivamente, de Régimen laboral y de Previsión y Asistencia social.

El Reglamento particular de cada puerto fijará el número de reuniones ordinarias que en cada año deban celebrar los mencionados Organismos, con un límite mínimo de dos Plenos. Con carácter extraordinario se reunirán cuando se juzgue necesario por el Presidente, o a solicitud de la tercera parte de sus componentes.

Art. 21. La Junta Rectora, en Pleno, estará constituida en la forma que a continuación se indica:

Presidente, el Delegado de Trabajo, Jefe de la Sección Provincial.

Vicepresidente, el Jefe de la Inspección de Trabajo.

Secretario, el Secretario de la Sección, con voz y voto.

Vocales natos:

La Autoridad de Marina del puerto, o un representante de la misma.

El Ingeniero Director de la Junta de Obras del puerto, o un Ingeniero en representación de aquél.

El Delegado Provincial de Sindicatos, con facultad de delegar en el Jefe del Sindicato de Transportes, o un representante del mismo en aquellos puertos que no sean capital de provincia.

Un representante del Instituto Social de la Marina.

El Presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación, con facultad de delegar en el Secretario, o un Vocal, o un representante de aquél en los puertos que no sean capital de provincia y no exista tal organismo. En caso alguno la delegación o representación de la Cámara podrá ostentarla un naviero o armador, consignatario. Agente de Aduanas o transportista incluido en el Censo de empresas portuarias.

Vocales electivos:

Como representantes de los trabajadores y de empresas existirán, dentro de los límites que en el párrafo siguiente se indican, el número de Vocales que por el Reglamento particular de cada puerto se determine, en razón a la importancia numérica de los Censos, y con el fin de que tengan la adecuada representación las distintas actividades o especialidades.

Como mínimo, los Vocales electivos serán cuatro, y como máximo, dieciséis, correspondiendo, por mitad, a la representación de los trabajadores y empresas.

Todos los Vocales de la Junta Rectora tendrán sus correspondientes suplentes.

Art. 22. Los Vocales electivos y sus suplentes serán designados por votación directa de los trabajadores que constituyen el Censo de éstos en cada puerto, y por las empresas que integren el Censo de las mismas, debiendo pertenecer a los Censos respectivos los que sean elegidos.

Para la renovación de los Vocales electivos, se procederá cada dos años a la elección de la mitad de cada uno de los representantes de trabajadores y empresas, así como la de sus suplentes.

Los trabajadores y empresarios que ostenten la representación respectiva podrán ser reelegidos indefinidamente, siendo el cargo irrenunciable, a no ser por justa causa.

Art. 23. Serán funciones de la Junta Rectora, en pleno el estudio, informe, y, en todo caso, la propuesta a la Jefatura del Servicio

de las cuestiones que a continuación se enumeran:

1.ª El Reglamento particular del puerto, de acuerdo con las normas de ámbito nacional, así como las modificaciones que en aquél deban introducirse.

2.ª El anteproyecto de Presupuesto anual de gastos e ingresos de la Sección o Subsección, con el fin de que por la Administración general se confeccione y tramite el Presupuesto del Servicio, de acuerdo con las disposiciones legales en vigor.

3.ª La Memoria anual, en la que se recojan cuantos datos y consideraciones se estimen convenientes, en relación con las actividades laborales, de previsión o asistencia social, que se hayan desarrollado por la Sección o Subsección en el año correspondiente.

4.ª Para efectuar, directamente, el pago de los jornales o el reparto del importe de los destajos.

5.ª Problemas que por su importancia económica o social surjan en el puerto de su jurisdicción, que puedan tener relación con el trabajo de carga y descarga, estiba y desestiba, estudiando de manera especial las medidas encaminadas a la más perfecta organización de las operaciones y su abaratamiento.

6.ª La inclusión o exclusión de determinadas actividades laborales relacionadas con el trabajo portuario.

7.ª El ámbito territorial de cada puerto en el que sean de aplicación las normas reguladoras de los trabajos portuarios, en el caso de que, por circunstancias especiales, su delimitación deba ser distinta a la que corresponde a la jurisdicción de la Junta de Obras o Comisiones administrativas de puertos.

8.ª La plantilla de trabajadores de cada una de las categorías que, con la consideración de "fijos", "complementarios" o "eventuales-censados", han de intervenir en las operaciones portuarias con carácter "permanente" o de "temporada"; medidas que deban adoptarse en el caso de que proceda la reducción de dicha plantilla y normas para la eliminación de excesos.

9.ª El establecimiento, con carácter forzoso de un determinado sistema retributivo (jornal, destajo, por tarea o con prima), cuando así convenga a los intereses del puerto, de la navegación o de la economía nacional.

10. Las tarifas que deban aplicarse para la retribución del trabajo por el sistema de destajos, a tarea, primas o por otro régimen especial, así como la revisión o modificación de aquéllas.

11. Las primas o pluses que deberán abonarse a los trabajadores por manipulación de mercancías especiales, molestas o peligrosas.

12. Implantación en el puerto, de acuerdo con las normas que por la Jefatura del Servicio se dicten, de las prestaciones del Seguro de Enfermedad de los trabajadores portuarios, por los sistemas de gestión directa, concierto, mixto o en régimen especial, según la importancia de los trabajos "permanentes" o de "temporada" que en el puerto se efectúen, y el número de trabajadores censados; debiendo adoptarse obligatoriamente el sistema de gestión directa en aquellos puertos en los que el Censo de trabajadores "permanentes" ("fijos" y "complementarios") exceda de seiscientos, sin perjuicio de que pue-

da implantarse, potestativamente, por las Secciones de Censo inferior. Se incluirán, asimismo, en los beneficios de dicho sistema el personal administrativo y subalterno de la Sección o Subsección, previo abono de las cuotas legalmente establecidas por parte del Servicio y de los interesados.

13. La contratación de los riesgos derivados de accidentes de trabajo, excepto en lo concerniente al riesgo de incapacidad temporal, que lo podrán asumir directamente las Secciones o Subsecciones.

14. El establecimiento de prestaciones complementarias de previsión, que no estando determinadas en disposiciones legales, se deseen implantar en el puerto, con carácter obligatorio o voluntario.

15. La creación de comedores para obreros, cuartos-vestuarios y locales apropiados para pasar lista de llamamiento, pago de salarios y oficinas; servicios de higiene; botiquines y enfermerías; economatos o cooperativas, y bibliotecas para uso de los trabajadores y sus familias.

16. La construcción o adquisición de viviendas con destino a los trabajadores portuarios.

Art. 24. De las Comisiones permanentes.— La composición de las Comisiones de Régimen laboral y de Previsión y Asistencia social se determinará en el Reglamento particular de cada puerto, teniendo en cuenta las siguientes normas generales:

a) La Presidencia corresponderá, en todo caso, al Presidente o Vicepresidente de la Junta Rectora, actuando de Secretario el de la misma.

b) Los Vocales electivos representantes de trabajadores y empresas, concurrirán en igual número por lo que respecta a la Comisión de Régimen laboral, correspondiendo dos terceras partes a los primeros, y una tercera parte, a los empresarios en la de Previsión y Asistencia Social.

c) Asimismo figurará en la nombrada Comisión de Previsión y Asistencia Social un pensionista del Montepío o Caja de Previsión, elegido entre sus beneficiarios.

Para la más ágil y rápida resolución de los asuntos que tienen atribuidos, las Comisiones permanentes podrán designar las Ponencias que consideren oportunas, con el cometido específico que en cada caso se determine.

Art. 25. Corresponderá a la Comisión de Régimen Laboral el ejercicio de las siguientes funciones:

1.ª Cumplir y hacer cumplir las disposiciones, de ámbito nacional o particular, de cada puerto concernientes a la regulación de los trabajos portuarios, dando cuenta a la Inspección de Trabajo de cuantas infracciones pueda conocer:

2.ª Fijar las directrices a seguir por los servicios administrativos de las Secciones o Subsecciones, para practicar a las empresas las liquidaciones que procedan respecto de los recargos correspondientes a vacaciones, gratificaciones de 18 de julio y Navidad, plus familiar y análogas.

3.ª Resolver las solicitudes de ingreso y cuantas incidencias puedan producirse con motivo de la admisión y ascenso de los trabajadores, o la clasificación de los mismos, según su función o permanencia, y que por su naturaleza no estén atribuidas a la Dirección General o Delegaciones de Trabajo.

4.ª Aprobar las listas censales, por categorías y grupos profesionales, así como la "Lista de llamamiento", única o por especialidades o zonas portuarias.

5.ª Informar las peticiones de traslado de trabajadores a otro puerto y autorizar las permutas que puedan solicitarse entre los inscritos en los diversos Censos dependientes de la misma Sección o Subsección.

6.ª Conceder o denegar a los trabajadores los permisos o licencias, excedencias o ceses que por aquéllos se soliciten, y organizar los turnos de vacaciones.

7.ª Confeccionar el Censo de empresas autorizadas para dedicarse a las faenas portuarias, y resolver las solicitudes de ingreso en dicho Censo, pudiendo comprenderse entre los requisitos exigidos a ese fin la constitución de fianza adecuada, aval bancario o comercial, o aquellas otras medidas de garantía tendientes a asegurar a los trabajadores el percibo de sus salarios y el ingreso de las cuotas y recargos sociales correspondientes.

8.ª Dictar, de acuerdo con las disposiciones del Reglamento particular del puerto, las normas necesarias para organizar, dirigir y realizar la colocación diaria de trabajadores, conforme a las peticiones numéricas o nominales que, según los casos, formulen las empresas.

9.ª Autorizar la no rotación de trabajadores especializados, cuando el escaso número de éstos o la naturaleza o peligrosidad de determinadas mercancías aconseje la adopción de esta medida especial.

10. Conocer, por informe del Secretario de la Sección o Subsección, los casos en que se haya apreciado la fuerza mayor a efectos de aplicación de la media jornada, y para efectuar horas extraordinarias con carácter obligatorio.

11. Obtener del Secretario de la Sección o Subsección los informes que la Comisión considere oportunos para el conocimiento de las condiciones o circunstancias en que se hayan desarrollado determinadas faenas portuarias.

12. Organizar ciertas operaciones o servicios relacionados con los trabajos portuarios, en defecto de empresas o Junta de Obras.

13. Acordar la distribución y disponer el abono a los trabajadores, con cargo a los respectivos fondos: a) Las gratificaciones de 18 de julio y Navidad; b) El importe de las vacaciones retribuidas; c) El plus familiar; d) Cualquier otro de análoga naturaleza que pueda establecerse.

14. Otorgar premios a los trabajadores que se hayan hecho merecedores de tal distinción, debiendo proponer a la Sección Central la concesión de aquellos que sean de índole económica, tales como entrega de cantidades en metálico, viajes con finalidad cultural, etc.

15. Proponer al Jefe de la Sección las sanciones que deban imponerse a los trabajadores por faltas graves y muy graves cometidas en el trabajo. En el caso de que el Delegado de Trabajo presida la reunión en al que se debatan medidas de esta naturaleza, deberá abstenerse de intervenir ni votar en el acuerdo que se adopte.

Art. 26. Estarán comprendidas entre las funciones que corresponden a la Comisión de Previsión y Asistencia Social las siguientes:

1.ª Realizar cuantas funciones les atribuya el Régimen de Previsión de los trabajadores portuarios, de acuerdo con las disposicio-

nes vigentes o las que posteriormente puedan dictarse.

2.ª Fijar las directrices a seguir por los servicios administrativos de la Sección o Subsección, para practicar, tanto a empresas como a trabajadores, las liquidaciones que procedan por cuotas de Seguros Sociales, de accidentes del trabajo, subsidio familiar, seguro de vejez, seguro de enfermedad, cuota sindical, Montepío o Caja de Previsión y aquellas otras de carácter obligatorio o voluntario que puedan establecerse.

3.ª Acordar el pago, con cargo al Presupuesto del Servicio, de la indemnización a los trabajadores "preferentes" y "complementarios", establecida por el Decreto de 2 de marzo de 1944, para el caso de fallecimiento debido a causa natural; así como el abono del 50 por 100 del salario que a aquéllos corresponde en caso de enfermedad justificada, en consonancia con lo preceptuado en el artículo 68 de la vigente Ley de Contrato de Trabajo.

4.ª Proponer al Delegado de Trabajo el salario real de los trabajadores portuarios que para cada año deba fijar dicha Autoridad laboral, de acuerdo con lo establecido en la Orden de 27 de julio de 1949 y disposiciones posteriores y complementarias (Ref. 189/49).

5.ª La dirección y gestión del Seguro de Enfermedad de los trabajadores portuarios cuando se practique directamente por la Sección o Subsección, de conformidad con las normas que a propuesta de la Junta Rectora se hayan aprobado por la Jefatura del Servicio.

6.ª La dirección y gestión de las prestaciones derivadas de la incapacidad temporal por accidentes del trabajo, en el caso de que la Sección o Subsección asuma dicho riesgo, de conformidad con las normas que a propuesta de la Junta Rectora se hayan aprobado por la Superioridad.

7.ª La dirección y gestión del régimen de prestaciones complementarias de previsión que a propuesta de la Junta Rectora se hayan autorizado en el puerto con carácter obligatorio o voluntario.

8.ª Constituir los comités de Seguridad e Higiene, cumpliendo y haciendo cumplir las normas que por los mismos se fijen.

9.ª Disponer, dentro del crédito presupuestario anual concedido por la Subsecretaría a cada Sección Provincial para tales fines y con la obligada justificación del gasto realizado, la adquisición y entrega a los trabajadores de los elementos de protección personal que aquellos precisen, en razón a las condiciones en que tengan que efectuar las faenas y naturaleza de las mercaderías que en cada puerto se manipulen.

10. La administración, siguiendo las normas que al efecto dicten por la Subsecretaría, de las viviendas construidas o adquiridas por el Servicio con destino a los trabajadores, así como la de los demás inmuebles que sean propiedad del mismo y que se hallen dentro de la demarcación de cada Sección o Subsección.

11. Organizar cursos o conferencias para la capacitación y especialización de los trabajadores, en su triple aspecto social, cultural y profesional.

12. Velar por la conservación y sostenimiento de los servicios asistenciales establecidos en cada puerto a propuesta de la Jun-

ta Rectora en Pleno, y que se enumeran en el apartado 15 del artículo 23 de esta Orden.

13. La concesión de becas de estudios y formación profesional de los trabajadores portuarios y a los hijos de éstos, previa aprobación del oportuno gasto por la Jefatura del Servicio.

14. La subvención e instituciones que tiendan a favorecer el desarrollo espiritual y cultural de los trabajadores portuarios y sus familias, previa aprobación del oportuno gasto por la Subsecretaría.

Art. 27. Dentro de las cuarenta y ocho siguientes a su celebración deberá remitirse a la Sección Central del Servicio y a la Delegación de Trabajo copia del Acta o proyecto de Acta de la sesión celebrada por la Junta Rectora, en Pleno o en Comisión permanente, sin que en caso alguno deba suspenderse dicho envío hasta la aprobación de aquéllas en reunión posterior.

Art. 28. El Delegado de Trabajo, Jefe de la Sección Provincial de Trabajo Portuario, podrá ejercer el derecho de veto a cuantos acuerdos se adopten por la Junta Rectora, en Pleno o en Comisiones permanentes, en los siguientes casos:

a) Cuando tales acuerdos vulneren las disposiciones del Reglamento nacional o particular de cada puerto o sus normas complementarias o aclaratorias.

b) Cuando puedan lesionar los intereses de los trabajadores, de las empresas, del propio puerto, de la navegación o de la economía nacional.

Se considerarán válidos los acuerdos si transcurrido el plazo de tres días a partir del de la fecha de recepción del acta o proyecto de acta en la Delegación de Trabajo no se hubiera ejercido el derecho de veto.

Cuando el Delegado de Trabajo hiciera uso de la facultad que este artículo le confiere, lo pondrá en conocimiento de la Jefatura del Servicio en término de tercer día, considerándose ratificada si en el plazo de diez días hábiles, contados a partir de la entrada del expediente en la Sección Central, no resolviese en contrario el Ministerio o no pusiera reparos a la decisión adoptada.

Art. 29. Contra los acuerdos que adopte la Junta Rectora, en Pleno o en sus Comisiones permanentes, podrá interponerse recurso de alzada ante la Jefatura del Servicio, a través de la Delegación de Trabajo, en plazo no superior a diez días.

Art. 30. De los servicios administrativos de las Secciones Provinciales.—A las inmediatas órdenes del Delegado de Trabajo, Jefe de la Sección, y como órganos ejecutores de los acuerdos de las Juntas Rectoras, existirán los servicios administrativos actualmente establecidos o, en su caso, los que se determinen por la Subsecretaría.

Manteniendo la estructura fundamental de tres departamentos: Secretaría, Administración e Inspección de operaciones, el Reglamento particular de cada puerto determinará, según la importancia del mismo, la organización interna de los servicios administrativos, para el mejor cumplimiento de la misión que tienen confiada.

Igualmente formarán parte de la Sección administrativa los Representantes de la misma en aquellos puertos que por lo exiguo del Censo de trabajadores o características del

tráfico marítimo no consientan el establecimiento de una Subsección administrativa.

Art. 31. Corresponderá a los servicios administrativos de las Secciones o Subsecciones ejercer, entre otras que puedan atribuírseles, las siguientes funciones:

1.ª Cumplir y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta Rectora, en Pleno o en sus Comisiones permanentes, una vez que aquéllos sean firmes.

2.ª Practicar, tanto a empresas como a trabajadores, las liquidaciones que procedan, y de acuerdo con ellas ingresar en las respectivas cuentas, fondos u organismos, los recargos correspondientes a vacaciones, gratificaciones de 18 de julio y Navidad, plus familiar y administración, así como las cuotas de Seguros sociales, de accidentes del trabajo, subsidio familiar, Seguro de Vejez, Seguro de Enfermedad, cuota sindical, Montepío o Caja de Previsión y aquellas otras de carácter obligatorio o voluntario que puedan establecerse.

3.ª Cumplir y ejecutar cuantas normas se dicten por la Jefatura del Servicio, referentes al régimen económico y contable de las Secciones, Subsecciones y Representaciones.

4.ª Confeccionar la estadística mensual y redactar la Memoria anual, en la que se recojan cuantos datos y consideraciones se estimen convenientes, de conformidad con el cuestionario que se envíe por la Sección Central.

5.ª Llevar los Registros generales, expedientes y fichas laborales de los trabajadores, confeccionando por separado y de acuerdo con las normas que fije la Comisión de Régimen Laboral, las listas censales, por categorías y grupos profesionales, así como la "Lista de llamamiento", única o por especialidades o zonas portuarias.

6.ª Confeccionar, autorizar y repartir entre los trabajadores portuarios la Cartilla profesional o documento de identidad, conforme al modelo que establezca la Subsecretaría.

7.ª Apremiar la fuerza mayor en los casos de aplicación de la media jornada y para efectuar horas extraordinarias con carácter obligatorio.

8.ª Vigilar la ejecución de las distintas faenas portuarias, sin perjuicio ni menoscabo de las facultades que a las empresas correspondan en orden a la organización del trabajo.

Art. 32. Al frente de los servicios administrativos de cada Sección o Subsección habrá un Secretario, que ejercerá las siguientes funciones:

a) Organizar, dirigir y distribuir entre el personal de los servicios y trabajos de la Sección o Subsección, de acuerdo con las normas dictadas por el Delegado de Trabajo.

b) Resolver y firmar todos aquellos asuntos de trámite cuando la naturaleza de los mismos no exija el conocimiento del Jefe de la Sección o de la Junta Rectora.

c) Informar o proponer a la Presidencia, para que por ésta se someta a la Junta Rectora, la adopción de todas aquellas medidas que tiendan al mejoramiento de los servicios.

d) Resolver todas las incidencias que puedan plantearse en relación con los trabajadores portuarios, siempre que la naturaleza reglamentaria de aquéllas no exija el previo

acuerdo de los Organos rectores ni la autorización expresa del Jefe de la Sección.

e) Imponer a los trabajadores, sin que sea necesario la incoación de expediente, las sanciones que correspondan por faltas leves cometidas en el trabajo.

f) Dar cuenta en cada reunión del Pleno o de las Comisiones permanentes de la Junta Rectora de los asuntos tramitados desde la última sesión por los Servicios administrativos, y forma como han sido ejecutados los acuerdos emanados de dichos Organos rectores.

g) Someter al despacho y resolución del Delegado de Trabajo aquellos asuntos que reglamentariamente a éste correspondan, formulando en los expedientes las propuestas que considere oportunas, con vista de los informes emitidos.

h) Todas aquellas otras funciones que, en cumplimiento de disposiciones vigentes o por acuerdo o delegación de la Junta Rectora, le sean expresamente atribuidas.

Art. 33. Además de las funciones enumeradas en el artículo anterior, que afectan de igual forma a los Servicios administrativos de las Secciones y Subsecciones, corresponderá al Secretario de las primeras velar por el cumplimiento de las normas dictadas por la Jefatura del Servicio para la regulación económica y contable de éste, en todos aquellos casos en que se determine concentrar en la Sección Administrativa Provincial cuentas y fondos que por su naturaleza no deban estar disgregados.

Art. 34. Del personal del Servicio de Trabajos Portuarios.—Corresponderá al Subsecretario, tanto en los servicios centrales como provinciales y locales, el nombramiento del personal, su separación, imposición de sanciones, concesión de premios, traslados, licencias y, en general, la adopción de cuantas medidas afecten a los empleados y subalternos del Servicio, todo ello de acuerdo con las normas de esta Orden y las que reglamentariamente se encuentren en vigor.

1. El Inspector General-Jefe será designado libremente entre empleados del Servicio que ostenten la categoría de Jefe Administrativo de primera clase.

2. Los Inspectores adscritos a la Inspección General serán libremente nombrados y separados, pudiendo recaer dicho nombramiento en empleados de la plantilla del Servicio o en personas ajenas al mismo, siempre que se hayan destacado por su preparación social y conocimientos portuarios.

Cuando la designación recaiga en un empleado del Servicio, al cesar en el cargo, a no ser en virtud de expediente disciplinario, el interesado se reintegrará al ejercicio de aquellas funciones que correspondan a la categoría que dentro del Escalafón tenga personalmente reconocida.

Los Inspectores percibirán en concepto de gratificación las asignaciones señaladas para las categorías de Jefes Administrativos de segunda o tercera clase, según se les atribuya funciones de índole general o especiales de carácter técnico, caso de que el designado no sea empleado del Servicio, o la posible diferencia que pueda existir entre sus haberes y los de las indicadas categorías, en el supuesto de que el nombramiento recaiga en personal de plantilla.

3. El Jefe de la Sección Central podrá o no pertenecer al Escalafón del personal del Servicio de Trabajos Portuarios, pero en todo caso deberá ser funcionario de alguno de los Cuerpos Técnicos del Ministerio de Trabajo, con categoría de Jefe de Administración o asimilado.

4) Los Secretarios, Administradores, Inspectores de Operaciones, Cajeros y Vigilantes de Operaciones, de las Secciones o Subsecciones, serán libremente nombrados y separados, a propuesta del Delegado de Trabajo, Jefe de la Sección Provincial, entre empleados y subalternos, según los casos, del Servicio, percibiendo en concepto de gratificación, en el supuesto de que así proceda, la diferencia que pueda existir entre los haberes que por su situación en el Escalafón le correspondan y los que para el cargo que pase a desempeñar se hayan fijado reglamentariamente.

Al cesar en cualquiera de los cargos enumerados en el presente apartado, a no ser en virtud de expediente disciplinario, el interesado se reintegrará al ejercicio de aquellas funciones que correspondan a la categoría que dentro del Escalafón, tenga personalmente reconocida.

5) Cuando las Representaciones de las Secciones Provinciales que se mencionan en el último párrafo del artículo 30 de esta Orden no estén desempeñadas por empleados o subalternos de los Escalafones de l Servicio, la designación de Representante se ajustará a los siguientes preceptos:

a) No tendrán, a efecto alguno, la consideración de empleados del Servicio.

b) La Subsecretaría fijará discrecionalmente, con carácter temporal o permanente y en cuantía fija o variable, según las características de cada puerto, la cantidad que como mandatario debe percibir el Representante por su gestión, así como la indemnización asignada al mismo para compensar los gastos de alquiler de local, mobiliario y útiles de oficina, limpieza, correo, etc.

c) El cese de un Representante podrá acordarse en cualquier momento, a propuesta del Jefe de la Sección Provincial, pudiendo modificarse al comienzo de cada ejercicio económico la asignación que viniese percibiendo.

Art. 35. Salvo los casos previstos en los apartados 2, 3 y 5 del artículo anterior todo el personal del Servicio, adscrito a la Inspección General, Sección Central o cualquier Sección o Subsección administrativa, se integrará, según la naturaleza de sus funciones, en el Escalafón General de empleados administrativos o en el de subalternos.

Art. 36. El Escalafón general de empleados administrativos comprenderá las siguientes categorías:

A) Jefes Administrativos de primera, segunda y tercera clase.

B) Jefes de Negociado de primera, segunda y tercera clase.

C) Oficiales de primera, segunda y tercera clase.

El Escalafón General de subalternos se subdividirá en las categorías de Subalternos de primera, segunda y tercera clase.

Art. 37. 1) El ingreso en el Escalafón de Empleados administrativos se efectuará por las categorías de Oficial de tercera clase, Jefe de Negociado de tercera clase y Jefe Administra-

tivo de tercera clase, de conformidad con lo que se establece en los apartados 4) y 5) de este artículo.

2) Todas las vacantes que se produzcan en las categorías de Oficial de primera y segunda clase, Jefe de Negociado de primera y segunda clase, y Jefe Administrativo de segunda clase corresponderán al ascenso por rigurosa antigüedad, de los comprendidos en la categoría inmediata inferior, dentro del Escalafón General de Empleados.

3) Las vacantes de Jefes Administrativos de primera clase se proveerán, por libre elección del Subsecretario, entre los Jefes Administrativos de segunda y tercera clase corresponderán al ascenso por desfavorable en su expediente personal.

4) En las categorías de Jefe de Negociado de tercera clase y Jefe Administrativo de tercera clase, de cada tres vacantes que se produzcan, la primera corresponderá, en ascenso por antigüedad, al que ocupe el número uno de la categoría inmediata inferior, previo examen de aptitud; la segunda, al ascenso por concurso de méritos y prueba de capacidad, entre los comprendidos en dicha categoría inferior, y la tercera, a concurso-oposición libre, en el que se exigirán las condiciones y títulos que reglamentariamente se determinen.

En todo caso, el ascenso, por antigüedad o concurso, a las categorías que en el párrafo anterior se mencionan, no podrá otorgarse a quien tenga alguna nota desfavorable en su expediente personal.

5) En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de 15 de julio de 1952, se reservará a la "Agrupación temporal militar para servicios civiles", el 50 por 100 de las vacantes que se produzcan en la categoría de Oficiales de tercera clase, cubriéndose el resto en la forma que por el Reglamento del Servicio se señale.

Art. 38. 1) El ingreso en el Escalafón General de Subalternos se efectuará por la categoría de Subalternos de tercera clase, de conformidad con lo que se establece en el apartado 4) de este artículo.

2) Todas las vacantes que se produzcan en la categoría de Subalterno de primera clase corresponderán al ascenso, por rigurosa antigüedad, de los comprendidos en la categoría inmediata inferior, dentro del Escalafón General de Subalternos.

3) En la categoría de Subalterno de segunda clase, de cada dos vacantes que se produzcan, la primera corresponderá, en ascenso por antigüedad, al que ocupe el número uno de la categoría de Subalternos de tercera, previo examen de aptitud, y la segunda, al ascenso por concurso de méritos y prueba de capacidad, entre los comprendidos en dicha categoría inmediata inferior.

En todo caso, el ascenso, por antigüedad o concurso, a la categoría de subalterno de segunda clase no podrá otorgarse a quien tenga alguna nota desfavorable en su expediente personal.

4) En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de 15 de julio de 1952, el 80 por 100 de las vacantes de Subalterno de tercera clase se reservará al personal comprendido en la invocada Ley, cubriéndose el resto por concurso libre, en la forma que reglamentariamente se determine.